

N.º 123 / Julio 2026

Documentos de Trabajo

Argentina ante el escenario económico global

Documento de Trabajo CARI-KAS

CARI /

 **KONRAD
ADENAUER
STIFTUNG**

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales

Documentos de Trabajo

N.º 123

Julio 2026

ISSN 1668-933X

**Proyecto desarrollado con el apoyo de la
Fundación Konrad Adenauer en Argentina**

**Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusiva
responsabilidad de los autores y no reflejan ni la visión de
las instituciones a las que pertenecen, ni la del CARI, ni la
de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina.**

Coordinación general CARI: Gustavo Martínez y Pablo Ava

Coordinación general KAS: Nadia Aguado Benítez

Corrección: Roxana Carbone

Diseño: Mario Modugno

Imagen de tapa: iStock.com/metamorworks

**CARI Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
Uruguay 1037, piso 1º, C1016ACA Buenos Aires, República Argentina
Teléfono: (+5411) 4811-0071 al 74 / Fax: (+5411) 4815-4742
Correo electrónico: direccioneditorial@cari.org.ar
Sitio web: www.cari.org.ar**

Argentina ante el escenario económico global

Documento de Trabajo CARI-KAS

ÍNDICE

Agradecimientos.....	5
I. Introducción.....	6
II. Relaciones de la Argentina con Estados Unidos	9
José Octavio Bordón.....	9
Beatriz Nofal.....	14
Elsa Llenderrozas.....	25
Juan Miguel Massot.....	32
Carolina Zaccato.....	35
III. Relaciones de la Argentina con Europa	46
Cornelia Schmidt-Liermann.....	46
Lucas Chiodi	52
Susanne Käss.....	54
Renato Carlos Sersale di Cerisano	57
Patricio Dellagiovana	65
IV. Relaciones de la Argentina con Asia.....	72
Jorge Malena Lía Rodríguez de la Vega	72
Sabrina Olivera	74
Gabriela Yoshihara.....	78
Alicia Romero Moreno	80
Diego Cagliolo	84
Clara Sánchez.....	86
Silvana Barrios	89

Nadia Radulovich.....	90
Julio Sevares	93
Rodolfo Caffaro Kramer	96
V. Relaciones de la Argentina con América Latina.....	99
Josefina Vecino Beauge	99
Miranda Bandoni	101
Juan Maximiliano Moreno	104
Bruno Binetti	107
Tomás Múgica	110
Pablo Ava	113
Conclusión	117
Referencias	120
Los autores	121

Agradecimientos

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) desea expresar, en primer lugar, su agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina por el apoyo brindado a este proyecto. En segundo lugar, nuestro reconocimiento especial a todos aquellos expertos que, en las diferentes instancias de consulta de este ejercicio, han tomado tiempo de sus actividades para discutir con nosotros cuestiones importantes para elaboración final de este informe: Manuel Alfonso, Miranda Bandoni, Silvana Barrios, Bruno Binetti, José Octavio Bordón, Rodolfo Caffaro-Kramer, Diego Cagliolo, Lucas Chiodi, Elsa Llenderrozas, Patricio Dellagiovana, Susanne Käss, Jorge Malena, Juan Miguel Massot, Juan Maximiliano Moreno, Tomás Múgica, Beatriz Nofal, Sabrina Olivera, Nadia Radulovich, Lía Rodríguez de la Vega, Alicia Romero Moreno, Clara Sánchez, Cornelia Schmidt-Liermann, Renato Carlos Sersale di Cerisano, Julio Sevares, Josefina Vecino Beauge, Gabriela Yoshihara, Carolina Zacatto y, en particular, a Pablo Ava por su rol de compilador.

Finalmente, agradecemos también a Gustavo Martínez y Nadia Aguado Benítez por su trabajo de coordinación general, a Katia Gavric Berrios, Lucas Carone y Stefano Boubeta por la coordinación de las diferentes reuniones de trabajo, y a nuestro equipo de voluntarios por la confección de las relatorías: Lautaro Larralde, Maiza Mohuanna Asef, Facundo Mosovich, Valentina Peretta, Catalina Skere, Victoria Teruel y Mason Zea.

Argentina ante el escenario económico global

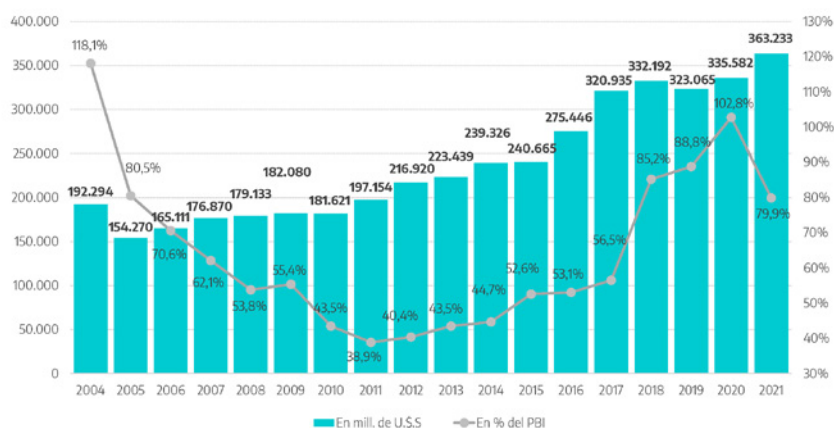
I. Introducción

Con el objetivo de describir la actualidad del posicionamiento de la Argentina ante el nuevo escenario económico global, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y la Fundación Konrad Adenauer han impulsado una serie de presentaciones de expertos en el marco del proyecto “*Posicionamiento de la Argentina ante el escenario económico global*”. Estas presentaciones forman parte del presente volumen, según el siguiente orden: las relaciones de Argentina con Estados Unidos, las relaciones de la Argentina con Europa, las relaciones de Argentina con el sudeste asiático y, finalmente, las relaciones de la Argentina con América Latina.

Para analizar la política exterior Argentina en el actual escenario económico global, es necesario mencionar una serie de condicionalidades en las cuales esta política se desarrolla. La principal condicionalidad es que se vuelven difusos los límites entre la política exterior y la política económica exterior. La agenda internacional es, principalmente, y para países como la Argentina, una agenda económica, comercial y financiera que sigue el ritmo de la economía local, en particular la macroeconomía. Esta agenda va a tener una fuerte correlación con la agenda de política interior, con las políticas económicas del país, con sus fortalezas y debilidades comerciales dependientes fuertemente de las *commodities*, y en particular su dependencia financiera internacional en cuanto a la demanda de divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda y a las importaciones. La deuda externa es una constante que condiciona el desarrollo, y hace atravesar al país ciclos de crisis y de recuperación.

Fuente: Secretaría de Finanzas, 2022.

Evolución de la Deuda Bruta de la Administración Central



La política económica dependerá de la política interna y de una estructura propia del sistema internacional que también la condiciona:

Las estructuras parecen ser estáticas porque a menudo duran largo periodos. Incluso, cuando no cambian, son dinámicas y no estáticas, porque alteran la conducta de los actores y afectan el resultado de sus interacciones. Dada una estructura durable, se torna fácil pasar por alto los efectos estructurales porque son repetidamente iguales. Así uno espera que el mismo rango amplio de resultados se produzca a partir de las acciones de los Estados en una situación anárquica. Lo que continúa y lo que se repite o es, por cierto, menos importante que lo que cambia (Waltz, 1979, p. 105)

Un ejemplo de esta situación es la actual discusión sobre la política exterior de los EE. UU., en la que el presidente Trump ha llevado al campo de las relaciones internacionales su principal agenda de política local: expulsión de migrantes, aumento de barreras arancelarias e intervenciones económicas directas, ya sea para ayudar o para sancionar a países como Argentina o Brasil.

En este marco es donde debemos entender lo que podemos llamar la naturaleza pendular de la política exterior argentina, provocada por sus cambios por factores internos y sus alineamientos por factores estructurales: el paso de un sistema internacional bipolar a un sistema hegemónico, luego a un debilitamiento de esa hegemonía junto con los sistemas multilaterales surgidos en la posguerra, y finalmente a un nuevo escenario multipolar, pero con menos actores y todos alrededor del nuevo conflicto central de EE. UU. versus China. La Argentina recorrió todos esos caminos, como veremos a continuación, intentando integrarse al mundo, participando de los grandes acuerdos internacionales en torno a la economía de Bretton Woods, pero también en las corrientes integracionistas de los grandes espacios comerciales teniendo como modelo a la Unión Europea en la década de los 80, un alineamiento con los EE. UU. en los 90, un giro a comienzos de siglo que colocó al país en un frente integrado por países de la región, para finalizar con un nuevo alineamiento con los EE. UU. primero de base pragmática y luego de base ideológica en la presente década.

II. Relaciones de la Argentina con Estados Unidos

José Octavio Bordón

Hay dos convicciones para poner a prueba, corroborar y, sobre todo, falsear si la realidad o análisis más capacitados lo demuestran; este ejercicio es el que permite el avance del conocimiento. La primera es que estamos realmente en una transición y en una etapa integral de cambio que, para el tema bajo análisis, se resume como una etapa de “bipolarismo conflictivo no hegemónico”. Este carácter no hegemónico se debe no solo al entrelazamiento conflictivo entre las dos principales potencias —el cual resulta difícil de desatar para ambas—, sino también a que los países en general ya no adoptan alineamientos automáticos, aunque muestren mayor cercanía hacia uno u otro bloque, ni están impedidos de negociar entre sí. Paralelamente, existe un nivel extraestatal ocupado por los poderes fácticos —financieros, tecnológicos y empresas transnacionales— y por actores ilegales vinculados al delito y al narcotráfico, fenómenos que ya no son nacionales ni transnacionales, sino estrictamente globales.

La segunda convicción, propia de la política exterior argentina y aplicable a la región, es la centralidad de la relación con los vecinos más cercanos a través de la “bioceanidad del Cono Sur”. Desde esta perspectiva, la Argentina —como segundo país andino del continente, con una amplísima relación con Chile y un rol fundamental en el Atlántico Sur Occidental— proyecta su gravitación hacia la Antártida y los mares del sur. Al hablar del Cono Sur, la noción se extiende a toda Sudamérica, pero prioriza a los vecinos geográficos e históricos: los miembros plenos del Mercosur, Bolivia, y los países de la Alianza del Pacífico, fundamentalmente Chile y el Perú (este último, un actor histórico central pese a no compartir frontera física). Actualmente, se observa un giro en la política exterior que difiere de los inicios de la democracia, así como

de las gestiones de Menem y de Macri: una marcada falta de interés y de prioridad en la relación con las naciones vecinas.

La política exterior de Carlos Menem, si bien priorizó el acercamiento a Estados Unidos, nunca abandonó Europa y otorgó una prioridad especialísima a la relación con Brasil y Chile, dando continuidad a la línea trazada por el presidente Alfonsín; un rumbo que debería constituir una política de Estado. Actualmente, este esquema no diría que está en crisis, pero sí bastante desarticulado, y no solo por responsabilidad argentina. Recuperar esta prioridad es fundamental para nuestra política exterior. Incluso Mauricio Macri, cuya gestión buscó abiertamente mejorar los vínculos con Estados Unidos y Europa, realizó sus primeros tres viajes como presidente electo a la región. En un avión particular, antes de asumir, viajó a Brasil para entrevistarse con la presidenta Dilma Rousseff; luego se reunió en Chile con la presidenta Michelle Bachelet y aprovechó la oportunidad para encontrarse con Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. Más allá de las dificultades, la decisión de continuar y mejorar sustancialmente las relaciones con estos países vecinos fue una señal política importante.

En segundo lugar, existe una alta volatilidad en la región. El liderazgo actual de Lula da Silva difiere de sus mandatos anteriores; se observa una integración pragmática con los BRICS, bloque al que promovió la incorporación de la Argentina. En su estrategia convive la visión de jugar globalmente —sin encerrarse en Occidente— con la búsqueda de complementariedad. Sin embargo, ciertos movimientos y decisiones recientes se aproximan a sesgos más ideológicos que generen rispideces con algunos vecinos y, sobre todo, con Estados Unidos. En definitiva, este desorden y estas dificultades regionales no son una creación exclusiva de nuestro país, pero la Argentina ha abandonado de manera absoluta la prioridad estratégica con sus vecinos, más allá de atender cuestiones puntuales de la agenda. Es imperioso recuperar ese espacio.

Hoy en día existe lo que se puede denominar un bipolarismo conflictivo. Vivimos una volatilidad global vinculada a este conflicto general, pero que también responde a la gestión del presidente Donald Trump; considero que es objetivo y necesario señalarlo. Su política arancelaria, por ejemplo, no responde estrictamente a una lógica geopolítica tradicional. El presidente Trump no solo ha generado tensiones con países cercanos y socios comerciales estratégicos como Brasil, México y Canadá, sino también con aliados históricos de la talla de Japón, Corea del Sur y Australia. Estos últimos son actores clave en esquemas como el AUKUS o el Quad, y forman parte de alianzas estratégicas fundamentales con Washington. Por lo tanto, para un país como la Argentina —bajo cualquier signo político y, en particular, bajo la administración actual— es válido capitalizar las relaciones personales estrechas del presidente Javier Milei con Donald Trump —con quien comparte ciertos valores, aunque difieran en materia de política económica— o la proximidad con Israel. Sin embargo, una cosa es mantener excelentes relaciones bilaterales con Estados Unidos y con Israel, y otra muy distinta es que nuestra política exterior esté condicionada de forma excesiva por la sintonía con los circunstanciales mandatarios de esos países, Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Este es un punto central que requiere análisis y profundización, sin desmedro de lo expuesto anteriormente. En primer lugar, cabe observar un dato relevante para la agenda hemisférica: la realización de la conferencia conjunta entre el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) y la Conferencia de Defensa de América del Sur (SOUTHDEC), un encuentro coorganizado de manera bilateral, reeditando el antecedente de 2018 entre la Argentina y los Estados Unidos. Claramente, esta instancia representa una prioridad de la política exterior de Washington; resta evaluar cómo será el comportamiento de los otros actores regionales. Brasil, por ejemplo, ya ha suspendido en su momento instancias bilaterales habituales con Estados Unidos en materia aeroespacial, priorizando otra serie de políticas soberanas.

A partir de este escenario, es necesario analizar cómo se articulan los intereses de seguridad internacional de los Estados Unidos con la lucha contra el narcotráfico, distinguiendo la situación de Venezuela —bajo un régimen dictatorial— de los casos de la Argentina y Brasil, en tanto sistemas democráticos. Si bien las actualizaciones normativas locales coinciden con el enfoque estadounidense respecto a que el eje de estas cooperaciones radica en cómo las Fuerzas Armadas y de seguridad marítima colaboran con las autoridades civiles frente al delito organizado, lo cierto es que subyace una clara articulación estratégica. En la actualidad, la seguridad internacional constituye una problemática global y prioritaria que la Argentina debe abordar de forma coordinada con la región, el sistema interamericano y los Estados Unidos, pero también con Europa y otros actores globales. Aunque los niveles de confianza e intensidad varíen según el interlocutor, este entramado de relaciones debe sostenerse de manera integral para combatir con eficacia el drama del delito, la inseguridad, el narcotráfico y el crimen transnacionalizado.

La Argentina enfrenta hoy el desafío político de transformar la esperanza, que actualmente moviliza a una parte importante de la población, en confianza; dos conceptos que no implican lo mismo. En el plano económico, esto exige transitar de la mera estabilización hacia un crecimiento genuino, traccionado por la inversión y por una distribución del ingreso que no siempre es fácil de armonizar. En este sentido, se vuelve indispensable analizar con precisión los pragmatismos integrales. Una relación exterior sólida con los Estados Unidos no se construye exclusivamente en Washington: la existencia de cincuenta estados federales implica una multiplicidad de intereses diversos. No es equivalente negociar con Washington que hacerlo con un actor como China, donde rige un capitalismo con un fuerte control del Estado. En las democracias occidentales, si bien la libertad del sector empresarial no es absoluta, los márgenes de autonomía privada son sumamente amplios. Por lo tanto, comprender a fondo estas diferencias estructurales es fundamental para evitar

tanto conflictos innecesarios como expectativas desmedidas respecto de nuestro vínculo con los Estados Unidos.

Más allá de las particularidades del vínculo con los Estados Unidos, se encuentran en juego las relaciones estratégicas con Brasil, por ejemplo, en el sector automotor. Brasil no solo integra los BRICS, sino que está desplegando una alianza automotriz con China en materia de electromovilidad que no tiene paralelo con la Argentina ni con otros mercados de la región. Esto representa una fuente de preocupación no solo para la industria estadounidense —incluidas empresas como Tesla—, sino fundamentalmente para el futuro industrial argentino. Por lo tanto, estas son agendas complejas que deben trabajarse de manera coordinada con Brasil y el resto de los vecinos, al igual que los acuerdos en materia nuclear o la alianza conjunta para la seguridad en el Atlántico Sur. Se trata de ejes fundamentales que los institutos de investigación y las cancillerías deben abordar: no podemos permitir que las rispideces ideológicas coyunturales entre mandatarios deterioren objetivos estratégicos de largo plazo.

Asimismo, se requiere un enfoque integral respecto de China. Al igual que ocurre con los Estados Unidos, el mercado chino ofrece amplias oportunidades comerciales más allá de las diferencias políticas, pero también presenta severas limitaciones estratégicas. Resulta imperioso comprender tanto las coincidencias como las dificultades de esta relación económica. Bajo esta premisa, plantear —como se hizo durante la administración anterior— que la Argentina podría constituir la “puerta de entrada” de Rusia en América Latina, denotó una falta de lectura geopolítica, ignorando incluso que la actual presidencia del Banco de Desarrollo de los BRICS está en manos de Brasil.

En conclusión, es necesario plantear un pragmatismo integral fundado en valores, sustentado en un análisis riguroso de la realidad internacional en sus múltiples dimensiones. En el escenario contemporáneo, un alineamiento automático con cualquier potencia resulta desfavorable para el desarro-

llo de una nación. La complejidad global exige administrar las relaciones de manera diferencial: se puede tener una mayor proximidad con ciertos actores en materia tecnológica, mientras que con otros prevalecen los intereses comerciales, la exportación de materias primas o la cooperación en los ámbitos espacial y aeronáutico. El propio ejemplo de las tensiones comerciales, las políticas impositivas y las sanciones de los Estados Unidos hacia Brasil demuestra cómo las agendas bilaterales oscilan de forma permanente entre la coincidencia de intereses y las discrepancias.

Si bien la relación actual de la Argentina con los Estados Unidos no es conflictiva, carece de realismo y de creatividad, un diagnóstico que puede hacerse extensivo a nuestro vínculo con China. Una inserción internacional estratégica nos obliga a proyectar la mirada hacia actores emergentes como la India o Indonesia, y a redefinir cómo nos vinculamos con Europa y con Medio Oriente. El gran desafío de nuestra política exterior radica, en definitiva, en comprender con mayor profundidad la relación con nuestros vecinos y, a partir de allí, definir con claridad el tipo de vínculo estratégico que deseamos construir con los Estados Unidos.

Beatriz Nofal

Es importante analizar el contexto internacional para una mejor comprensión de la agenda bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Trump asumió su segundo mandato en un mundo más tensionado geopolíticamente y con riesgos de fragmentación geoeconómica. Esto, además, en un mundo atravesado por la transición energética, las disrupciones del cambio tecnológico acelerado y la revolución de la inteligencia artificial (IA), y por la urgencia y el desafío de avanzar en la mitigación del cambio climático.

En este escenario internacional, se evidencian algunas claras continuidades. El orden global se encuentra tensionado principalmente por la rivalidad estratégica y la transición

hegemónica entre los Estados Unidos y China. Asimismo, la segunda administración de Donald Trump ha profundizado el uso de la política comercial como herramienta de presión o coerción. Un hito central de esta estrategia fue el anuncio, el 2 de abril, del denominado “Liberation Day”: una suba generalizada de aranceles del 10 % —que entró en vigor el 5 de abril— complementada con la imposición de gravámenes adicionales recíprocos a China, Europa, la India, Sudáfrica, Corea, Vietnam, Indonesia, Tailandia y otras naciones de Asia y África. Dicho anuncio desató una fuerte convulsión en los mercados de capitales internacionales y encendió las alarmas ante el riesgo de catalizar una guerra arancelaria de represalias mutuas, cuyas consecuencias directas apuntan a mayor inflación y menor crecimiento mundial, y, en el mediano plazo, de no revertirse, a una caída del comercio mundial.

El presidente Trump fundamentó la aplicación de estos aranceles recíprocos como una medida defensiva contra aquellos países a los que acusó de haber saqueado y expoliado a los Estados Unidos a través del comercio bilateral. El objetivo declarado de Washington es forzar el retorno de las cadenas globales de producción a territorio estadounidense, expandir el empleo manufacturero y, bajo la consigna “Make America Wealthy Again” (MAWA) —una variante del célebre axioma MAGA—, restaurar la riqueza de la nación. Si bien este giro proteccionista se presenta bajo el imperativo de la seguridad nacional y la contención de la amenaza china, la entrada en vigencia de los aranceles recíprocos el 7 de agosto evidenció otras motivaciones en América Latina.

El caso de Brasil es paradigmático: fue penalizado con un arancel del 50 %, uno de los más altos a nivel global, a pesar de registrar una balanza comercial deficitaria con los Estados Unidos, país que mantiene superávit bilateral ininterrumpido desde 2009, alcanzando los USD 6800 millones en 2024. Claramente, el fundamento en el caso brasileño no responde a una lógica económica o comercial, sino a una represalia de orden político, motivada por la situación judicial del expresidente

Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, quien se encuentra detenido bajo la acusación de planificar un golpe de Estado. Este episodio demuestra cómo la Casa Blanca instrumentaliza la política comercial como un arma geopolítica destinada a influir en los asuntos internos de soberanías extranjeras. En una línea similar, otros Estados enfrentan incrementos arancelarios o advertencias directas por razones estrictamente políticas: la India, debido a sus compras de petróleo ruso, y Canadá, bajo la amenaza de sanciones si la gestión de su primer ministro, Mark Carney, avanza en el reconocimiento del Estado palestino.

En el caso de la Argentina, el presidente Javier Milei declaró su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos ya desde la campaña electoral. Con posterioridad, ha manifestado de manera explícita que su administración se encuentra alineada políticamente tanto con Washington como con Israel, compartiendo plenamente el posicionamiento doctrinario del presidente Donald Trump.

Frente a este escenario, la pregunta fundamental que cabe formular respecto de la agenda bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina es la siguiente: ¿en qué medida este vínculo, y alineamiento con los Estados Unidos, aun siendo positivo en términos políticos y geopolíticos, podrá sostenerse a mediano plazo y traducirse en beneficios concretos en un contexto global que resulte desfavorable para los intereses nacionales de la Argentina? Formular este interrogante se vuelve imperioso, además, al proyectar la evolución del escenario económico mundial y orden internacional en el mediano plazo.

El contexto mundial contemporáneo exhibe una situación inédita en materia de proteccionismo que evoca la dinámica de la década de 1930. Se observa un marcado debilitamiento del orden comercial multilateral basado en reglas —construido tras la Segunda Guerra Mundial— y una transición hacia un modelo de bilateralismo transaccional, caracterizado por una profunda crisis de incertidumbre y de confianza. Asimismo,

mo, el sistema multilateral se encuentra amenazado por la implementación de políticas industriales activas en los países desarrollados que vulneran las normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Un orden internacional fragmentado y desprovisto de reglas claras resulta intrínsecamente desfavorable para la Argentina en tanto economía de tamaño medio, independientemente de los dividendos positivos que el alineamiento geopolítico con los Estados Unidos pueda reportar.

En la agenda bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos se destacan tres ejes principales. El primero de ellos es la seguridad en el hemisferio, una prioridad histórica para Washington en la región. En la actualidad, esta dimensión abarca de manera central la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Si bien la colaboración en esta materia ha sido una constante en la relación bilateral, la actual coyuntura evidencia un estrechamiento de los lazos en pos de la seguridad y la paz regional. En este marco, el rol de la Argentina como aliado importante extra-OTAN ha recobrado centralidad y, en consonancia con el alineamiento geopolítico de la administración local, ha facilitado la adquisición de armamento y equipamiento bélico por parte del Estado argentino.

Asimismo, el Atlántico Sur y la conectividad bioceánica adquieren una enorme relevancia geopolítica para los Estados Unidos. Los pasos naturales en el extremo austral sudamericano —el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle y el pasaje de Drake— constituyen encrucijadas clave en las rutas marítimas globales, tanto por su proyección hacia el comercio internacional como hacia el continente antártico. Ante una eventual interrupción del tránsito o un escenario de conflicto en el canal de Panamá, estas vías del Atlántico Sur se consolidan como las únicas alternativas de interconexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.

El segundo eje de la agenda bilateral, de un impacto marcadamente positivo, radica en el respaldo que los Estados Unidos —bajo la administración de Donald Trump— han brindado a la Argentina en materia económico-financiera. Este apoyo se tradujo, en primera instancia, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que culminó, en abril de 2025, con la firma de un acuerdo por USD 20.000 millones, cuyos desembolsos programados apuntan a fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Posteriormente, este alineamiento se ratificó durante la visita al país del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el 14 de abril de ese mismo año. Tras dicho encuentro, el secretario Bessent afirmó de manera pública que, ante un eventual escenario de desestabilización externa, Washington contemplaría la posibilidad de activar mecanismos de asistencia bilateral.

La solidez en el nivel de reservas internacionales del BCRA constituye un factor crítico para la economía de Argentina. Su disponibilidad resulta indispensable para mitigar perturbaciones externas o absorber ataques especulativos contra la moneda nacional derivados de eventuales caídas en las expectativas del mercado. Sin este resguardo, se pondría en riesgo la continuidad del programa de estabilización y desinflación que viene implementando la administración del presidente Javier Milei.

En este sentido, resultó sumamente auspicioso el anuncio realizado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el jueves 2 de octubre de 2025, respecto de un acuerdo orientado a asistir a la Argentina en un escenario de severa restricción de liquidez. El entendimiento contempló un mecanismo de intercambio de divisas (*swap* de monedas) entre el Tesoro estadounidense y el BCRA por un monto de hasta USD 20.000 millones, estructurado bajo la modalidad de un préstamo destinado a fortalecer las reservas internacionales de la autoridad monetaria local. Como garantía regulatoria, dicha facilidad financiera estuvo respaldada por las

tenencias de derechos especiales de giro (DEG) de la Argentina ante el FMI. Del *swap* de USD 20.000 millones, el BCRA utilizó solo USD 2500 millones y en diciembre de 2025 canceló completamente esa deuda.

Asimismo, el secretario Bessent informó que Washington intervendría de forma directa en el mercado de cambios local mediante la compra de pesos. Dicha operación, ejecutada en la misma jornada del 2 de octubre de 2025, propició una apreciación de la moneda nacional frente al dólar y contribuyó a estabilizar las variables financieras. Cabe destacar el carácter excepcional de esta medida: representó la cuarta ocasión desde 1996 en la que los Estados Unidos adquieren la divisa de un Estado extranjero.

Posteriormente, el 15 de octubre de 2025 —en la jornada subsiguiente a la reunión bilateral de Estado celebrada en Washington D. C. entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei junto a sus respectivos gabinetes—, el Tesoro de los Estados Unidos anunció una línea de financiamiento adicional, complementaria al *swap*, por hasta otros USD 20.000 millones, integrada por aportes de fondos soberanos y capitales privados. El propósito estratégico de esta ampliación fue la adquisición de títulos de deuda soberana argentina, lo que impulsó al alza la cotización de los bonos y generó una consecuente reducción del riesgo país. En paralelo, el mismo día 15 de octubre, el Tesoro estadounidense concretó una segunda intervención en el mercado cambiario a través de la compra de pesos y la venta de dólares, logrando contener las presiones sobre el tipo de cambio. Finalmente, el Gobierno de Argentina cerró un acuerdo de recompra de deuda (REPO) por USD 3000 millones, cuya estructuración y el aporte de capital privado fue liderado por J. P. Morgan (que aportó cerca de USD 340 millones), contando con el respaldo de entidades financieras internacionales de primera línea.

Este conjunto de medidas representa un respaldo histórico, inédito y expeditivo por parte de los Estados Unidos. Su propósito central fue mitigar las turbulencias y la volatilidad

que experimentaban los mercados financieros locales ante la perspectiva de un resultado adverso para la administración del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término. Cabe recordar que los mercados ya habían registrado alteraciones previas tras el revés electoral sufrido por el oficialismo en los comicios locales de la provincia de Buenos Aires. La inquietud de los mercados radicaba en que un escenario marcadamente desfavorable a nivel nacional dificultaría la capacidad del Poder Ejecutivo para avanzar en el sendero de reformas estructurales indispensables para consolidar la estabilidad macroeconómica y estimular el crecimiento de largo plazo.

En este contexto, durante las declaraciones a la prensa brindadas en el marco de la reunión bilateral, el presidente Donald Trump manifestó de manera explícita el apoyo de la Casa Blanca al cambio de rumbo económico de la Argentina y a su alineamiento geopolítico. Asimismo, el mandatario estadounidense supeditó de forma clara la continuidad y disponibilidad de este esquema de asistencia financiero-económica a la profundización del proceso de estabilización y reformas iniciado por la gestión de Milei.

En virtud de este escenario marcadamente positivo en materia económico-financiera, y bajo la premisa de que dicha dinámica logre sostenerse en el tiempo, resulta oportuno proponer que la agenda bilateral futura incorpore de manera estratégica la atracción de inversiones hacia la Argentina y el diseño de sus respectivos mecanismos de financiamiento, variables que constituyen el vector clave para impulsar un crecimiento económico genuino y de largo plazo.

El tercer eje prioritario de la agenda bilateral abarca la política comercial y el comercio bilateral, un área de indudable relevancia estratégica. Los Estados Unidos constituyen el tercer mercado de destino más importante para las exportaciones argentinas, ubicándose detrás de Brasil, que ocupa el primer lugar, y China, el segundo lugar.

En 2025, las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron los USD 8180 millones, y a Brasil los USD 12.783 millones. Asimismo, la composición sectorial difiere sustancialmente entre ambos destinos: mientras que el petróleo representó aproximadamente el 30 % de los envíos a los Estados Unidos —seguido por el oro como segundo rubro en importancia—, el 35 % de las exportaciones dirigidas a Brasil provinieron del sector automotor, evidenciando un perfil con mayor valor agregado.

En materia de inversión extranjera directa (IED), los Estados Unidos son el principal inversor en Argentina. En términos de stock, al 30 de septiembre de 2025, la posición pasiva bruta de IED estadounidense alcanzó los USD 32.038 millones, representando el 17,6 % del total, seguida por España (13,7 %) y Países Bajos (11,7 %).

El giro proteccionista de Washington alteró las condiciones de acceso al mercado. Como resultado de la suba generalizada de aranceles recíprocos dispuesta por la Casa Blanca, las importaciones provenientes de la Argentina quedaron gravadas con un arancel del 10 % (en una situación análoga a la de Chile). Asimismo, para el caso específico del acero y el aluminio, los Estados Unidos impusieron en junio de 2025 por la Sección 232 un arancel del 50 %, duplicando la tasa anterior que se ubicaba en el 25 %.

Con el propósito de ofrecer a Washington una reciprocidad arancelaria efectiva y negociar un acuerdo comercial bilateral que contemple un arancel cero —o significativamente reducido— para una serie de posiciones de interés estratégico, Argentina gestionó y logró aprobar, en el ámbito del Mercosur, una ampliación de la lista de productos exceptuados del Arancel Externo Común (AEC).

En este contexto internacional y regional, Estados Unidos y Argentina anunciaron la negociación de un acuerdo comercial en noviembre de 2025 y publicaron el texto del Acuerdo de Comercio e Inversiones Argentina-EE. UU. (ARTI) en fe-

brero de 2026. Argentina fue uno de los primeros países de América Latina en formalizar un acuerdo de este tipo con la nueva administración estadounidense. El acuerdo es amplio y multidimensional: abarca acceso a mercados, barreras no arancelarias, agricultura, propiedad intelectual, buenas prácticas regulatorias, trabajo, medioambiente, comercio digital, seguridad económica y nacional, prioridad de inversiones en minerales críticos y cooperación energética.

Sin embargo, el análisis detallado de lo negociado revela una diferencia significativa entre los compromisos asumidos por cada parte. Argentina obtiene una señal de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y reducciones arancelarias selectivas solo de los aranceles recíprocos sobre 1675 posiciones arancelarias, excepto la ampliación de la cuota de carne vacuna, y sin reducción de los aranceles NMF (nación más favorecida). Estados Unidos, por su parte, obtiene reducciones de arancel NMF en 241 posiciones arancelarias, de las cuales 221 se reducen a 0 % y 20 a 2 % más importantes cuotas de acceso a mercado con arancel cero (0) concentradas en agroindustria y alimentos procesados, y una cuota de vehículos automotores de gran porte, prioridad en minerales críticos y un conjunto sustancial de compromisos regulatorios en materia de comercio, propiedad intelectual, datos, seguridad e inversión.

El ARTI no modifica los aranceles NMF de Estados Unidos ni los aranceles aplicados en virtud de la Sección 232 (seguridad nacional), que afectan a sectores clave de las exportaciones argentinas. Tampoco resuelve diversas barreras sanitarias y fitosanitarias. Los sectores más perjudicados por los aranceles de la Sección 232 son los siguiente: aluminio y acero con aranceles del 50 %, automotriz con 25 % y farmacéutico con 100 % sobre patentados. Las exportaciones de estos sectores a Estados Unidos en 2025 sumaron USD 923 millones.

En realidad, la concesión más significativa y la única vigente actualmente, en julio de 2026, es la ampliación de mercado para la cuota de carne bovina de 20.000 toneladas anuales

a 100.000 toneladas anuales con arancel cero. Esta fue instrumentada mediante una proclamación presidencial, por un año, y por fuera del texto del acuerdo.

Esta diferencia de compromisos en el ARTI debe entenderse, principalmente, en el marco del apoyo financiero de los Estados Unidos al plan de estabilidad macroeconómica y de reformas orientadas al mercado. Como señalamos anteriormente, esto fue clave en el último trimestre 2025 (instrumentado a través un *swap* de hasta USD 20.000 millones para fortalecer las reservas del BCRA e intervenciones de Estados Unidos en el mercado cambiario de Argentina comprando pesos) a fin de estabilizar los mercados financieros de Argentina que estaban experimentando turbulencias y volatilidad ante la perspectiva que un resultado electoral desfavorable en las elecciones de medio término. Probablemente, una renovación del apoyo financiero de los Estados Unidos sea clave también en 2027, año de elección presidencial en Argentina.

En síntesis, esta diferencia en las obligaciones de cada parte es explicable por un conjunto de factores: el alineamiento geopolítico de Argentina con los Estados Unidos, el apoyo financiero recibido de los Estados Unidos al programa de estabilidad macroeconómica en 2025 y, asimismo, la sinergia entre varias de las obligaciones regulatorias asumidas por Argentina en el ARTI y su propia agenda de reformas y desregulación que apuntan en el sentido de la convergencia con Estados Unidos.

Los aranceles del “Liberation Day” fueron declarados luego ilegales por la Corte Suprema de los Estados Unidos (impuestos inicialmente bajo la Sección 201) el 20 de febrero de 2026. Después de ser reimpuestos en base a la Sección 122, fueron nuevamente declarados inválidos, el 7 de mayo de 2026, por la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, fundamentándolo en el hecho que Estados Unidos no enfrenta una crisis de balanza de pagos.

Esta incertidumbre respecto de la vigencia de los aranceles recíprocos es uno de los factores principales que en Estados Unidos ha demorado la entrada en vigor del Acuerdo ARTI. Por otra parte, en Argentina el acuerdo necesita la aprobación del Congreso, pero por ahora el Poder Ejecutivo no lo ha enviado para su tratamiento. Esto quizás a la espera que en Estados Unidos se resuelva.

En el caso de Brasil, si bien el impacto de los aranceles recíprocos de Trump en la economía brasileña parecería ser acotado, el principal riesgo es la retaliación del país vecino, lo que podría desatar una guerra comercial. Este impacto moderado se explica, en primer lugar, porque se exime, inicialmente, de los aranceles recíprocos casi 700 productos de Brasil entre los principales exportados a los Estados Unidos —incluido petróleo, aviones y partes, celulosa, jugo de naranja, fertilizantes y metales críticos— y, en segundo lugar, porque las exportaciones de café y carne vacuna que quedaron alcanzadas podrían redirigirse a China, que ya le compra la mayor parte de la carne vacuna, y a Europa, su mayor comprador de café.

En segundo lugar, el efecto sería acotado dado que, de un total de USD 337.000 millones exportados por Brasil en 2024, el principal mercado es China con una participación del 28 %, mientras que los Estados Unidos constituyen el segundo mercado con el 12 % del total de las exportaciones. La suba de aranceles dispuesta por los Estados Unidos podría reforzar la dependencia de China como principal mercado de exportación y la caída relativa de los Estados Unidos como destino.

Esto tendrá implicancias en el plano geopolítico, en un contexto internacional signado por la rivalidad estratégica entre los Estados Unidos y China. Dado que el mayor riesgo respecto de la respuesta de Brasil a los Estados Unidos es geopolítico, y a fin de evitar una escalada de la guerra comercial internacional, la Argentina debería tender puentes entre ambas naciones para contribuir a mitigar la medida y mejorar

la relación geopolítica de la región, teniendo en cuenta la relevancia estratégica que tiene Brasil para nuestro país.

Asimismo, es crítico en el diálogo sobre política comercial con los Estados Unidos conversar sobre la importancia para Estados Unidos, y para el orden internacional, de un sistema multilateral de comercio renovado y reformado. Este debe estar basado en reglas que nivelen la cancha de juego, tanto en materia de comercio como de inversiones, avanzar en la efectiva liberalización multilateral del comercio en el sector agrícola (establecida en el Art. 20 del Acuerdo de Agricultura de la OMC que permanece incumplido desde 1995) y penalizar efectivamente los varios incumplimientos de las reglas OMC y el oportunismo (*free-riding*). Un sistema multilateral de comercio así reformado y renovado es una pieza fundamental de un nuevo orden internacional basado en reglas, lo cual es clave para la prosperidad de Estados Unidos, de Argentina y del mundo.

Elsa Llenderrozas

A la luz de los acontecimientos políticos, militares y comerciales, es posible que el Gobierno del presidente Trump sea el principal factor de incertidumbre y de inestabilidad a nivel global. América Latina no es una prioridad principal para su administración en este momento. Estados Unidos mira, en primer lugar, cómo contener a China, pero la debilidad institucional y la fragmentación política de muchos países latinoamericanos facilitan esta agenda disruptiva de Washington en diferentes arenas y campos.

En ese contexto, la relación entre los Estados Unidos y la Argentina presenta prioridades divergentes según cada una de las partes. Corresponde, entonces, analizar desde la perspectiva estadounidense cuáles son los temas que dominan su agenda para la región y examinar cómo encaja la Argentina en esa lista.

Hay tres grandes temas que dominan la relación de los Estados Unidos con América Latina. En primer lugar, se encuentra la inmigración ilegal, una preocupación central que afecta directamente a países de América del Norte —particularmente a México— y a América Central. En este punto, la Argentina no encaja claramente en dicha problemática ni juega en esa línea de prioridades. El segundo tema prioritario es el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en todas sus formas, dado que este último ha ampliado su agenda de actividades, abarcando actualmente no solo el tráfico de drogas, sino también la trata de personas y el contrabando de armas. En tercer lugar, se ubica la contención de China y la corrección de los desequilibrios comerciales en la región. Estados Unidos busca apartar la creciente influencia de Beijing en América Latina, particularmente en Sudamérica, mediante una combinación de medidas diplomáticas, acuerdos preferenciales y tácticas unilaterales de negociación coercitiva o confrontación a través de aranceles y sanciones, las cuales contrastan con los enfoques más cooperativos aplicados tradicionalmente en otras regiones.

De estos tres temas, la inmigración es el único en el que la Argentina no comparte una agenda común, aunque tampoco representa un área conflictiva ni de enfrentamiento directo. En cambio, el retorno de la administración de Trump al enfoque tradicional sobre el narcotráfico y el crimen organizado impacta de manera diferenciada según el nivel de riesgo de cada país. México ocupa, evidentemente, el primer lugar debido a su frontera compartida y a los vínculos comerciales que se entrelazan en esa negociación. Asimismo, estimo que este enfoque avanzará hacia los regímenes dictatoriales de la región, como el caso de Venezuela, hacia donde el presidente Trump ya está desplegando buques y fuerzas armadas en aguas cercanas. Existe una intención clara de militarizar y retomar la perspectiva de la guerra contra las drogas utilizando recursos de defensa, una estrategia que ya ha aplicado frente a México.

En este escenario de fuerte presión hacia dictaduras como la de Venezuela —y que podría extenderse hacia Nicaragua—, la relación de Washington con las naciones que considera aliadas en esta lucha adquiere una dinámica distinta. Es allí donde entra en juego el respaldo estadounidense a los Gobiernos conservadores y la validación de una política de mano dura contra el crimen organizado. En este punto se inscribe la Argentina, a través de una cooperación más estrecha y del fuerte acercamiento que la Casa Blanca mantiene con el presidente Javier Milei; una afinidad que se extiende también al caso de Nayib Bukele en El Salvador, bajo la premisa de que representan un modelo de combate criminal muy cercano a la visión de los Estados Unidos.

En el caso puntual de la Argentina, ¿cuáles son los temas que componen la agenda del Gobierno estadounidense hacia nuestro país? En primer lugar, existe un foco muy especial en contener la presencia china, no solo en el campo económico-comercial, sino también en la explotación de recursos naturales y en el ámbito de la seguridad y la inteligencia. En este sentido, Washington continúa monitoreando la base de observación aeroespacial en Neuquén, busca evitar la construcción de un polo logístico en Tierra del Fuego e incluso vigila el posible control que Beijing pudiera ejercer sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay. Se trata de una agenda compleja vinculada a lo que los Estados Unidos consideran infraestructuras y recursos naturales críticos, donde se pretende contrarrestar e influir sobre la proyección de China en el territorio nacional.

En segundo lugar, se destaca la agenda de cooperación en defensa y seguridad en toda su amplitud. El reflejo de esto se encuentra en las sucesivas visitas que recibe la Argentina de distintas figuras del Pentágono, del Departamento de Defensa y de representantes de alto rango de las Fuerzas Armadas norteamericanas, quienes han realizado reiterados viajes a Tierra del Fuego, un punto geográfico donde el interés por monitorear dicha agenda ya es explícito.

Del lado argentino, las prioridades son distintas. En primer lugar, la Argentina posee una agenda externa todavía muy marcada por la vulnerabilidad financiera, la necesidad de recursos y financiamiento internacional, y la urgencia de resolver estos problemas de liquidez. De allí que requiera el respaldo de naciones clave como los Estados Unidos en el marco del Fondo Monetario Internacional, pero también necesite —y aquí es donde empieza a jugar el equilibrio— el apoyo de China a través del *swap* de monedas. Es por esto que, a pesar de los alineamientos planteados al comienzo de su gestión, el Gobierno de Milei debió realizar un giro más pragmático en su tratamiento hacia Beijing.

En cuanto a la relación con los Estados Unidos, a la condición de respaldo y apoyo financiero se le debe sumar el aval del Gobierno estadounidense en el juicio por la estatización de YPF. La Argentina está recibiendo en este litigio un apoyo muy importante, lo que la coloca hoy en una situación prioritaria en el trato bilateral, a lo que se añade la necesidad de avanzar hacia algún tipo de acuerdo comercial preferencial.

El segundo eje de la agenda es la cooperación activa en materia de seguridad, que involucra tanto a la cartera de Seguridad como al Ministerio de Defensa de la Argentina; reflejo de una visión más amplia e integral de la problemática. Existe un compromiso muy firme por parte del Ministerio de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado y, en este marco, reviste un gran interés la cooperación que brindan los Estados Unidos en áreas clave como inteligencia y control de fronteras.

El tercer tema clave en la relación bilateral —y que estimo no ha tenido tanta visibilidad pública— es la cuestión de Venezuela. Para la Argentina, esto abarca particularmente la situación de los refugiados venezolanos que se encontraban en nuestra Embajada en Caracas, la resolución de su custodia y la posterior liberación tanto de estos asilados como de ciudadanos argentinos detenidos de manera ilegal por motivos políticos en ese país. Entre ellos, destaca especialmente

la situación del gendarme Nahuel Gallo, una de las prioridades actuales de la Argentina en esta agenda bilateral. En este frente, el Gobierno local cuenta con un respaldo muy sólido de Washington y se espera que los Estados Unidos incorporen este caso en las negociaciones globales que mantienen respecto del intercambio de prisioneros.

Respecto de la Argentina, resulta evidente que existe un alineamiento muy explícito con los Estados Unidos e Israel. Sin embargo, este escenario difiere de lo sucedido durante la administración del presidente Carlos Menem, período en el cual la convergencia con Washington se complementaba con el interés por desarrollar simultáneamente el Mercosur. Aquella estrategia funcionaba como una suerte de equilibrio institucional, respaldada por los excelentes vínculos que la Argentina mantenía con Brasil y con Europa. En la actualidad, ese balance no se observa, y la situación se presenta más desbalanceada. Lo que queda claro es que para la gestión de Javier Milei no existen regiones prioritarias, sino países prioritarios, e incluso líderes políticos específicos con quienes se vincula por afinidad ideológica. Esta fuerte coincidencia doctrinaria y la consecuente adhesión a sus posturas generan, inevitablemente, un mayor distanciamiento con Brasil.

Este posicionamiento conlleva un costo, el cual se manifiesta incluso en los debates ideológicos que plantea el Gobierno argentino en los foros internacionales. La actual administración rechaza varios de los temas dominantes de la agenda multilateral —tales como el cambio climático, la perspectiva de género y las políticas de desarrollo sostenible—, una postura que coincide con ciertos sectores de los Estados Unidos, pero que nos distancia claramente de Brasil. En consecuencia, emerge un enorme desafío sobre cómo construir una agenda común con nuestro principal socio regional.

En la relación con los Estados Unidos también se observa un componente de sobreactuación. Ese alineamiento exhibe una carga de desmesura, particularmente notoria en los gestos desplegados en la Asamblea General de las Naciones

Unidas, en las votaciones de dicho organismo, en la reunión del G20 y en la Cumbre del Clima. Existe una coincidencia ideológica muy fuerte que se traduce en un estrecho seguimiento de las posiciones norteamericanas; una desmesura que, inevitablemente, traslada su costo a la relación con Brasil. Cabe recordar que este alineamiento incondicional renueva los recelos de Brasilia. Así ocurrió en la década de 1990, cuando la designación de la Argentina como aliado importante extra-OTAN generó una profunda desconfianza, particularmente en las Fuerzas Armadas y en el Gobierno brasileño. En la actualidad, ante un alineamiento de similar intensidad, el vínculo bilateral vuelve a resentirse y a alimentar esos históricos recelos.

A esto se suma que, para la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, la coincidencia ideológica de Milei tanto con Trump como con Jair Bolsonaro opera como un factor de interferencia directa. Ambos mandatarios mantienen vínculos estrechos con Bolsonaro y, además, es preciso recordar que la Argentina alberga a cerca de un centenar de ciudadanos brasileños que participaron en la ocupación de los tres poderes en Brasilia y que actualmente residen en territorio argentino. Este escenario introduce un ruido político de proporciones en el trato bilateral. No obstante, más allá de estas tensiones, hoy existe un punto de acercamiento fundamental: el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Este entendimiento constituye una ventana de oportunidad para aproximar posiciones y construir una agenda de colaboración en medio de un contexto signado por la desconfianza y la distancia ideológica.

Respecto de China, se observa en el Gobierno argentino una decisión y una mirada orientadas a actuar con un marcado pragmatismo, asumiendo que se trata de un socio comercial clave para el país. Sin embargo, el estricto alineamiento con los Estados Unidos genera una menor diversificación en la política exterior de la Argentina. En lugar de expandir nuestros vínculos, estos se reducen, lo que conlleva el riesgo de no

poder alcanzar un equilibrio en el marco de la rivalidad estratégica entre Washington y Beijing. Es por ello que emergen tensiones periódicas con China que resulta necesario balancear. En este escenario operan las denominadas “líneas rojas”, un concepto que implica aceptar el comercio y recibir inversiones en áreas no críticas, pero mantener una colaboración cada vez más estrecha con los Estados Unidos en materia de seguridad y cuestiones estratégicas. La premisa es no emitir señales que puedan interrumpir o poner en juego ese nivel de compromiso y cooperación en seguridad con Washington.

Pensando en las áreas de cooperación y en la agenda del futuro, el respaldo financiero continuará siendo una preocupación central para la Argentina. Lo mismo ocurre con las inversiones, un déficit estructural que nuestro país siempre busca revertir, aunque para ello se requeriría de los Estados Unidos una política más activa que actualmente no existe. Diversos autores documentan con precisión cómo China ha desplazado económicamente a los Estados Unidos en Sudamérica, en parte porque Washington priorizó otras regiones y en parte porque su sistema institucional funciona de manera diferente y no posee la facultad de dirigir el capital privado ni de ordenar a sus empresas que desplieguen un stock masivo de inversiones para recuperar el terreno perdido. En consecuencia, las expectativas en materia de inversiones norteamericanas parecen responder más a una expresión de deseos que a la viabilidad real de una agenda de ese tipo a futuro.

Finalmente, la evolución del crimen organizado constituirá un eje de trabajo clave y permanente en los próximos años. A medida que estas organizaciones diversifican sus actividades —abarcando el tráfico de cocaína, la minería ilegal y la trata de personas—, se incrementa el peligro de la infiltración en el poder político y los elevados costos económicos asociados. La Argentina está encendiendo luces de alerta en este tema y, por supuesto, requerirá cooperación internacional en la materia, aunque con el cuidado de evitar que se introduzca la perspectiva más militarizada en el combate al narcotráfico.

En este campo, resulta imperioso intensificar la cooperación enfocada en la inteligencia estratégica y en el control de activos financieros en el exterior.

La agenda de defensa y seguridad es más amplia, e incluye el reequipamiento de sistemas de defensa que se encuentran fuertemente desactualizados. En este punto, resulta evidente que la Argentina no se alejará de la esfera de los Estados Unidos para negociar, por ejemplo, con China.

Por último, un tema de gran riesgo en la actualidad es la discusión sobre el cambio climático, el cual se ha transformado en un desafío político y económico de primer orden; no por la agenda de protección ambiental en abstracto, sino por los riesgos concretos que implica. Recientemente, la región sufrió sequías, incendios e inundaciones gravísimas, como se evidenció en los casos de Porto Alegre y de Bahía Blanca, además del deterioro de rutas marítimas clave como el canal de Panamá. Ante la reiteración de estas situaciones críticas vinculadas al cambio climático, esta materia debe consolidarse como un eje de cooperación con los Estados Unidos para la obtención de recursos, medios y colaboración técnica que permitan enfrentar emergencias y catástrofes que, dada la situación crítica que atraviesa la región, ineludiblemente se repetirán.

Juan Miguel Massot

La siguiente presentación tiene cuatro secciones: la agenda bilateral entre Argentina y Estados Unidos; sus implicancias en relación con países como Brasil y China; la proyección futura de dicha agenda; y su aplicación en las recientes negociaciones financieras del país.

Desde una perspectiva general, se analizará la interrelación entre las agendas nacionales, considerando los enfoques particulares de cada país y explorando tanto sus confluencias como sus divergencias.

La agenda estadounidense se orienta prioritariamente hacia la seguridad y la preservación de su liderazgo frente a otras potencias. Esta estrategia abarca dimensiones como energía, alimentación, tecnología, salud, logística y defensa. En contraste, Argentina concentra sus esfuerzos en la política interna, condicionada por una persistente inestabilidad económica que restringe su participación en asuntos globales y limita su protagonismo en los principales temas de la agenda internacional.

En este marco, los puntos de contacto en la agenda bilateral tienden a alinearse con los intereses de Estados Unidos. En áreas como alimentación y sanidad, es marginal; en cambio, en cuestiones como seguridad regional, logística y exploración espacial, el diálogo es más estrecho. Ejemplos ilustrativos incluyen la seguridad en el Atlántico Sur y el acceso a la Antártida, la adopción de tecnologías avanzadas, nuevos materiales, marcos jurídicos —que incluyen propiedad intelectual e inversiones extranjeras— y la estabilidad regional.

En el plano comercial, la complementariedad económica es limitada, lo que genera un intercambio significativo signado por un patrón más intraindustrial que con otros países y regiones, exceptuando el Mercosur y Chile. Esta característica, junto con el déficit argentino, ha permitido que los recientes cambios en la política comercial de Estados Unidos no hayan generado impactos significativos en nuestro país, salvo en casos puntuales.

Desde esta perspectiva, la agenda bilateral puede interpretarse como un contrato de adhesión que nutre la agenda nacional: Argentina se adapta a ella y rara vez se aparta, evitando confrontaciones que puedan comprometer cuestiones sensibles como la asistencia financiera estadounidense.

Cabe destacar que este tipo de relacionamiento ha mostrado una notable continuidad a lo largo del tiempo. Basta revisar las memorias del exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz —correspondientes a fines de los años se-

tenta e inicios de los ochenta— para constatar que las dinámicas actuales no difieren sustancialmente de las de entonces. Esto sugiere que las grandes cuestiones de la agenda bilateral tienden a trascender las coyunturas y los estilos personales de los funcionarios.

En síntesis, las líneas directrices de la agenda bilateral surgen de la estrategia estadounidense y se mantienen relativamente estables. Bajo ese marco, Argentina procura delinear su propia agenda, generalmente centrada en cuestiones recurrentes vinculadas a su inestabilidad económica y algunos temas puntuales, como la seguridad regional.

Las agendas bilaterales con Brasil y China, en cambio, presentan diferencias sustantivas. En ellas, el componente económico adquiere mayor relevancia relativa que el geopolítico. No se trata de que las tres agendas bilaterales carezcan de ambos elementos, sino de que el eje predominante varía en cada una. Existen, por caso, puntos de convergencia relevantes, como la seguridad regional, donde Brasil, Argentina y Estados Unidos comparten intereses. En contraste, el ámbito de la tecnología avanzada y militar muestra una confluencia conflictiva entre las agendas de China, Argentina y Estados Unidos.

En definitiva, esta dualidad en los temas de agenda ha resultado especialmente interesante y relativamente estable hasta la fecha, aunque podría estar sujeta a cambios futuros. Por ejemplo, una eventual escalada en el conflicto entre Estados Unidos y China podría provocar que tanto lo geopolítico como lo geoeconómico adquieran un alto grado de prioridad en la agenda que la Argentina mantiene con ambos países.

Más allá de este escenario, al pensar en el futuro de la agenda entre Argentina y Estados Unidos, considero que debería mantener sus líneas históricas, adaptándose a las circunstancias que así lo requieran. Es decir, la relación partiría de lo geopolítico —definido por la estrategia estadounidense— y se extendería hacia lo económico. La cooperación se

desarrollaría en función de esa dinámica, y Argentina debería procurar soluciones de compromiso que sean compatibles con las agendas que establezca con Brasil y China.

Si nos preguntamos si es posible modificar la agenda bilateral con Estados Unidos, la experiencia histórica sugiere que no parece haber demasiado espacio para ello dadas las dimensiones que definen el largo plazo de los países. Tampoco está claro si sería deseable para las partes. En cambio, sí es factible ajustarla o perfeccionarla, ya que el paso del tiempo puede modificar algunas prioridades, podrían surgir nuevos temas y los actores involucrados podrían aportar mayor profesionalismo en su diseño y ejecución, lo que permitiría alcanzar objetivos renovados.

Como señalé anteriormente, debido a sus recurrentes crisis de balance de pagos y deuda externa, Argentina acude con frecuencia a organismos de crédito internacional, financiamiento directo de Tesoros extranjeros y renegociación en el mercado privado de deuda. En esas ocasiones, como sucede en el presente, Estados Unidos ha demostrado comprensión y ha brindado un apoyo clave para resolver este tipo de problemas, aun cuando se haya logrado luego de arduas negociaciones. Es poco común encontrar casos en los que haya sostenido una posición absolutamente inflexible frente a estas situaciones. Esto constituye una deuda moral que mantenemos con dicho país, así como también con otros países socios y amigos, ya que no responden a intrincados objetivos de sus agendas nacionales, sino a errores e irresponsabilidades propias, tanto políticas como sociales.

Carolina Zaccato

Para comenzar, es pertinente destacar que las prioridades de la agenda de los Estados Unidos hacia América Latina no se han modificado sustancialmente en los últimos treinta años. Más aún, dos de las tres prioridades centrales de los Estados Unidos hacia América Latina son definidas por la negativa. En

este sentido, Estados Unidos no ve a América Latina como una región prioritaria, sino como una región que es necesario abordar porque constituye su vecindad. En consecuencia, esas prioridades tienden a ser de carácter reactivo. De las dos prioridades estratégicas estadounidenses de carácter negativo hacia la región latinoamericana figura, en primer lugar, el objetivo de controlar los flujos migratorios —una preocupación centrada en la actualidad especialmente en Centroamérica, ya que México desde hace varios años registra flujos migratorios positivos, es decir, que son más los mexicanos que regresan a su país que los que emigran a los Estados Unidos—. Más aún, el nivel de migrantes irregulares de dicha región ha aumentado significativamente en los últimos años, en gran parte debido al avance del narcotráfico. Ello nos lleva a la segunda prioridad estratégica de carácter negativo de los Estados Unidos hacia la región: frenar el avance del crimen organizado transnacional, combatir el narcotráfico, la trata de personas y de armas, y apaciguar los conflictos internos e intrarregionales en América Central. La tercera prioridad, de carácter más positivo, es incrementar el flujo comercial y de inversiones en el hemisferio americano.

Asimismo, Estados Unidos es un actor que hoy se está retirando del orden internacional liberal, buscando construir un nuevo rol para sí mismo y una nueva forma de hacer política internacional. En este sentido, el presidente Donald Trump está redefiniendo actualmente el liderazgo de Washington, construyendo relaciones bilaterales de manera más transaccional —esto es, en una perspectiva de uno a uno, de mano a mano—, alejándose del enfoque multilateral que se buscaba tener en la época de Barack Obama. En esta línea, Estados Unidos ha desarrollado una política particularmente confrontativa y desafiante hacia ciertos actores en ascenso, como China o India. Más aún, Estados Unidos es actualmente un actor revisionista del orden internacional liberal, orden que este mismo país había forjado luego de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, hoy Estados Unidos es profundamente crítico del llamado orden internacional libe-

ral, actitud que queda evidenciada, por ejemplo, en su rechazo a la Agenda 2030 y a los Acuerdos Climáticos de París, en su oposición al multilateralismo en general, y en su predilección por un enfoque transaccional y de Estado-Estado en su matriz de relacionamientos exteriores. En consecuencia, el escenario internacional actual, que puede resultar hasta irónico, es un Estados Unidos que se posiciona como principal revisionista y crítico del orden internacional actual, en paralelo a una China que, posicionada como la gran potencia ascendente, juega —y defiende— con las reglas establecidas por dicho orden mundial.

A su vez, Washington ve al ascenso chino como una amenaza a su propio bienestar y supervivencia nacionales, por lo que busca contener y demorar este ascenso por distintas vías. En efecto, Trump ya plantea a China como una amenaza en términos explícitos. Mientras que otrora la necesidad de contener el avance de China se formulaba en un registro más diplomático y moderado, hoy en día la formulación del objetivo de balancear el ascenso chino se postula abiertamente en términos ideológicos y normativos.

En este plano, Estados Unidos puede encontrar en América Latina algunos aliados puntuales. En particular, bajo la presidencia de Javier Milei, la Argentina se vuelve un actor profundamente alineado con la visión estadounidense del mundo actual. En consecuencia, Washington puede encontrar un fuerte aliado regional en su proyecto revisionista del orden internacional, precisamente porque el presidente Milei plantea también muchas de estas mismas críticas, como las relativas a la Agenda 2030, el cambio climático y el multilateralismo. Por momentos, esta cercanía a la perspectiva norteamericana llega hasta el punto extremo de revertir posicionamientos diplomáticos basales de la política exterior argentina, desarmándose inclusive posiciones históricas en la Asamblea General de las Naciones Unidas con el mero objetivo de respaldar dicho alineamiento férreo con los Estados Unidos. Si bien tanto en Europa como en América Latina existen otras

voces que plantean demandas similares —evidenciadas por el ascenso, lento pero sostenido, de numerosos partidos de extrema derecha en ambas orillas del Atlántico—, Milei es posiblemente el líder que comparte con mayor fuerza las críticas al orden liberal internacional y al multilateralismo postuladas por Trump.

Enfocándome ya en los principales temas de la agenda bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos, me remito a la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde se señalan las prioridades de Washington hacia nuestro país. En primer lugar, se presentan ciertos lineamientos generales que incluyen los lazos económicos, los derechos humanos, la democracia, la lucha contra el terrorismo, el fortalecimiento del Estado de derecho o *rule of law*, la mejora de la seguridad ciudadana, la cooperación en energía, ciencia y tecnología, el fomento de las relaciones interpersonales y el refuerzo de los vínculos educativos. Más allá de esta declaración de áreas prioritarias generales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elabora planes estratégicos a cuatro años para cada país. El último de estos planes estratégicos correspondiente a la Argentina, denominado *Integrated Country Strategy*, o Estrategia Integrada por País, fue realizado en 2022. Aunque algunas de sus prioridades podrían matizarse bajo la administración de Trump, el documento resulta muy interesante porque pone el foco en cinco aspectos específicos.

Para comenzar, el primer objetivo prioritario en el relacionamiento bilateral estadounidense-argentino es la promoción de valores democráticos comunes, tales como los derechos humanos, las libertades civiles y la libertad de prensa. En ciertas áreas, bajo la actual gestión estadounidense, este punto se encuentra en discusión debido al fenómeno de las *fake news* y las profundas críticas realizadas por Trump al cuarto poder (esto es, el periodismo), a quien acusa de partidista, sesgado y tendencioso. Sin embargo, al menos en el plano discursivo, los Estados Unidos, se han presentado siempre hacia el

exterior como una potencia promotora de la democracia y los derechos humanos. Desde ya, este es un punto que podríamos discutir *ad aeternum*, ya que la retórica y la práctica no suelen transitar por los mismos carriles, y mucho menos lo hacen en el caso estadounidense. De todos modos, al menos discursivamente, la democracia y los derechos humanos constituyen prioridades compartidas entre los Estados Unidos y América Latina, una región que es mayoritariamente democrática —aun con múltiples falencias en sus sistemas democráticos—, y que enfatiza la protección y extensión de los derechos civiles, económicos y políticos de sus ciudadanos. Asimismo, en el ámbito de la democracia y los derechos humanos, existe un espacio formal de encuentro y debate, denominado Diálogo Bilateral sobre Derechos Humanos entre la Argentina y los Estados Unidos, cuya última edición se realizó en abril de 2024.

A su vez, la segunda prioridad que detalla este documento es expandir los vínculos culturales y educativos entre ambas naciones. En este marco, se destaca la optimización de los programas de enseñanza del idioma inglés, la preservación de una prensa libre, los intercambios académicos entre profesores y estudiantes, y el respaldo al emprendedurismo local como parte del reforzamiento de las relaciones interpersonales.

Por su parte, el tercer eje prioritario de cooperación binacional se define bajo el concepto de “búsqueda de la prosperidad en el nuevo milenio”. En él, se señala que la Argentina constituye un actor de interés para los Estados Unidos dentro de la región latinoamericana debido a su condición de miembro del G20 y a su posición como la tercera economía de América Latina. Bajo esta premisa, Washington plantea la necesidad de promover reformas regulatorias en la Argentina que incentiven el comercio bilateral, en conjunto con la de reforzar las inversiones norteamericanas en desarrollo tecnológico, agricultura, energía, ciencia, salud y sustentabilidad ambiental.

Luego, en el cuarto punto, los Estados Unidos caracterizan a la Argentina como un aliado que aún no ha alcanzado su máximo potencial, atribuyendo esta situación a factores estructurales como la inestabilidad económica, la inseguridad y la falta de un proyecto a largo plazo. A su vez, este diagnóstico nos conduce a los últimos eslabones de la estrategia: la cooperación en seguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho (o *rule of law*). En estos ámbitos, Estados Unidos se posiciona a sí mismo como un socio estratégico para el entrenamiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad ciudadana, para la lucha contra el crimen organizado transnacional, y para el diseño de regulaciones financieras que faciliten la estabilidad macroeconómica argentina.

Por último, el documento concluye sosteniendo que una Argentina más segura incentivará, consecuentemente, el turismo y las inversiones con los Estados Unidos. En materia de turismo, resultan llamativos los datos estadísticos: aproximadamente 400.000 estadounidenses visitan la Argentina por año, mientras que unos 800.000 argentinos viajan hacia los Estados Unidos durante el mismo período. Ello demuestra que el flujo turístico bilateral constituye un área de gran relevancia para ambas naciones. A su vez, otra de las prioridades detalladas en este documento, de carácter más operativo, refuerza esta noción, dado que postula como de relevancia estratégica el apoyar y reforzar al personal de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina para consolidar una presencia institucional más sólida en el país. Es pertinente recordar que la representación diplomática estadounidense en nuestro país atravesó recientemente un período sin un embajador designado, quedando la gestión a cargo de un encargado de negocios. Por ende, resulta un acierto que se haya puesto el foco en fortalecer ese espacio.

Por el lado argentino, entre las temáticas que emergen como materia de un posible entendimiento comercial con Washington, se destaca la iniciativa mencionada por el pre-

sidente Milei tras la reciente visita del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos a nuestro país, con respecto al establecimiento de un acuerdo de aranceles recíprocos. Sin embargo, en el contexto subregional actual, este tipo de negociaciones debe canalizarse necesariamente a través del marco del MERCOSUR. Por consiguiente, más allá de las voluntades bilaterales, la Argentina no posee la facultad de acordar aranceles recíprocos de manera unilateral —esto es, por fuera del MERCOSUR— sin con ello violar las normativas del bloque de integración regional del que forma parte constitutiva. En su conjunto, este escenario nos lleva a reflexionar respecto a los grandes desafíos que nos plantea en la actualidad la coexistencia en la región de diferentes modelos de país, orientaciones ideológicas y visiones del mundo.

En paralelo, se encuentra en gestión el programa *visa waiver* para los ciudadanos argentinos que viajan hacia los Estados Unidos. De aprobarse, este acuerdo permitiría a los argentinos ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa de turismo. Si bien ello no constituye un eje estratégico de la relación bilateral, este paso representaría una significativa muestra de confianza por parte de Washington. Cabe destacar que, actualmente, Chile es el único país de la región latinoamericana que cuenta con este beneficio.

Otro aspecto relevante de la relación bilateral argentino-norteamericana es el potencial de incorporar a la Argentina como socio global de la OTAN, una iniciativa que retoma la figura del “aliado extra-OTAN” que el país ostentó en la década de 1990. En este punto, cabría analizar las ventajas y desventajas de dicha condición, dado que reubica a la Argentina en una profunda alineación con el mundo occidental, en detrimento de su posicionamiento como parte del Sur Global y en el marco de una profunda realineación de fuerzas políticas, económicas y militares a nivel global. A su vez, considerando que la Argentina no pertenece geográficamente a la llamada región del Atlántico Norte, esta decisión redibuja el escenario geopolítico global. No obstante, esta potencial incorporación

de Argentina como socio global de la OTAN confluye con las actuales prioridades de Washington de reforzar los vínculos bilaterales en materia de seguridad y defensa, ya no términos de combate directo al narcotráfico y las redes de trata de personas y migraciones irregulares en la región latinoamericana, sino en lo referente a contrarrestar el avance chino en la región, tanto económico como militar, y de manera particular en el sur argentino. En efecto, el objetivo de contribuir a la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, ejemplificado en la reciente adquisición de los cazas F-16 y de sistemas blindados, va de la mano con la preocupación estadounidense por la presencia de China en zonas estratégicas del sur argentino, como lo son Neuquén y Tierra del Fuego. En consecuencia, nuestro país encuentra una oportunidad propicia para utilizar este vínculo en aras de la modernización de sus sistemas de defensa y seguridad.

Asimismo, la agenda de seguridad bilateral abarca también la cooperación en ciberseguridad, inteligencia y ejercicios militares conjuntos. Al respecto, se destacan la existencia de un centro de inteligencia en Puerto Iguazú con participación estadounidense, los acuerdos bilaterales en materia de ciberdefensa y la realización de ejercicios conjuntos recientes, como el denominado Gringo-Gaicho II. No obstante, frente a esta prioridad estratégica de defensa conjunta, resta evaluar si los esfuerzos por balancear la influencia de Beijing no derivan en una excesiva presencia de Washington en nuestro país. En este sentido, la Argentina debería actuar de manera estratégica y manejarse con una geometría flexible en sus relacionamientos de política exterior, de manera de aprovechar los aspectos más competitivos y beneficiosos de sus vínculos con los Estados Unidos y China en materia de seguridad y defensa, a la vez que balancear la influencia (y activa presencia territorial) de estos actores en nuestro país, reduciendo la dependencia tecnológica y de *know how* en sus sistemas de defensa y seguridad, y aumentando su autonomía estratégica en estas áreas.

Asimismo, las políticas digitales, la protección de datos y la regulación del avance de la inteligencia artificial constituyen otras áreas prioritarias de colaboración bilateral. A ellas se les suman las inversiones en minería, ámbito en el que los Estados Unidos se enfocan en minerales estratégicos como el litio, y la cooperación en la Antártida, orientada nuevamente a equilibrar la presencia china, esta vez en el continente blanco.

Actualmente, la Argentina y los Estados Unidos muestran una sintonía ideológica en una región que hoy se encuentra fragmentada en términos ideológicos. Al posicionarse en la nueva derecha global, la Argentina se presenta como un interlocutor de interés para la administración de Trump. Este alineamiento se evidencia de manera clara en la postura hacia Israel, reflejo de ello son las votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los Estados Unidos, Israel y la Argentina suelen votar en bloque, y muy frecuentemente de manera opuesta a casi el conjunto de la comunidad internacional. Este flagrante nivel de convergencia define de modo ineludible la dinámica actual de la relación bilateral.

Con respecto al interrogante de cómo afecta el actual escenario bilateral Argentina-Estados Unidos la relación de la Argentina con Brasil y con China, considero que el impacto es negativo, aunque matizado, ya que ambos países constituyen socios estratégicos e *ineludibles* para la Argentina.

En el caso de Brasil, la situación que afecta más negativamente el vínculo bilateral no es tanto la relación que se mantiene con los Estados Unidos, sino el carácter negativo del vínculo entre los primeros mandatarios Javier Milei y Lula da Silva. No obstante, si bien en las declaraciones de los mandatarios se evidencian ciertos niveles de distanciamiento y confrontación, en la práctica, Brasil sigue siendo el principal socio comercial y político de la Argentina. En efecto, por fuera del nivel presidencial, la cooperación bilateral continúa activa y firme en los ámbitos subnacionales y en las distintas áreas técnicas. Sin embargo, hoy en día la Argentina busca posicionarse como el interlocutor primigenio de los Estados Unidos

en el Cono Sur, precisamente en un momento en que Brasilia se encuentra distanciada de las posiciones de Washington. A su vez, ello repercute negativamente en el MERCOSUR: aunque el bloque pocas veces se expresa de manera unificada, la disparidad de criterios entre Buenos Aires y Brasilia profundiza la tendencia a la fragmentación intrabloque.

Con respecto a la vinculación con China, ocurre algo similar a lo que ocurre con Brasil. El impacto del acercamiento argentino a los Estados Unidos es negativo para el relacionamiento de nuestro país con China debido a que los Estados Unidos buscan activa y explícitamente contener el avance geopolítico, económico y de inversiones de Beijing en la región, así como su creciente gravitación en materia de seguridad y defensa. Como resultado, nos encontramos ante una puja entre las dos principales potencias globales por un país geoestratégico como lo es la Argentina. Ante dicho escenario, nuestro país debe actuar con pragmatismo estratégico, utilizando sus fuertes vínculos con ambos actores de manera triangular, para así poder negociar mejores acuerdos con cada uno de ellos. Es una realidad que la Argentina no puede eludir su relación con China, puesto que este país es actualmente su segundo socio comercial, a la vez que uno de sus principales inversores en materias clave como la agricultura, la energía, y la seguridad satelital. Aunque Washington busque limitar la penetración china en sectores estratégicos tales como el litio, las telecomunicaciones, la infraestructura portuaria, y su activa presencia en los territorios de la Antártida y la Patagonia (evidenciado, por ejemplo, por los recelos en torno a la estación espacial china en Neuquén), la Argentina no puede ni debe quebrar este lazo con China, ya que el gigante asiático representa uno de sus principales mercados de exportación para productos esenciales como la soja, la carne y el propio litio, constituyendo así un socio comercial estratégico para el crecimiento económico de nuestro país.

En consecuencia, la Argentina debe aprender a balancear a su favor esta geometría de relacionamientos entre

Washington, Beijing y Brasilia, enfocándose en aquellas áreas en las que cada actor le resulta de interés estratégico, e intentando reducir excesivas dependencias de cada uno. En el caso de los Estados Unidos, la clave del vínculo actual de la Argentina con el país norteamericano consiste en priorizar aquellos sectores donde hoy Estados Unidos presenta mayor competitividad, tales como la tecnología, la defensa, las energías limpias y renovables, las telecomunicaciones, y el desarrollo de la inteligencia artificial; todo ello sin descuidar las relaciones con Brasil y con China en el proceso. En suma, el objetivo central es evitar quedar atrapados en una lógica de enfrentamiento entre bandos y optar, en su lugar, por diversificar los vínculos internacionales de manera estratégica e inteligente.

III. Relaciones de la Argentina con Europa

Cornelia Schmidt-Liermann

Lo primero para destacar ante la pregunta sobre cuáles son los principales temas de la agenda bilateral entre la Argentina y la Unión Europea es que nuestro país se encuentra en una zona de paz. En el contexto geopolítico actual, este factor resulta sumamente valioso para proyectar la relevancia estratégica de la Argentina y de la región en su conjunto, especialmente con miras a concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, consolidándonos como un entorno seguro para el desarrollo de negocios e inversiones.

Los principales ejes de la agenda bilateral abarcan, en primer lugar, la seguridad y la estabilidad para la preservación de la paz. En este sentido, existen grandes oportunidades, como la de abrir un capítulo de defensa mucho más institucionalizado entre la Argentina y la Unión Europea, o profundizar la participación actual en el programa *Copérnico*. Asimismo, se destaca la agenda vinculada a la seguridad interior, el crimen organizado, el narcotráfico y la cooperación judicial y policial. Si bien hoy se trabaja de manera articulada con Europol y Eurojust, el objetivo es fortalecer aún más estos vínculos, específicamente frente a delitos complejos que han adquirido mayor visibilidad, como la trata de personas y, dentro de esta problemática, la subrogación de vientres.

Estos puntos convergen con los derechos humanos, otro tema central de la agenda bilateral. Aquí el enfoque se orienta a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad en términos generales, priorizando la asistencia universal por sobre la categorización en colectivos específicos. Ejemplos de ello son la atención a los refugiados ucranianos, el seguimiento de las situaciones de crisis en Venezuela, Nicaragua y Cuba, o el complejo escenario en Gaza. Finalmente, la Cuestión Malvinas constituye otro eje fundamental donde la Unión Europea mantiene su respaldo a una solución negociada bajo

los parámetros de la ONU, una postura que favorece la posición histórica de la Argentina.

Existen líneas de cooperación plenamente activas que sería necesario incrementar, tales como el Global Gateway y el financiamiento a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el programa InvestEU y otros instrumentos complementarios. En este marco, cabe destacar que unas 1200 empresas europeas se encuentran actualmente operando o invirtiendo en la Argentina; un volumen de cooperación y complementariedad que debemos fortalecer, especialmente en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la agenda compartida abarca los campos de la digitalización y la ciberseguridad, con un impulso decidido a la cooperación en materia de inteligencia artificial, identidad digital y gobernanza de datos.

En este plano, la colaboración con Europa en inteligencia artificial puede centrarse tanto en el intercambio tecnológico como en el desarrollo de mecanismos para la protección conjunta de infraestructuras críticas. Esto resulta fundamental para detectar y contrarrestar campañas de desinformación y manipulación consciente, así como dinámicas de difamación en el entorno digital, tal como se evidencia de manera clara en los flujos informativos actuales en torno al conflicto en Gaza.

Donde quizás se presentan divergencias es en el ámbito de la protección de datos personales. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, en ocasiones se requiere interceptar o rastrear direcciones IP ante delitos graves, un punto donde la Unión Europea sostiene una postura más restrictiva que la nuestra. Países Bajos, por ejemplo, muestra una mayor flexibilidad. No se trata de que los estándares europeos impidan este tipo de procedimientos, sino de que su marco normativo es más garantista, exigiendo siempre una orden judicial previa. Si bien los atentados terroristas recientes han generado causas fundadas que justifican estas intervenciones, las barreras legales e institucionales en Europa siguen siendo muy rigurosas.

En materia de ciencia y educación, la agenda bilateral ha incorporado la formación en oficios. El modelo de educación dual presenta un amplio margen de desarrollo en nuestro país, complementando la participación argentina en programas globales como Horizon Europe y Erasmus. Asimismo, sería sumamente oportuno intensificar la colaboración en la industria espacial. Aunque la cooperación con la Agencia Espacial Europea (ESA) funciona correctamente, este sector constituye un campo con un enorme potencial estratégico.

Por último, en los ejes de agroindustria y sostenibilidad, cabe destacar el aporte fundamental de nuestra región a la seguridad alimentaria global. No obstante, es imperativo que la Unión Europea adopte una postura de mayor escucha hacia las posiciones de la Argentina y del Mercosur respecto a las metodologías de medición de la huella de carbono. Los estándares europeos no deberían aplicarse de manera unilateral; por el contrario, deben contemplar las capacidades específicas de nuestra región para la captura de carbono, sustentadas en prácticas como la agricultura regenerativa, la conservación de superficies verdes y el potencial de nuestros océanos.

Finalmente, compartimos la visión de un orden internacional basado en reglas, bajo el convencimiento de que la política interna no puede estar disociada de la política internacional. Hoy más que nunca resulta imperativo comprender la estrecha conexidad entre ambos planos y retornar a una diplomacia activa que restablezca los lazos de confianza mutua entre los países y las regiones.

Respecto al estado de situación de los acuerdos comerciales del bloque, en lo relativo al tratado Mercosur-Unión Europea, la Comisión Europea presentó en septiembre de 2025 el texto final del acuerdo para su ratificación. Confiamos en que este proceso avanzará; si bien persisten las resistencias políticas en Francia y en sus sectores agrícolas, las salvaguardas ambientales y comerciales incorporadas parecen estar desatando las negociaciones. No obstante, contamos con una ventana de tiempo acotada que se extendería hasta mediados

del año próximo, debido al inicio del proceso electoral en Brasil. Existe cierta incertidumbre sobre cómo podría reaccionar Brasilia ante eventuales cambios en el escenario político, por lo cual es fundamental agilizar los plazos de aprobación. En el contexto actual, dado que Europa ha dejado de ser una zona de paz, el Mercosur adquiere un renovado interés geoestratégico para la Unión Europea, una oportunidad histórica que nuestra región debe aprovechar. El punto crítico de la negociación sigue siendo la compatibilidad con las estrictas regulaciones europeas en materia de deforestación.

Por otra parte, en cuanto al acuerdo Mercosur-EFTA, las negociaciones técnicas concluyeron exitosamente en julio de 2025. Si los plazos institucionales se cumplen según lo previsto, se proyecta su ratificación definitiva de manera inminente en el marco de la próxima cumbre con la CELAC.

En cuanto a las áreas prioritarias de cooperación para el período 2025-2030, el eje de la seguridad alimentaria resulta fundamental. A este respecto, considero que nuestro país debe consolidar el concepto de un “agro confiable” y plenamente trazable para las exigencias del consumidor europeo, un objetivo alcanzable mediante la implementación de plataformas digitales especializadas.

Asimismo, el suministro de materias primas críticas con licencia social constituye una prioridad para Europa. Esto implica avanzar en la cadena del litio bajo la premisa de que no se limite a la mera extracción primaria, sino que permita agregar valor local mediante la producción de bienes tecnológicos como baterías, bajo los estándares de la Unión Europea. Es lo que denominamos la estrategia “de la mina a la batería”.

En este mapa de prioridades, incluyo también la transición energética, donde la Argentina cuenta con ventajas competitivas a través del desarrollo del hidrógeno verde y del gas natural licuado (GNL) como combustible de transición. Por otra parte, los servicios basados en el conocimiento representan un sector con un enorme potencial de exportación, particu-

larmente mediante la integración de aplicaciones de *software*, inteligencia artificial y ciberseguridad en las cadenas globales de valor.

Finalmente, nuestro país posee capacidades sustantivas para el crecimiento en investigación y desarrollo (I+D). Sin embargo, se observa un debilitamiento en la cultura de patentamiento nacional, un aspecto en el cual Brasil nos ha aventajado. Para revertir este rezago, resulta imperativo revitalizar el trabajo conjunto con el sistema universitario, promoviendo que las casas de altos estudios asuman la importancia de patentar los descubrimientos realizados en sus laboratorios. Esto permitiría la recaudación de regalías y la consiguiente retroalimentación de fondos para el propio financiamiento y desarrollo científico de las instituciones.

Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2023 la Argentina presentó únicamente 679 solicitudes de patentes. Esta cifra ubica al país en el puesto 54 a nivel mundial y en el cuarto lugar a nivel regional, detrás de Brasil (7302), México (1774) y Chile (878). En el plano internacional, nuestro país sigue sin adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de 1970, instrumento suscrito por 158 naciones, entre ellas Uruguay, que formalizó su ingreso recientemente. En consecuencia, la Argentina debe continuar rigiéndose por el Convenio de París de 1883, un marco normativo que obliga a tramitar de forma individual la solicitud de patente en cada país donde se pretenda aplicar.

El proyecto de adhesión al PCT cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y aún se encuentra a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados; debido a la naturaleza de la materia que aborda, la iniciativa mantiene su estado parlamentario. En este escenario, la eventual ratificación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea podría funcionar como un dinamizador para agilizar la incorporación argentina al tratado.

Por otra parte, cobra relevancia la denominada cooperación para el desarrollo, orientada hacia la infraestructura verde, la logística y la conectividad digital. En este punto, resulta indispensable la capacitación técnica en múltiples rubros, fundamentalmente en minería sostenible, bioeconomía y economía circular. Estos factores consolidan el rol estratégico de la Argentina de cara a la autonomía de la Unión Europea, posicionando a nuestro país como un proveedor confiable y un socio geoestratégico de largo plazo.

En cuanto a las condiciones para consolidar una confiabilidad a largo plazo, resulta indispensable contar con un marco regulatorio previsible y estable, previsibilidad fiscal y aduanera, una ventanilla única de inversiones y una modernización del marco laboral que dinamice el crecimiento y facilite la contratación de personal. Asimismo, la Argentina requiere el desarrollo de infraestructura crítica en áreas como puertos, logística y transporte, un vector donde se puede articular un trabajo profundo con la Unión Europea. En idéntico sentido, debemos avanzar de manera conjunta en el diseño de mecanismos verificables de indicadores —tales como la huella de agua, de carbono y de biodiversidad— que resulten satisfactorios tanto para nuestros sectores productivos como para las exigencias de la Unión Europea. Como reflexión final, es momento de superar la etapa de una cooperación meramente declarativa para avanzar de forma decidida hacia una cooperación verdaderamente operativa.

Finalmente, en lo que respecta a la inteligencia artificial, el sector agropecuario y la tecnología *blockchain*, existe una ventana de oportunidad concreta para la radicación de centros de datos, aprovechando la cooperación en materia de infraestructura energética y las capacidades locales para el enfriamiento de procesadores.

Lucas Chiodi

La agenda UE-Argentina se enmarca, en el plano externo, por una transformación sistémica y una coyuntura crítica. La primera es el ascenso de China y la consecuente reorientación estratégica de Estados Unidos hacia Asia. En esencia, no se trata de un giro exclusivo del Gobierno del presidente Trump, sino de una tendencia que atraviesa distintas administraciones estadounidenses y que ha desplazado progresivamente la atención de la política exterior de Washington.

La segunda, la coyuntura crítica, es la invasión rusa de Ucrania, que hizo mucho más visibles para Europa las consecuencias de esa reorientación estadounidense. La pérdida relativa de centralidad de Europa en las prioridades de Washington ha obligado a la Unión a asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad y defensa, y a reducir dependencias, particularmente en los planos militar y energético. Por supuesto, esto abre un debate muy profundo en el seno de la UE sobre un abanico de temas, empezando por su vínculo transatlántico.

Asimismo, ha otorgado una nueva dimensión a la política comercial europea. En un contexto cada vez más incierto y transaccional, en el que incluso su principal socio y aliado se ha convertido en una fuente de incertidumbre, la UE busca proyectarse como un actor de previsibilidad y estabilidad. La ampliación de su red de acuerdos comerciales forma parte de esa estrategia, procurando diversificar vínculos y reducir dependencias.

El vínculo entre la UE y la Argentina, más allá de sus afinidades históricas y políticas (muy importantes), puede entenderse hoy dentro de este contexto. Si se observa su dimensión comercial, se parte de un intercambio ya relevante. En 2024, el comercio bilateral de bienes alcanzó cerca de 15.900 millones de euros, lo que ubicó a la UE como el tercer socio comercial de la Argentina, con alrededor del 12,3 % del comercio total. En servicios, durante 2023 la Argentina exportó a la UE

por aproximadamente 2900 millones de euros, mientras que las exportaciones europeas hacia nuestro país alcanzaron los 6300 millones.

En este marco, vale hacer una primera y breve mención al acuerdo UE-Mercosur. Si finalmente avanza hacia su firma, aprobación y ratificación y, al menos en su pilar comercial, entra en vigor provisionalmente, su importancia probablemente esté puesta no tanto en un aumento significativo del volumen agregado del comercio como en su impacto relativo sobre economías regionales. Es decir, parte de los bienes que la Argentina exporta en mayores valores ya ingresa al mercado europeo con aranceles relativamente bajos, y otros con gran potencial, como los agrícolas, seguramente continuarán sujetos a protecciones, por ejemplo, mediante cuotas. Por eso el impacto puede ser mucho más visible en sectores y economías regionales concretas y, con ello, en la propia geografía económica del interior del país, al ampliar las posibilidades de acceso a un mercado de gran escala para determinados productos.

En el plano de las inversiones, la UE es el principal inversor extranjero en la Argentina, con un stock cercano a los 38.900 millones de euros hacia fines de 2023. La Unión busca, además, diversificar sus cadenas de suministro y, para ello, ampliar sus vínculos con nuevos socios. Esto se conecta con lo mencionado por Cornelia: la condición de la Argentina y del Mercosur como una zona de paz (una dimensión entre varias a considerar) constituye, en este contexto, un activo. Se abre allí una oportunidad para profundizar el vínculo con la UE, aunque naturalmente no de manera exclusiva, dado que otros países también muestran interés.

El vínculo hoy se expresa en iniciativas concretas recientes. El memorando de entendimiento firmado entre la UE y la Argentina en julio de 2023, con ejes en hidrógeno, energías renovables, eficiencia energética, gas natural y GNL, es un ejemplo. También lo es el entendimiento con Eni para avanzar en el transporte y la licuefacción de gas de Vaca Muerta, con

infraestructura prevista sobre la costa atlántica de Río Negro. En minería y transición energética ocurre algo similar: el interés europeo por el litio y el cobre argentino se combina con proyectos de infraestructura eléctrica y con instrumentos de cooperación y financiamiento vinculados a Global Gateway.

Y aquí aparece otra dimensión del acuerdo UE-Mercosur particularmente relevante para la Argentina. El acuerdo puede ofrecer cierto anclaje a un país cuya política económica y, particularmente, comercial ha atravesado cambios muy marcados entre Gobiernos. La previsibilidad relativa que potencialmente podría introducir constituye en sí misma un aspecto importante. Las decisiones de inversión se toman pensando en el mediano y largo plazo, y construir condiciones capaces de sostener esa previsibilidad ha sido una dificultad recurrente para la Argentina. A ello se suman, naturalmente, otros desafíos desde la estabilidad macroeconómica hasta el complejo tema de economía política entre Nación, provincias y municipios para transformar esos recursos en inversiones, infraestructura y capacidades productivas.

Susanne Käss

Para Alemania y Europa, la energía constituye un eje central, por lo que las oportunidades de cooperación en el sector energético representan un tema prioritario. No obstante, la distancia geográfica complejiza los costos; en la actualidad, no se cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar un suministro confiable de gas natural licuado (GNL) hacia Europa a precios competitivos.

En este marco, respecto al reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y la administración de Donald Trump en relación con las tarifas de los combustibles, se establecieron valores para el bloque europeo cuyo mecanismo de efectivización de compras aún resulta incierto. El documento actual funciona más bien como una carta de intención que como un contrato vinculante con volúmenes de compra definidos. Eu-

ropa ha quedado en una posición muy desfavorable en esta negociación, afrontando tarifas mucho más elevadas que los propios Estados Unidos. Este reposicionamiento estadounidense en el escenario geopolítico actual, tanto en términos económicos como en su rol de socio en asuntos de seguridad, reconfigura de manera drástica los mecanismos de cooperación económica y política que rigieron en las últimas décadas.

Si bien los ejes de la agenda son correctos, resulta indispensable evaluar las dificultades existentes. Tras la invasión a Ucrania, la necesidad de diversificar las fuentes de suministro energético es indiscutible. Sin embargo, debemos precisar qué tipo de suministro de gas licuado es viable y en qué plazos es realizable. Paralelamente, sería sumamente interesante acordar una agenda de cooperación para apoyar la construcción de una industria enfocada en el hidrógeno verde, un campo donde la Argentina ofrece condiciones climáticas muy superiores a las de otros países de la región. El desafío radica en revertir la tendencia actual, por la cual las empresas europeas suelen canalizar sus inversiones hacia Chile y Uruguay en detrimento de la Argentina.

El ámbito de los materiales críticos, fundamentalmente el litio y el cobre, me parece de una relevancia capital. Para dimensionar el contexto, cabe observar lo que sucede en el mercado de la electromovilidad: entre las veinte empresas automotrices que más vehículos eléctricos vendieron en China el año pasado, diecinueve fueron de origen chino y la vigésima fue Tesla; ninguna automotriz alemana o europea logró ingresar a ese ranking. Actualmente, en la IAA (Salón del Automóvil de Alemania) se presentan diseños atractivos de Volkswagen o BMW, pero lamentablemente no resultan competitivos en ese sector. Esto representa un problema estructural grave para la economía alemana, no solo para las grandes terminales automotrices —que de alguna manera intentarán alcanzar un nivel de competitividad global—, sino también para las pequeñas y medianas empresas que integran

la cadena de valor de los motores de combustión convencional y que hoy enfrentan un desafío existencial.

En contrapartida, la Argentina es un país que mira hacia Europa y ofrece condiciones óptimas debido a nuestra cercanía cultural. Sin embargo, en el terreno específico de los minerales críticos, Europa cuenta con muy pocas excepciones en materia de grandes empresas mineras. Existen firmas francesas, pero Alemania, por ejemplo, carece de ellas; hay corporaciones británicas, pero no competimos en escala con los actores canadienses, australianos y, mucho menos, con los chinos.

Es precisamente por estos motivos que a los europeos nos interesaría radicar más inversiones aquí, asociadas a oportunidades reales de generar valor agregado y cadenas de valor locales; allí radica nuestra verdadera diferenciación respecto de la estrategia china. Hace poco visitamos una planta de litio de capitales chinos próxima a entrar en funcionamiento en Fiambalá, un pueblo de unos cinco mil habitantes. En esa enorme instalación nos recibieron cinco técnicos chinos y apenas tres o cuatro trabajadores locales. Durante el recorrido en autobús por la planta, la ausencia de personal era total; no había nadie. Al consultar cuántas personas trabajarían allí una vez inaugurada, nos explicaron que el proceso es completamente automatizado. Nos mostraron una sala de control con unos seis puestos informáticos y nos señalaron que todo se operaría desde allí. El ingeniero a cargo, un profesional chino que había realizado su doctorado en Alemania, nos confirmó que toda la tecnología y el equipamiento son importados, por lo que la creación de empleo local en la planta será prácticamente nula. Si bien mencionaron el impacto de la baja de los precios internacionales del litio como un factor que mantenía las operaciones con cierta cautela, la experiencia resulta sumamente ilustrativa sobre las características de su modelo de explotación.

Por otra parte, existe un horizonte de cooperación factible en el ámbito de la defensa. En este sector se vislumbran

oportunidades interesantes, especialmente en áreas como la fabricación de municiones y suministros logísticos; un campo donde la Argentina posee capacidades instaladas y que, ciertamente, merecería la pena explorar en profundidad.

En la actual coyuntura de disputas arancelarias globales, resulta altamente probable que avance la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Este paso es el más trascendental para ambos bloques en el marco del nuevo escenario de guerra comercial y tensiones tarifarias. Su relevancia no radica únicamente en los efectos económicos positivos que generará a ambos lados del océano, sino en su fuerte valor político como señal de peso específico global. Desde la perspectiva europea, un eventual colapso del acuerdo tras más de dos décadas de negociaciones constituiría la mayor muestra de debilidad institucional de la Unión Europea, dejándola en una posición sumamente vulnerable en el concierto internacional. Por lo tanto, concretar el tratado bajo las actuales presiones comerciales reviste, además de su indiscutible importancia económica, un valor simbólico fundamental. En este sentido, la situación de Francia genera preocupación, ya que sus tensiones políticas internas amenazan con inmovilizarla tanto para la ratificación del acuerdo comercial como para consolidar una posición europea común y robusta frente a Rusia.

Renato Carlos Sersale di Cerisano

El criterio de estas notas es identificar temas, muchos de los cuales merecerían discusiones específicas que vinculen objetivos e instrumentos relacionados en función del capítulo III acerca de las relaciones de la Argentina con Europa.

A) Estado de las negociaciones UE-MERCOSUR y evaluación de la política argentina al respecto:

Los dos primeros artículos de esta sección describen en forma exhaustiva la agenda, el estado y la cooperación bila-

teral con UE. Ambos son muy completos, diagnostican y proponen una agenda concreta (Cornelia Schmidt-Liermann) y evalúan del estado de implementación del acuerdo, así como el contexto internacional (Lucas Chiodi)

Por lo tanto, me permito agregar los siguientes puntos en lo que hace a la política de la Argentina hacia el MERCOSUR:

En la implementación del acuerdo MERCOSUR-UE, la Argentina deberá tener en cuenta que el acceso a la OCDE como estrategia de mediano y largo plazo debiera ser el factor clave para la mejora de su competitividad, de sus marcos regulatorios, de la transparencia institucional y de la seguridad jurídica de la Argentina como parte del proceso de implementación del acuerdo con la UE.

Se trata, en el fondo, de una estrategia dual que permitirá a la Argentina obtener una suerte de “sello de calidad” a partir de la adaptación de su estructura industrial, de lograr la convergencia regulatoria, de trabajar internamente para lograr un desarrollo institucional basado en transparencia institucional y respeto a los contratos privados y públicos, de tener como objetivo el establecimiento de estándares comunes en la producción de bienes y servicios, de garantizar los flujos de comercio de los ítems incluidos, de promover las inversiones relacionadas en los ítems incluidos en el acuerdo además de las que puedan surgir en los sectores de interés para los países miembros en los sectores de agroalimentarios (incluida la pesca), energía, minería y desarrollos científicos y tecnológicos vinculados a proyectos de inversión.

En caso de avanzar en la estrategia dual arriba indicada, se estará en condiciones de promover una mayor participación en el comercio internacional y en la promoción de inversiones más allá de la UE, ya que el país contará con los estándares internacionales, marcos regulatorios y una baja en el riesgo país que contribuirá a contar con una mayor contribución del comercio internacional en relación con su PBI.

El acuerdo es una señal positiva para inversores (locales e internacionales), ya que, de avanzar internamente en todos sus puntos incluidos, el comercio internacional no será una solamente cuestión arancelaria o de preferencias comerciales. Las empresas argentinas deberán poner énfasis en la certificación y trazabilidad de los bienes y servicios producidos. Ello le permitirá acceder a todos los mercados internacionales.

Impulsará a que la capacidad industrial argentina instalada pueda reconvertirse o adaptarse a las nuevas demandas de bienes y servicios que no solo la UE exige, sino también el mercado internacional. Las inversiones en infraestructura y logística, las cadenas de proveedores locales de bienes y servicios a los grandes proyectos en los sectores de energía, minería, agroindustria favorecerán industrias en regiones más allá de donde se radican esas inversiones.

En lo que hace al rol del Estado en colaboración con el sector privado, deberá hacer el mejor uso técnico y meritocrático de sus instituciones para armonizar con la UE todos los aspectos que permitan mejorar su competitividad. Esto es abordar los temas que hoy son obstáculos para ello (muchos de ellos exceden el nivel federal y son responsabilidad de provincias y municipios). Me refiero a regulaciones y normas laborales, al intrincado y gravoso marco tributario, a las normas en materia de propiedad intelectual acorde con los tratados internacionales, a las directrices en materia ambiental, a las regulaciones para las compras públicas y todo lo que haga a “bajar el costo argentino” incluyendo el desarrollo de la infraestructura y logística, la cual —en muchos de los casos de las economías regionales y acceso a los centros de distribución— precede al desarrollo.

El tratado es positivo en términos de los tiempos para la adaptación de las pautas de producción las empresas argentinas para que realicen sus respectivos procesos de certificación según los estándares que hoy requiere no solo la UE, sino el mercado mundial. Ello significa trabajar en la adecuación

de las normas técnicas, en destrabar todos los aspectos fitosanitarios y sanitarios los cuales, en muchos casos, limitan las exportaciones más que los aranceles, y en las normas de origen. Por su parte, compete al sector privado incluir la producción de sus bienes en los procesos de certificación que garanticen la trazabilidad y sustentabilidad en función de los estándares requeridos.

MERCOSUR *hacia adentro*

Eliminar barreras intrazona de todo tipo, libre tránsito de capitales y personas jurídicas y físicas, desarrollo de infraestructura fronteriza y de pasos hacia terceros países, armonizar las regulaciones técnicas y sanitarias para el comercio de bienes intrazona.

Abrir la economía en lugar de cerrarla y participar en la economía mundial a partir de negociar, aprobar y ejecutar la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio, ya sean bilaterales, subregionales o interregionales.

A partir de la estructura industrial argentina, cuya producción se basa en las pymes, no solo pensar en términos de productos terminados, sino también en integrar las redes de valor, en lo posible con “valor agregado” que a la vez promuevan inversiones relacionadas. Los protocolos automotrices son un buen ejemplo (siempre y cuando se eliminen las cargas impositivas que distorsionen sus precios, aun en los mercados internos de cada país miembro).

Utilizar la capacidad negociadora y meritocrática del Estado argentino en el armado de propuestas previas, durante e implementación, a las discusiones con los países miembros. Permanente consulta con el sector privado según corresponda.

Fortalecimiento de las capacidades nacionales y subnacionales para el desarrollo de industrias locales y capacitación de personal capacitado para su participación en las cadenas de suministros, las cuales debieran enfocarse en la transición

energética, en la bioeconomía y en los desarrollos tecnológicos que hacen a la mejora de la productividad de los sectores en cuestión.

B) Principales temas de la agenda bilateral entre Argentina y Europa: las áreas de cooperación y la agenda pensando en los próximos 20 años

El artículo de Susanne Käss propone una agenda bilateral con Alemania en la cual identifica sectores con mucho potencial, desde la complementariedad de ambas economías tanto en materia de comercio como de inversiones vinculadas.

A partir de ello, me permito agregar algunos comentarios generales sobre el potencial de la Argentina frente a otros países europeos y a una eventual agenda futura:

Criterios generales

Adaptarse a las nuevas características del contexto internacional: la geopolítica y geoeconomía hoy determinan la inserción de la Argentina ya sea en materia de comercio, de inversiones como de seguridad internacional, el cual – a su vez- está vinculado a ambos (comercio e inversiones). Para ello es necesario contar con una matriz diversificada y sostenible para no depender exclusivamente de las coyunturas y, si en cambio estar preparado para obtener beneficios de los cambios, oportunidades y crisis según el contexto internacional que se trate.

La política exterior comienza por casa. Objetivos: crecimiento económico, desarrollo sustentable y fortalecimiento económico para lo cual, trabajar en los temas que hacen mejorar la competitividad, productividades sectoriales, la infraestructura y la logística. La transparencia institucional y seguridad jurídica, y el fortalecimiento institucional(meritocracia) son condición *sine qua non*.

Acceso a la OCDE (ejemplos Japón y Corea) como base para adaptar la economía y las instituciones a los estándares inter-

nacionales que garantizarán a la Argentina ser un país confiable, moderno e integrado al mundo en forma ininterrumpida.

Las áreas son múltiples y dependerá de ALC, acuerdos sectoriales y acuerdos sobre facilitación de comercio que, además incluyan promoción de inversiones en los sectores incluidos.

Abrir la economía, en lugar de cerrarla. La adaptación y la reconversión de la capacidad industrial instalada es una base para atender, con los tiempos que se necesiten, siempre y cuando, se eliminen (o al menos se reduzcan) los obstáculos y reglamentaciones que las limitan, lo hará posible. Esta adaptación y reconversión, facilitada por la eliminación de regulaciones que son obstáculos para mejorar sus niveles de productividad, tendrán impacto en las provincias.

Cadenas de valor (innumerables ítems) sin necesariamente pensar en términos de productos terminados, valor agregado como directriz, desarrollos tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial, energía, agroindustria y pesca, minería, turismo y servicios relacionados. Aprovechar la base industrial instalada para su adaptación y reconversión de esas capacidades a la demanda originada en los países europeos. La capacitación en trabajos de calidad debiera estar relacionada con estos procesos de reconversión.

Mercados (X-M e Inversiones): partiendo de un contexto de una economía globalizada y teniendo en cuenta las asociaciones entre países y empresas transnacionales (el 60 % del comercio internacional) en función de sus propias estrategias de asegurar cadenas de proveedores e inversiones relacionadas.

En términos de grandes proyectos de inversión (facilitados por el RIGI y su eventual extensión a otros sectores) provenientes de fondos y de inversión, bancos y empresas, pensar en esquemas integrales que incluyan la infraestructura y logística relacionadas, en su vínculo con empresas proveedoras

locales y regionales y, a la vez, tener en cuenta las disposiciones que regulan esos proyectos.

Criterios específicos

En términos de países y subregiones frente al enfoque exclusivamente hacia Europa:

a. Multilateral (directrices basadas en comercio):

- ≈ Mejorar el comercio intrazona con un desarrollo de sectores más amplio).
- ≈ LATAM (revalorizar los acuerdos de alcance parcial que surgieron de la reforma ALADI 1980), pensar en términos de promoción de inversiones de países europeos con destino a terceros países ya sea dentro de la región como a mercados que sean complementarios con el potencial exportados argentino (triangulación).
- ≈ Potencial del acuerdo Mercosur-EFTA.

b. Bilaterales (solo se incluyen los que en un primer análisis nos indican las hipótesis basadas en complementariedad comercial y promoción de inversiones, sin que ello excluya a otros países o iniciativas puedan surgir de las discusiones de este proyecto):

- ≈ **Países miembros de la Unión Europea** en y con los tiempos que permitirán adaptar los sectores a las regulaciones europeas, la cuales son las que permitirán a la Argentina contar con los estándares para acceder a todos los mercados, más allá de los europeos, o sea al mundo. Acuerdos de protección a las inversiones de nueva generación y para evitar la doble imposición.
- ≈ **Italia (G7)**

- A partir de la similitud (en distintas dimensiones) de los respectivos modelos de desarrollo industrial (py-

mes) profundizar el vínculo e identificar asociaciones empresarias entre proveedores de tecnologías, modelos de *management*, capacitación para empleos de calidad, generación de empleo formal de las industrias argentinas. Roles UIA (cámaras sectoriales y bilateral) y CONFINDUSTRIA.

- GNL: Asociaciones con ENI, siguiendo el ejemplo de Vaca Muerta en otras áreas de la Cuenca Austral y *off shore*.
- Industria satelital para observación de la tierra y servicios satelitales múltiples.
- *Soft power*: cultura y deporte. Calidad de vida.

≈ **España**

- Asociaciones empresarias, concesiones y privatizaciones teniendo en cuenta la ya instalada capacidad financiera y bancaria española en la Argentina.
- Industria pesquera, instalaciones en costa patagónica.
- Utilización fondos de cooperación regionales en proyectos específicos a nivel subnacional.
- *Soft power*: cultura y deporte. Calidad de vida.

≈ **Reino Unido (G7)**

- Acuerdo comercial y de facilitación de comercio, para lo cual ya existen estudios preliminares post-Brexit.
- Acuerdo entre Stock Exchange y Comisión Nacional de Valores.
- Utilización del “diálogo comercial” (ver Comunicado conjunto 13/9/2016) para promover inversiones y utilización créditos comerciales UKEF para grandes proyectos.

≈ **Alemania (G7):** Ver artículo de Susanne Käss.

≈ **Francia (G7):** Inversiones en los sectores de energía, minería, agroindustria y desarrollos tecnológicos.

≈ **Benelux, Países Bajos y países escandinavos**

- Inversiones en infraestructura y logística en sistemas hídricos.
- Inversiones privadas en desarrollos tecnológicos.
- Fondo de sustentabilidad noruego generado en tiempos de superávit de la balanza comercial

≈ **Turquía** (en su calidad de puente entre Europa y Medio Oriente, miembro de la OTAN y sin membresía con la UE en cooperación comercial y aduanera, control de migraciones y refugiados y seguridad regional): sectores defensa, nuclear (salud e investigación) y modelo de cooperación regional con acceso a mercados africanos.

Patricio Dellagiovana

Argentina frente al nuevo escenario global: democracia, libertad y una agenda estratégica con Europa

La relación de Argentina con la Unión Europea y, particularmente, el vínculo entre el MERCOSUR y Europa deben ser analizados en el marco de una transformación profunda del sistema internacional. Estamos atravesando un escenario caracterizado por una creciente competencia entre potencias, una fragmentación de las cadenas globales de valor, el regreso de la geopolítica como ordenador de las relaciones económicas y una disputa cada vez más evidente por el acceso a recursos estratégicos, alimentos, energía, tecnología y conocimiento.

En este contexto, el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea representa mucho más que un entendimiento comercial. Después de más de dos décadas de negociaciones,

el hecho de que el Acuerdo Interino de Comercio haya comenzado a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo de 2026 constituye un punto de inflexión para ambas regiones. El acuerdo contempla una reducción significativa de barreras arancelarias y un acceso preferencial para una amplia proporción de las exportaciones del MERCOSUR al mercado europeo, con un impacto especialmente relevante para el sector agroalimentario.

Pero sería un error leer este proceso únicamente desde la perspectiva de cuánto exportaremos o cuánto importaremos. La verdadera discusión es qué lugar quiere ocupar la Argentina en el mundo.

Europa y el MERCOSUR: de la negociación comercial a la asociación estratégica

Durante demasiados años, la discusión sobre el acuerdo MERCOSUR-UE estuvo condicionada por una lógica estrictamente comercial: cuotas, aranceles, períodos de transición y acceso a mercados. Todos estos elementos son importantes, pero resultan insuficientes para comprender la dimensión estratégica del acuerdo.

Europa sigue siendo uno de los principales polos económicos, tecnológicos y regulatorios del mundo. El MERCOSUR, por su parte, concentra activos que serán cada vez más relevantes en la economía internacional: alimentos, agua, energía, minerales críticos, biodiversidad y capacidad productiva. En un mundo en el que la seguridad alimentaria y energética vuelven a ocupar un lugar central en las agendas de las grandes potencias, América del Sur deja de ser solamente una región periférica para convertirse en un espacio de creciente relevancia geopolítica. Argentina tiene allí una oportunidad extraordinaria.

Nuestro país posee una combinación poco frecuente de recursos naturales, capacidad agroindustrial, talento científico, energía convencional y renovable, minerales críticos y una

tradición institucional y cultural profundamente vinculada con Europa. El desafío consiste en transformar esa dotación de recursos en poder económico, influencia internacional y desarrollo. Por eso, la política argentina hacia Europa debería superar la lógica de la oportunidad coyuntural. Necesitamos una estrategia de largo plazo.

El acuerdo MERCOSUR-UE debe ser entendido como una plataforma para aumentar el comercio, pero también para atraer inversiones, incorporar tecnología, desarrollar infraestructura, mejorar estándares productivos y fortalecer cadenas de valor. El objetivo no debería ser solamente exportar más *commodities*, sino exportar más conocimiento incorporado a nuestros recursos. Esto es particularmente importante para el agro.

La Argentina tiene una de sus mayores ventajas competitivas en su capacidad para producir alimentos de manera eficiente. Pero el futuro de la agricultura mundial no se definirá únicamente por la cantidad de toneladas producidas. Se definirá por quién controla la tecnología, la información, la logística, la trazabilidad, la genética, la biotecnología y los estándares que determinan el acceso a los mercados. El agro argentino, por lo tanto, debe ser pensado como un sector estratégico de la política exterior.

No se trata simplemente de defender al campo frente a las regulaciones europeas ni de aceptar pasivamente las condiciones de acceso al mercado. Se trata de sentarse en la mesa donde se definen las reglas del sistema alimentario internacional. La Argentina tiene que pasar de ser un proveedor de alimentos a ser un actor global de la seguridad alimentaria.

Democracia, libertad y desarrollo

Existe, además, una dimensión política que no debería quedar relegada frente a la agenda comercial.

Argentina y Europa comparten una concepción de la democracia, el Estado de derecho, las libertades individuales y la

vigencia de los derechos humanos que constituye uno de los principales activos de nuestra relación bilateral. En un mundo donde las democracias liberales enfrentan desafíos internos y externos, preservar y profundizar esos valores también constituye una cuestión de interés nacional.

La libertad política y la libertad económica no son conceptos contrapuestos. Por el contrario, una democracia estable requiere instituciones capaces de garantizar reglas previsibles, seguridad jurídica, propiedad, competencia, libertad de expresión y capacidad de emprender. Del mismo modo, el desarrollo económico sostenible necesita instituciones democráticas que generen confianza y permitan construir políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales. Este punto resulta especialmente relevante para la Argentina.

La inserción internacional no puede depender de los cambios de gobierno ni de oscilaciones ideológicas permanentes. Una política exterior sería requiere continuidad en aquello que constituye el interés nacional, aun cuando existan diferencias legítimas respecto de los medios para alcanzarlo. Europa puede ser un socio especialmente importante en esta construcción. No solamente por sus inversiones y su mercado, sino porque existe un espacio de cooperación institucional en materias como educación, ciencia, innovación, fortalecimiento democrático, transformación digital y desarrollo sostenible.

La relación con la Unión Europea debería contribuir, entonces, a consolidar una Argentina más abierta al mundo, más competitiva y con instituciones más fuertes.

¿Cuál debería ser la agenda bilateral para los próximos veinte años?

Si pensamos la relación Argentina-Europa con un horizonte de veinte años, la agenda debería organizarse alrededor de algunos grandes ejes estratégicos.

El primero es comercio e inversiones. El objetivo debe ser diversificar y sofisticar nuestra matriz exportadora. El acuerdo MERCOSUR-UE debe servir para generar nuevas inversiones productivas y para integrar a empresas argentinas, particularmente pequeñas y medianas, a las cadenas globales de valor.

El segundo es agroindustria y seguridad alimentaria. Argentina tiene condiciones para convertirse en uno de los grandes proveedores confiables de alimentos del mundo. Para eso necesita invertir en infraestructura, logística, tecnología, trazabilidad y ciencia aplicada. La relación con Europa debería orientarse a generar cooperación tecnológica y no solamente a negociar cuotas de exportación.

El tercero es energía. Vaca Muerta, el gas, el potencial renovable y las nuevas tecnologías vinculadas con la transición energética ofrecen una oportunidad para convertir a la Argentina en un actor energético relevante. Europa, que necesita diversificar sus fuentes de abastecimiento, puede ser un socio estratégico en materia de infraestructura, inversión y tecnología.

El cuarto es minerales críticos y transición tecnológica. Litio, cobre y otros recursos estratégicos serán fundamentales para las industrias del futuro. El desafío argentino consiste en evitar una nueva relación centro-periferia basada exclusivamente en la extracción de recursos. Debemos avanzar hacia cadenas de valor que incorporen procesamiento, tecnología, conocimiento e innovación.

El quinto es ciencia, tecnología, inteligencia artificial y educación. La competencia geopolítica del siglo XXI no será solamente por territorios o mercados: será también por talento. Argentina tiene universidades, investigadores, científicos y profesionales capaces de participar de esa competencia. La cooperación con Europa debería promover movilidad académica, investigación conjunta, transferencia tecnológica

y desarrollo de capacidades en inteligencia artificial, biotecnología, energía y tecnologías estratégicas.

El sexto es democracia, instituciones y seguridad. Frente al avance del crimen organizado transnacional, las amenazas híbridas, la desinformación y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, la cooperación entre democracias será cada vez más importante. Argentina y Europa pueden desarrollar una agenda común en materia de ciberseguridad, fortalecimiento institucional y protección de las sociedades democráticas.

Finalmente, existe una dimensión que considero transversal: la construcción de confianza. En política internacional, la confianza es un activo estratégico. Los países invierten, comercian y cooperan cuando perciben previsibilidad. Por eso, Argentina necesita construir una política exterior que combine principios e intereses, sin confundir autonomía con aislamiento ni alineamiento con dependencia.

Una oportunidad que no deberíamos desaprovechar

El mundo que viene será probablemente menos estable, más competitivo y más geopolítico. Las certezas que dominaron buena parte de las últimas décadas están siendo reemplazadas por una disputa por mercados, tecnologías, recursos y áreas de influencia. En ese escenario, Argentina tiene una oportunidad que no puede reducirse a una negociación comercial.

Somos un país democrático, productor de alimentos, con enormes recursos energéticos y minerales, capacidades científicas y una ubicación estratégica en América del Sur. Europa necesita socios confiables y el MERCOSUR necesita recuperar capacidad de proyección internacional. La cuestión central es si Argentina será capaz de convertir sus ventajas naturales en una verdadera estrategia de poder nacional. Para eso necesitamos recuperar una idea que durante demasiado

tiempo quedó relegada: la política exterior también es política de desarrollo.

Defender la libertad, fortalecer la democracia, abrir mercados, atraer inversiones, desarrollar el agro, agregar valor a nuestros recursos naturales, invertir en conocimiento y construir alianzas internacionales no son agendas separadas. Son dimensiones de una misma estrategia. La relación con Europa puede ser uno de los pilares de esa estrategia. Pero para que eso ocurra, Argentina debe dejar de preguntarse solamente qué puede obtener de Europa y comenzar a preguntarse qué lugar quiere ocupar junto a Europa en el mundo que viene. Esa diferencia es fundamental. Porque en el siglo XXI, los países que tendrán mayor capacidad de decisión no serán necesariamente los que posean más recursos, sino aquellos capaces de convertir sus recursos, su talento y sus instituciones en poder estratégico.

Argentina tiene los recursos para hacerlo. El desafío es construir la voluntad política y la estabilidad institucional necesarias para transformar esa posibilidad en una política de Estado.

IV. Relaciones de la Argentina con Asia

Jorge Malena | Lía Rodríguez de la Vega

En el transcurso de los últimos treinta años, el avance de la globalización y la complementariedad entre los aparatos productivos han impulsado una convergencia sin precedentes entre América Latina —y la Argentina en particular— y las regiones del Asia Oriental y el Asia Meridional. Este proceso trasciende el intercambio comercial y de inversiones para asentarse sobre un marco de interlocución política estructurado a través de visitas de alto nivel de jefes de Estado, cancilleres y ministros de Economía. En el plano comercial, la relación argentina con el nordeste asiático, dominada por la República Popular China, presenta un marcado déficit estructural que se ve neutralizado por el saldo superavitario que el país mantiene con el Sudeste Asiático y el sur de Asia. Esta asimetría señala la necesidad estratégica de direccionar mayores esfuerzos diplomáticos hacia estas dos últimas regiones, con el objetivo de diversificar los mercados de destino y atenuar la dependencia de la balanza comercial con el mercado chino.

En materia de inversiones para el desarrollo de infraestructura estratégica, el escenario regional exige trascender la exclusividad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Pekín. Si bien los desembolsos chinos resultan relevantes, la Argentina debe articular esquemas de captación de capitales que incluyan a otros actores de peso como Japón y la República de Corea, aprovechando la oferta de financiamiento proveniente de organismos multilaterales de crédito de origen asiático. A su vez, en el plano geopolítico y de reputación internacional, la proyección argentina no se agota en la agenda comercial: la participación histórica del país en misiones multinacionales de mantenimiento de la paz —como el liderazgo en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en la región— constituye un activo relevante de poder blando que

refuerza la imagen institucional y el posicionamiento frente a los actores asiáticos.

Por otro lado, el escenario internacional contemporáneo está atravesado por una competencia estratégica que se despliega activamente en el plano simbólico, la disputa por la memoria histórica y la construcción de narrativas globales. En este contexto, el ámbito educativo y científico se configura como una plataforma crítica de proyección internacional que opera más allá de las fluctuaciones de las gestiones estatales, facilitando la vinculación directa entre instituciones y personas. El sector educativo constituye un espacio diferencial de poder blando e innovación que impacta de manera directa en la matriz económica. La articulación entre el sistema científico-universitario —generador de desarrollo tecnológico y biotecnología aplicada— y el sector productivo privado resulta clave para garantizar la transferencia de conocimiento al aparato exportador, mientras que las reestructuraciones e incertidumbres operativas en organismos técnicos de investigación agraria e industrial minan la capacidad nacional para consolidar alianzas tecnológicas estratégicas en el exterior.

Finalmente, un obstáculo recurrente en la formulación de la política exterior argentina hacia Asia es la escasa profundidad en el conocimiento que la clase política y dirigencial empresarial posee sobre las especificidades de la región. Frente a esta vacancia, la cooperación entre *think tanks*, universidades y centros de investigación resulta indispensable para la formación de una masa crítica de especialistas. La construcción de un relevamiento sistemático de cuadros técnicos y académicos especializados en la realidad asiática constituye un insumo estratégico para el Estado, siendo una condición previa fundamental para diseñar políticas de inserción internacional sostenibles, fundadas en la comprensión profunda del escenario asiático y enfocadas en resguardar los intereses soberanos del país en el mediano y largo plazo.

Sabrina Olivera

En relación con el vínculo entre India y Argentina y con los temas de la agenda bilateral, en primer lugar, cabe mencionar el aspecto político y/o diplomático. India y Argentina mantienen relaciones diplomáticas desde hace 75 años y, específicamente desde 2019, la relación entre ambos ostenta el estatus de asociación estratégica. Debemos tener presente también en esta dinámica la importancia de India actualmente en el tablero internacional y que ambos países forman parte del G20. Por tal motivo, mantener espacios de confluencia es de suma relevancia para Argentina.

Como segundo tema de agenda, mencionaremos la cuestión del comercio. India y Argentina tienen un muy buen vínculo comercial, superavitario para Argentina. Por tal motivo, India está muy interesada en insertar sus propios productos para equilibrar esta situación. El comercio bilateral viene en un claro crecimiento: del 2019 al 2022 se duplicó, pero en el 2023 disminuyó por cuestiones propias de Argentina, como fue la sequía.

India actualmente es el quinto socio comercial de Argentina, pese a que, en algún momento, durante la pandemia del COVID-19 supo ser el cuarto. Puntualmente, en el ámbito del comercio bilateral, cabe mencionar la relevancia de la cuestión agropecuaria. El perfil exportador de la Argentina hacia la India está fuertemente concentrado en el complejo oleaginoso, donde el aceite de soja representa aproximadamente entre el 88 % y el 89 % de los envíos. El porcentaje restante se compone de otros aceites comestibles —como maíz y girasol—, manufacturas de origen industrial, pieles y combustibles. Por su parte, la Argentina importa desde el mercado indio principalmente productos químicos, maquinarias, combustibles y autopartes.

Dentro del mapa de comercio e inversiones, corresponde resaltar el marcado interés de la India en el litio. El país asiático planifica para el año 2030 un ambicioso programa que

busca lograr que un tercio de su parque automotor esté conformado por vehículos eléctricos; por lo tanto, el litio constituye un recurso crítico e indispensable para la fabricación de sus baterías. Este objetivo estratégico impulsa las inversiones de la India en Catamarca a través de la corporación estatal KABIL (*Khanij Bidesh India Limited*), al tiempo que se han entablado conversaciones con otras provincias nortenas bajo el mismo propósito.

En esa misma dirección, y ampliando los ejes de la agenda bilateral, cabe destacar el potencial del sector de los hidrocarburos. En ese entendimiento, se ha conformado un grupo de trabajo conjunto sobre minería y energía, mientras que YPF suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Estado surasiático, que mantiene un firme interés en la explotación de Vaca Muerta, así como en proyectos de cobre y oro.

Un aspecto central para considerar es el sector farmacéutico. La India es un actor global preponderante en la producción de medicamentos genéricos y, en febrero de este año, se registró un hito inédito: el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo autorizó por primera vez la importación directa de estos productos a la provincia. Asimismo, rige un Acuerdo de Preferencias Fijas entre la India y el Mercosur que ambas partes han intentado ampliar en los últimos años. Esta negociación busca no solo diversificar el universo de productos incluidos en el tratado, sino también avanzar de manera decidida en la reducción de los aranceles vigentes.

Por otra parte, la agenda bilateral incluye el eje de defensa y seguridad. En este ámbito, se han desarrollado cursos académicos conjuntos, intercambios de formación en tropas de montaña y proyectos de cooperación tecnológica. Cabe añadir que tanto la India como la Argentina han sufrido el flagelo del terrorismo, lo que genera una posición y un lenguaje comunes en los foros multilaterales. Finalmente, se han formalizado diversos memorandos de entendimiento orientados a la reparación logística y la adquisición de repuestos para helicópteros de las Fuerzas Armadas.

Los ámbitos nuclear y aeroespacial también constituyen áreas de gran interés mutuo. Un claro ejemplo de ello es la presencia de la empresa argentina INVAP en la India, donde desarrolló una planta de producción de radioisótopos médicos. Asimismo, la cooperación en ciencia y tecnología cuenta con una trayectoria de varios años, destacándose los proyectos conjuntos en materia agropecuaria, biotecnología y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). De hecho, actualmente operan en la Argentina alrededor de diez compañías indias vinculadas a este último sector.

En el plano de la diplomacia cultural, cabe resaltar que la práctica del yoga se encuentra ampliamente extendida en la sociedad civil argentina, potenciada por diversas iniciativas oficiales como la celebración anual del Día Internacional del Yoga. En el ámbito educativo, nuestro país es beneficiario recurrente del prestigioso programa de becas de formación técnica que ofrece el gobierno indio, denominado Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC, por sus siglas en inglés).

Respecto a la dinámica política tras el cambio de administración en la Argentina a fines de 2023, resulta insoslayable mencionar un hito diplomático reciente: en julio de 2025, el primer ministro de la India, Narendra Modi, realizó una visita oficial a nuestro país. Aunque su estadía fue breve —de apenas veinte horas, aprovechando su participación en la cumbre de los BRICS en Brasil—, el encuentro marcó un precedente histórico al convertirse en la primera visita estrictamente bilateral de un mandatario indio desde 1968, año en que Indira Gandhi estuvo en la Argentina. Si bien otros primeros ministros indios visitaron el territorio nacional en las últimas décadas, no lo habían hecho en el marco de una agenda bilateral exclusiva, sino como eventos paralelos (*side events*) en el contexto de foros multilaterales, como ocurrió durante la Cumbre del G20 en Buenos Aires en 2018.

El encuentro celebrado entre el primer ministro indio y el presidente de la Nación, junto con sus respectivos equipos de

trabajo, revistió una enorme trascendencia, ya que permitió abordar de manera directa los principales temas de la agenda bilateral. En rigor, se ratificó el compromiso de profundizar los lazos estratégicos y, asimismo, el presidente Javier Milei recibió una invitación oficial para visitar la India. Concretar este viaje resultaría sumamente positivo para consolidar el vínculo, en sintonía con las visitas de Estado realizadas oportunamente por los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández durante sus respectivos mandatos. Sostener estos encuentros al más alto nivel resulta clave para garantizar la continuidad de una verdadera política de Estado.

Debe tenerse presente que la India representa un mercado de aproximadamente 1460 millones de habitantes, una escala ante la cual la Argentina, en su carácter de productor global de alimentos, no puede desatender semejante costo de oportunidad. En materia de facilitación de la movilidad, recientemente se dispuso la exención del visado de ingreso para ciudadanos indios que viajen a la Argentina, siempre que cuenten con una visa de turismo vigente para los Estados Unidos. Esta medida, largamente debatida durante años por ambos gobiernos, augura un incremento sustantivo en el flujo de turistas, académicos y hombres de negocios hacia nuestro país.

Hacia el futuro, la cooperación política en los organismos multilaterales debe ser preservada y potenciada, considerando el rol crecientemente preponderante que la India desempeña en la gobernanza global. En ese orden, resulta conveniente explorar nuevos nichos comerciales y tender de forma urgente a la diversificación de nuestras exportaciones. La actual concentración del esquema comercial entraña un riesgo latente: ante una eventual decisión de Nueva Delhi de suspender o arancelar las compras de aceite de soja y otros aceites comestibles, la economía argentina se enfrentaría a un grave estrangulamiento de sus ingresos externos.

Por último, cabe destacar que la profundización de la cooperación cultural y educativa constituye el pilar fundamental para alcanzar un conocimiento mutuo duradero y exitoso a largo plazo. Para lograr este entendimiento, es indispensable la formación y especialización de recursos humanos, no solo en el ámbito corporativo o en las organizaciones de la sociedad civil, sino muy especialmente en el sector público, que es, en definitiva, el encargado de diseñar e instrumentar estas políticas de Estado de largo aliento.

Gabriela Yoshihara

En cuanto a Japón y Argentina, ambos países tienen una relación bilateral formal de 127 años y en 2023 anunciaron la aspiración a elevar la relación a asociación estratégica global.

El principal tema de la agenda es mejorar el entorno empresarial para fomentar y aumentar la inversión y cooperar desde la perspectiva de la seguridad económica. Estos dos términos —*seguridad económica*— para Japón son una política de Estado: tiene legislación específica y es un concepto que no solo incluye economía y seguridad alimentaria, sino estrategia y defensa.

Como punto recurrente en la agenda bilateral, está pendiente el reclamo de Japón de la aprobación por el Poder Legislativo argentino del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones (TBI) del 2018 y el Convenio para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal (CDI) del 2019. Ambos fueron firmados entre mandatarios, y el Poder Legislativo japonés ya los aprobó. Hay un problema técnico, pero con voluntad política se puede destrabar, porque se está retrasando muchísimo el avance de los proyectos.

Con el cambio de Gobierno, en diciembre del 2023, se mantuvo la relación, tanto la cooperación técnica y científica en áreas como la energía nuclear, el espacio, la agricultura y el comercio entre los países, así como el fortalecimiento de

lazos históricos y culturales forjados por la comunidad Nikkei (descendientes de japoneses), y el diálogo político sobre temas globales. Ya en el *Libro Azul* de la Cancillería japonesa se incluye una mención sobre la gestión del presidente Milei, sobre todo en temas de recuperación económica y fiscal, pero también menciona algunos inconvenientes que tenemos, como las minorías en el Congreso o todavía los índices de pobreza, y destaca la necesidad de una diplomacia estratégica para mantener un orden internacional basado en el Estado de derecho.

La cooperación técnica entre Argentina y Japón data de 1959 a través de programas de capacitación, no solamente en Japón, sino también en terceros países. Se trabaja mucho en la cooperación triangular, una modalidad de cooperación internacional que involucra a Japón, a un país receptor de ayuda con experiencia (como Chile, Argentina o México) y a un tercer país de la región para desarrollar proyectos conjuntos. Este enfoque aprovecha las fortalezas y experiencias de las naciones involucradas, es decir, la experiencia técnica japonesa y la experiencia local en un sector específico, para abordar desafíos de desarrollo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El envío de expertos y voluntarios continúa sin ningún inconveniente, así como el desarrollo de proyectos de cooperación técnica. Las áreas prioritarias son la preservación del medioambiente, la reactivación económica y el apoyo a la cooperación horizontal Sur-Sur. Japón, a través de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA), colabora en proyectos vinculados a estos sectores, utilizando herramientas como programas de capacitación, el envío de expertos y voluntarios, y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Desde el año 2005, la Embajada del Japón en la Argentina ha ejecutado 75 proyectos equivalentes a 4.9 millones de dólares mediante el programa de cooperación APC (Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana). Bajo esta modalidad, se firman contratos

con organizaciones sin fines de lucro tales como organizaciones no gubernamentales, organismos de Gobiernos locales, instituciones médicas e instituciones educativas, entre otros.

En mayo de este año, se firmó un convenio de cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Cancillería argentina, a través de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional. Esta iniciativa, denominada KT+, constituye la continuación del proyecto Kaizen-Tango —vigente entre 2017 y 2024—, el cual se orientó a optimizar la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Con este nuevo programa, que tendrá una duración de tres años, se incorporarán herramientas de transformación digital, economía verde y gestión del diseño, bajo un enfoque de sustentabilidad. Actualmente, las instituciones se encuentran en la etapa de convocatoria de las pymes que resultarán beneficiarias de esta asistencia técnica japonesa.

En el ámbito académico, la JICA implementó desde el año 2021 en varios países de Latinoamérica el programa Cátedras JICA, mediante convenios con universidades de la región. En nuestro país, esta iniciativa se dicta en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y continúa desarrollándose y expandiéndose de manera sostenida, con un foco primordial en el estudio del modelo de desarrollo japonés.

Alicia Romero Moreno

Desde hace años, el intercambio comercial con Japón ha mantenido un comportamiento relativamente estable, aunque históricamente caracterizado por una balanza desequilibrada. Si bien este flujo se ve influenciado por la economía global, el vínculo sigue siendo sólido y mutuamente beneficioso gracias a la complementariedad estructural de ambas economías. Por ejemplo, en 2021 el comercio bilateral total alcanzó los 1298 millones de dólares, con un saldo negativo para la Argentina de 286 millones. En 2023, el intercambio as-

cendió a 2700 millones de dólares, registrando exportaciones argentinas por 1300 millones e importaciones desde el archipiélago nipón por 1400 millones, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC). Ya en 2024, la contracción financiera experimentada por Japón afectó la economía argentina en mayor medida que a otros países de la región.

Las exportaciones argentinas hacia el mercado japonés se concentran principalmente en productos primarios y agroindustriales, tales como maíz, soja, sorgo, pescados, mariscos, carnes y ciertas frutas. Asimismo, se destacan los despachos de aluminio en lingotes y sus manufacturas, junto con el carbonato de litio. En contrapartida, las importaciones procedentes de esa nación abarcan automóviles, autopartes, maquinaria, materiales y aparatos eléctricos, equipamiento industrial, tecnología y productos farmacéuticos. Respecto a la inversión extranjera directa (IED), Japón posee una presencia relevante en nuestro territorio; no obstante, se ubica en el decimoquinto puesto del ranking de países inversores, con un stock aproximado de 782 millones de dólares distribuidos en alrededor de 70 empresas. En este esquema, resulta insoslayable el peso de firmas emblemáticas del sector automotriz y de motovehículos, como Toyota y Nissan, entre otras.

En 2024, la Argentina se ubicó a nivel mundial en el puesto 53 como proveedor de importaciones hacia Japón, con envíos por un valor de 1246 millones de dólares, y en el puesto 49 como destino de las exportaciones japonesas, con 307 millones de dólares. Respecto a las barreras de acceso, los aranceles promedio aplicados por el país asiático ascienden al 65 % en productos lácteos, al 6,9 % en oleaginosas y sus subproductos industriales, y al 9 % en carnes, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En relación con el sector cárnico, existe actualmente un programa especial que, si bien maneja un volumen acotado, ha permitido abrir las puertas de ese exigente mercado con relativa seguridad. No obstante, el acceso está restringido exclusivamente a la producción proveniente de la Patagonia por razones de

estatus sanitario; por tal motivo, se llevan adelante tratativas bilaterales para ampliar la habilitación al resto del territorio nacional, o al menos a nuevas regiones, y de ese modo incrementar el volumen de exportación.

Por otra parte, durante el año 2024, tres empresarios nacionales expusieron los logros alcanzados en sus respectivos sectores y el modo en que lograron insertarse exitosamente en el mercado japonés. El primer caso corresponde a la exportación de arroz, un hito sumamente llamativo dadas las características de ese consumo en Asia. El segundo caso destaca a una diseñadora y productora que, con una impronta propia, comercializa desde hace varios años sus textiles, diseños y confecciones en Japón. El tercer ejemplo es el del creador y CEO de una firma argentina radicada en Tokio, quien ha invertido en dicho país y opera activamente como *trader*.

En lo relativo a las áreas de cooperación bilateral, Japón ha sido considerado históricamente la puerta de entrada para las naciones de la región hacia el mercado asiático. Acceder a dicho destino implica sortear rigurosos requisitos, complejas certificaciones sanitarias y fitosanitarias, elevados estándares de calidad y la exigencia de consumidores sofisticados, lo cual demanda el estricto cumplimiento de normativas técnicas. Este exhaustivo proceso de control rige tanto para los productos agrícolas como para otros rubros regulados; consecuentemente, su correcta satisfacción viabiliza el acceso al mercado nipón. En este escenario, persisten oportunidades significativas para la carne vacuna de alta calidad que, como se mencionó previamente, actualmente se exporta desde la región patagónica, mientras se gestiona la inclusión de otras zonas del territorio nacional mediante la superación de las barreras arancelarias y fitosanitarias.

Al respecto, en julio de 2025, autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación recibieron a una delegación del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF). Durante el encuentro, la representación local manifestó la firme de-

cisión de posicionar a la Argentina como un proveedor confiable y previsible de bienes agroindustriales, consolidando una asociación estratégica para la seguridad alimentaria del archipiélago. Estas definiciones institucionales revisten una importancia capital para la diplomacia nipona, dado que Japón es un neto importador de alimentos y nuestro país cuenta con la capacidad estructural para abastecer sus demandas sectoriales.

En sintonía con estas metas, la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) —organismo gubernamental autónomo fundado en 1958 para la promoción recíproca del comercio y las inversiones— impulsa activamente el desarrollo de actividades bilaterales. A tal fin, mantiene un fortalecimiento continuo de sus lazos con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, articulando su agenda en torno a ejes estratégicos: la formación de sistemas para la circulación nacional e internacional de capitales, tecnología y recursos humanos; el desarrollo de mercados globales para productos agrícolas, forestales, pesqueros y alimentarios; y el impulso al sector minero, con especial foco en el cobre y el litio, minerales críticos para la transición energética y la electromovilidad a nivel global.

Asimismo, esta agenda conjunta prioriza el apoyo a la expansión de las pequeñas y medianas empresas, el comercio agropecuario y la promoción de la innovación. En este sentido, JETRO coordina seminarios, vincula a pymes de ambas naciones para propiciar el intercambio corporativo, gestiona programas de capacitación y promueve activamente el flujo comercial directo entre el entramado productivo argentino y japonés.

En respuesta al interrogante sobre la continuidad de estas políticas, cabe señalar que la estrategia de Japón en materia de formación y capacitación ha mantenido una línea histórica invariable. En la actualidad, esta oferta se canaliza a través de cuatro ejes institucionales bien definidos: los programas administrados por la JICA, las becas del Ministerio de Educación

(MEXT), las partidas del Ministerio de Relaciones Exteriores y los fondos específicos destinados a la comunidad *Nikkei*. El impacto de estos esquemas es de tal magnitud que existen becarios que, tras ingresar mediante un programa inicial de corta duración, extendieron su estadía para cursar maestrías y doctorados, permaneciendo hasta nueve años en el archipiélago y llegando a desempeñarse como profesores residentes.

Diego Cagliolo

En cuanto a los principales temas de la agenda actual con China, el más importante es el abultado déficit comercial. Es muy probable que, al cierre del año, los números muestren un récord negativo en la balanza, lo cual se explica por la complementariedad entre lo que Argentina vende y lo que ellos compran.

Ligado a esto se encuentran los proyectos e inversiones chinas contemplados en el memorándum de entendimiento por la Franja y la Ruta. Muchos de ellos están demorados o directamente detenidos. Existe aquí una clara vinculación con el plano político, ya que son proyectos que traspasan la línea roja fijada por el Gobierno en temas estratégicos, como la tecnología 5G, las cuestiones de defensa o industrias de difícil resolución.

Otro punto clave es que China ha establecido una vinculación directa con las provincias. Al encontrar dificultades con el Gobierno nacional, buscaron lazos directos con los gobernadores. La presencia de la Embajada china en el interior es muy fuerte, debido a que los recursos naturales de su interés son de propiedad provincial. China hizo un buen trabajo en ese aspecto, aprovechando que las provincias necesitan inversiones y anuncios que generen empleo. Esto produce un contrapunto con el orden nacional y suele generar choques entre las provincias y la Nación.

Esto lleva a otro tema prioritario que es el *swap*, un mecanismo financiero que ayudó a la Argentina a paliar una crisis de reservas muy importante.

Por otra parte, un tema de agenda con menos prensa es la pesca ilegal. Habrá que ver qué evolución tiene este problema, considerando que ambos países firmaron el acuerdo para eliminar los subsidios a la pesca que entró en vigor hace poco tiempo, lo que demuestra una voluntad de China de tratar el asunto en los ámbitos multilaterales.

En el plano positivo, se destaca la evolución del intercambio de personas. Recientemente se implementó una exención de visas que permite a los ciudadanos argentinos viajar por tres meses sin realizar el trámite. Esta medida se relaciona con un cambio en la percepción que tienen los argentinos sobre China.

El 80 % de los argentinos tiene una imagen positiva de China; más allá del intercambio comercial y de los aspectos políticos, esta percepción favorable se consolida en la población. El 22 %, por ejemplo, ya ha realizado compras a través de la plataforma Shein, lo que demuestra una penetración comercial muy importante. Asimismo, el 68 % considera que la calidad de los productos chinos es buena, lo que marca un contraste con la mirada histórica que los asociaba a bienes de segunda categoría. Por otra parte, el 45,7 % opina que China es más importante que Estados Unidos a nivel global, una tendencia que no parece motorizada por directrices gubernamentales, sino instalada de forma genuina en la sociedad. Este panorama explica que el 74 % de los encuestados manifieste entusiasmo y curiosidad respecto a ese país.

En sintonía con este acercamiento, se trabaja en la implementación de un próximo vuelo directo entre la Argentina y China. Esta conectividad aérea impulsará de manera significativa los intercambios no solo comerciales y empresariales, sino también turísticos, culturales y educativos, consolidando el peso del *soft power* chino en nuestro país.

Respecto a si el cambio de Gobierno en la Argentina modificó la relación bilateral o si se mantienen la cooperación y el comercio, la realidad muestra que el vínculo político efectivamente sufrió modificaciones. Aunque el impacto no fue tan abrupto como se preveía durante la campaña electoral, donde el discurso había sido más virulento, la relación se ha enfriado. De alguna manera, las necesidades prácticas de la Argentina, como la renovación del *swap* de monedas, obligaron a moderar la postura inicial, y el escenario futuro de los lazos políticos permanece abierto.

En cuanto al comercio, si bien ambas economías son complementarias, China ha ido variando su estrategia y desplazando parte de sus compras hacia Brasil.

Sobre las áreas potenciales de cooperación entre ambos países, esta se mantendrá siempre y cuando exista un ambiente político que la propicie. El sector de los minerales, fundamentalmente el litio, y la agenda de inversiones en obras de infraestructura que la Argentina necesita siguen siendo ejes clave. Si bien estos proyectos presentan condicionamientos y cláusulas de confidencialidad que requieren ser trabajadas, el espacio de cooperación potencial con China es amplio.

Finalmente, la Argentina necesita encarar en algún momento un acuerdo comercial con China, una necesidad que también se plantea respecto a Estados Unidos. En este sentido, será clave evaluar el próximo plan quinquenal chino para analizar cómo continúa y se profundiza su política de apertura económica.

Clara Sánchez

Asia del Sur es quizás la región con la que la Argentina mantiene hoy un menor vínculo. Desde el punto de vista económico, es un área con altos indicadores de pobreza integrada por Pakistán, Nepal, Bután, Sri Lanka, Bangladesh y Afganistán. No se trata de una región homogénea; por el contrario, atraviesa crisis políticas profundas, reflejadas en las recientes

revoluciones en Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. A esto se suman graves deficiencias de infraestructura, al punto de que el suministro eléctrico diario no está asegurado de forma continua en ninguno de estos países.

Sus economías se basan principalmente en la producción agrícola y en la maquila, especialmente la confección textil a gran escala. La inserción de la Argentina en estos mercados es compleja debido a la inestabilidad política actual, la distancia geográfica y la falta de políticas de promoción mutua. No obstante, existe un potencial de desarrollo recíproco basado en la complementariedad de los mercados. La Argentina no cuenta con la capacidad de desarrollar una industria textil de esa magnitud, carece de ese volumen de población —caracterizada en Asia del Sur por ser joven— y posee una legislación laboral diferente. En contrapartida, estos países presentan serias carencias en sus sectores agroindustriales, y es allí donde la Argentina dispone de un nicho enorme para transferir conocimiento.

Actualmente, la Argentina cuenta con solo dos representaciones diplomáticas directas en la zona. La primera es la Embajada en Pakistán, una de las más antiguas de la región. Históricamente, Pakistán ha sido el socio tradicional de la Argentina en este espacio geográfico, aun cuando hoy la India posea una mayor preponderancia económica en el análisis regional.

La segunda representación es la Embajada en Dhaka, Bangladesh, abierta en 2023 tras el impacto y la visibilidad que tuvieron los festejos locales durante el mundial de fútbol. Se trata de una sede diplomática muy nueva que enfrenta un desafío operativo enorme. Debido a la compleja situación sociopolítica y a la falta de infraestructura básica en Bangladesh, sostener el funcionamiento cotidiano de esta Embajada requiere de un esfuerzo considerable por parte del Estado argentino.

El acercamiento con Pakistán muestra una continuidad en el tiempo regulada por el diálogo y los acuerdos entre el INTA y su contraparte, la PARC. Más allá de la exportación tradicional de productos básicos como aceites de soja y girasol, algodón y legumbres —entre las que se destaca el envío de garbanzos—, es necesario explorar nuevas demandas. Existe una oportunidad clara en el desarrollo de vínculos tecnológicos, como el sistema de silobolsas. La balanza comercial con Pakistán es superavitaria para la Argentina en 250 millones de dólares; una cifra baja si se considera que se opera frente a un mercado de 350 millones de personas. El marco institucional para expandir este comercio cuenta con un acuerdo marco MERCOSUR-Pakistán firmado en 2024, lo que plantea el debate de si la Argentina debe negociar bilateralmente o en bloque. En este sentido, la exclusión de la Argentina del BRICS representa una dificultad para el acercamiento a los mercados asiáticos en general.

Por su parte, la relación comercial con Bangladesh arrojó un superávit de 700 millones de dólares en 2023, superando al pakistaní. En términos globales, los saldos positivos con Asia del Sur y el Sudeste Asiático permiten compensar en parte el déficit comercial que la Argentina mantiene con China e India.

Sin embargo, es fundamental comprender la reconfiguración geopolítica actual en la región, marcada por el acercamiento estratégico entre China, India, Bangladesh y Pakistán. Estos movimientos entre Estados pueden impactar directamente en el modo en que se compran los bienes argentinos. Si China decide adquirir los buques de soja en grano para procesar el aceite en su territorio utilizando nuestro propio *know-how* y luego vendérselo a la India, la Argentina perderá ese mercado. Por este motivo, el país debe dejar de depender exclusivamente de que el aceite de soja o de girasol equilibre la balanza, y comenzar a exportar tecnología agroindustrial consolidada, como la siembra directa y los sistemas de almacenamiento.

Silvana Barrios

La balanza comercial de la Argentina es superavitaria con los mercados menores de la región: Sri Lanka, Nepal y Bután, aunque los volúmenes de intercambio general son bajos.

El comercio principal se concentra con Sri Lanka. La Argentina exporta hacia ese destino aceite de girasol, soja, productos lácteos, preparaciones alimenticias, gluten de trigo y otros productos de la molienda. En contrapartida, las importaciones provienen principalmente de rubros donde el país isleño es productor mundial, como el té —con características comerciales distintas al de la India—, la canela, otras especias, fibras textiles y productos manufacturados.

En el caso de Nepal, la balanza comercial también es superavitaria para la Argentina. El intercambio se limita a la exportación de un pequeño puñado de productos agroindustriales y la importación de bienes de nicho similares a los de Sri Lanka. El desarrollo de este comercio es muy acotado debido a las limitaciones geográficas de Nepal, su falta de infraestructura interna y su fuerte dependencia comercial con China e India.

Con Bután el comercio es mínimo y esporádico, aunque la Argentina mantiene el saldo a favor. Un hito destacado ocurrió en 2022, cuando una empresa de La Rioja concretó la primera exportación considerable de aceite de oliva argentino hacia ese mercado. Más allá de estos envíos puntuales, Bután exporta principalmente energía hidroeléctrica y productos básicos a sus países vecinos, por lo que su oferta exportable hacia la Argentina es muy limitada. Finalmente, respecto a Afganistán, no se dispone de registros comerciales estadísticos.

En el plano de la diplomacia militar, la Argentina alcanzó un hito histórico al aportar, por primera vez en la trayectoria de sus Fuerzas Armadas, al comandante de la misión UNMOGIP (Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán). El contralmirante Ríos se desempeñó como jefe de esta misión durante dos años, un

cargo de alta relevancia institucional, ya que reporta de forma directa a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, manteniendo reuniones periódicas con el secretario general, António Guterres.

Actualmente, la Argentina mantiene su presencia en el terreno con el despliegue de personal militar femenino en funciones operativas dentro de la organización. Esta participación activa es muy valorada por el Gobierno de Pakistán. Por el contrario, las autoridades de la India rechazan formalmente la vigencia de esta misión internacional, motivo por el cual no realizan comentarios institucionales al respecto.

Nadia Radulovich

El Sudeste Asiático está integrado por once países si se contabiliza a Timor Oriental, además de las diez naciones miembro de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Desde una perspectiva política y diplomática, los vínculos bilaterales con la Argentina pueden dividirse por décadas. Las relaciones históricas comenzaron con Filipinas en 1946, mientras que los lazos con el resto de la región se consolidaron durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, especialmente con Vietnam y Laos tras sus respectivas reconfiguraciones territoriales. Esta diversidad institucional responde a que la mayoría de estos Estados son de creación reciente, constituidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

En el plano económico, la atención debe centrarse en el grupo denominado ASEAN 6, compuesto por Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Singapur. Dentro de este esquema, Vietnam se posiciona como el principal socio comercial de la Argentina en la región, seguido por Indonesia y Malasia. En su conjunto, la ASEAN representa uno de los bloques comerciales clave que contribuyen a equilibrar el déficit de la balanza comercial que el país mantiene con China.

Aunque el saldo global con la ASEAN es superavitario, la desagregación bilateral presenta realidades diversas. La Ar-

gentina mantiene un comercio deficitario con Singapur y Tailandia. En el caso de Singapur, el intercambio se concentra principalmente en servicios financieros y logísticos, mientras que con Tailandia el déficit responde al desempeño del sector industrial.

Por su parte, Vietnam, Indonesia y Malasia concentran el 90 % de las exportaciones argentinas hacia el bloque, seguidos en menor medida por Filipinas. El total del intercambio comercial con la ASEAN alcanzó casi los 10.000 millones de dólares el año pasado, de los cuales 6700 millones correspondieron a exportaciones argentinas. Si bien estos números son modestos en comparación con el comercio global, confirman la relevancia del bloque para el sector externo argentino. Las ventas se concentran estructuralmente en la soja y sus derivados, encontrando ciertas sensibilidades arancelarias en productos como el azúcar, cuyo acceso a mercados como Filipinas e Indonesia es complejo debido a la protección de sus productores locales de caña.

El Sudeste Asiático es una región con un alto crecimiento económico y una sólida inserción en las cadenas globales de producción y suministro. En materia de inversiones en la Argentina, los sectores más relevantes son la construcción, la logística y la minería.

Existen antecedentes concretos de capitales de la región en el país, como la inversión malaya en la Autopista del Oeste o, de manera más reciente, la participación de una empresa filipina en la terminal portuaria de Exolgan en Dock Sud. El interés de estas economías en proyectos locales se mantiene activo y ha receptado de manera favorable la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), valorado por las contrapartes asiáticas como una herramienta de simplificación de trámites aduaneros y eliminación de barreras. Un reflejo de este interés fue el proyecto de inversión de la compañía malaya Petronas, que, aunque luego no se concretó por definiciones corporativas y políticas, evidenció el atractivo estratégico del sector energético argentino.

La agenda de cooperación técnica incluye áreas de alta transferencia tecnológica. Entre ellas destacan los proyectos en materia de drones con Malasia, los lazos en el ámbito educativo, y el trabajo conjunto en antropología forense con Vietnam y Laos financiado a través del Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FOA). Asimismo, la seguridad alimentaria y energética son prioridades consolidadas. Países como Malasia e Indonesia han lanzado planes gubernamentales destinados a incrementar su producción interna y diversificar sus importaciones agroindustriales, lo que representa una oportunidad para la capacidad instalada argentina, que incluye también potencial de cooperación en energía nuclear, un asunto sensible en el Sudeste Asiático por factores geográficos e históricos. En minería, tanto Indonesia como Malasia mantienen el foco en el desarrollo del litio, especialmente en la provincia de Catamarca.

Este interés recíproco se refleja en la reciente apertura de una consejería agrícola en la Embajada argentina en Hanói, un paso clave dado que Vietnam no solo lidera el comercio regional, sino que se ubica entre los principales socios comerciales de la Argentina a nivel global. El dinamismo de la relación quedó demostrado en la intensa agenda de misiones oficiales del último año. La Argentina recibió delegaciones de Filipinas (en julio, noviembre y marzo), Indonesia, Vietnam y Tailandia (en septiembre). En sentido inverso, misiones diplomáticas y comerciales argentinas visitaron Indonesia, Vietnam y Tailandia con el objetivo de profundizar el comercio agroindustrial.

Un vector estratégico para la expansión comercial es el mercado de alimentos con certificación Halal. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo y posee más de un 80 % de población musulmana, condición que también comparte la mayoría de los habitantes de Malasia. Ambos países cuentan con sus propias agencias certificadoras reconocidas internacionalmente. Obtener estas homologaciones permitiría a la Argentina abrir mercados no solo en el sector de la carne y

los alimentos, sino también en los rubros farmacéutico y de servicios financieros.

Finalmente, las opciones de acuerdos comerciales de largo plazo se concentran en los principales socios de la región. Filipinas avanzó recientemente en la apertura de su mercado para la carne aviar argentina, mientras que Vietnam, Indonesia y Malasia han manifestado formalmente su intención de negociar Tratados de Libre Comercio (TLC) con el MERCOSUR. Respecto al acuerdo MERCOSUR-Singapur firmado en 2023, el proceso de implementación es lento debido a los tiempos de ratificación legislativa de cada país signatario, siendo Paraguay el único que lo ha ratificado formalmente hasta el momento. Este antecedente sirve como marco de referencia para las futuras negociaciones con el resto del bloque.

Julio Sevares

Argentina tiene relaciones con los principales países de Asia, que comenzaron hace más de un siglo con el establecimiento de relaciones con Japón. En la actualidad son importantes las relaciones con ese país, con Corea y también con India y Vietnam, con los cuales se ha incrementado el intercambio comercial en los últimos años. Pero, actualmente, la relación más significativa desde el punto de vista económico es la que mantiene con China.

Desde comienzos del siglo las relaciones comerciales con China aumentaron sustancialmente impulsadas por la demanda de ese país de alimentos, petróleo y minerales, la cual impactó positivamente en las exportaciones de Argentina y de otros países latinoamericanos.

En 2024 China fue el cuarto destino de las exportaciones y el segundo de las importaciones locales. Las exportaciones fueron de 6100 millones de dólares —el 7,6 % de las ventas externas totales— y las importaciones, de 11.590 millones —el 19 % del total—, sumando un déficit comercial casi igual al total de las exportaciones. Se trata del principal déficit co-

mercial del país, mucho mayor que el que ese año tuvo con la Unión Europea y Brasil. La Argentina tiene déficit comercial con el país asiático desde 2007. En los ocho primeros meses de 2025, China fue el segundo destino de las exportaciones con el 9 % del total y el segundo de las importaciones con el 22 % del total, con un déficit de 6100 millones. En conjunto, en 2024, la balanza comercial argentina fue superavitaria en 18.900 millones de dólares.

Es de notar que en los últimos años las exportaciones a Vietnam e India crecieron, representaron el 4 % y 3 % de las exportaciones en 2024, contribuyendo a diversificar el comercio con Asia, y que Argentina tiene superávit comercial con esos países. Por otra parte, Argentina tiene un déficit comercial con Japón y superávit con Corea del Sur.

Las exportaciones a China están concentradas en materias primas y alimentos. En 2024, el 41 % fueron porotos de soja; el 18 %, carne bovina congelada y deshuesada; el 8 %, sorgo, 6% aceite de soja y 6% calamares. Las importaciones incluyen una variedad de productos industriales, como componentes electrónicos, así como bienes de capital y repuestos para maquinaria.

Esto indica que el comercio con China es muy asimétrico y mucho más primarizado que el comercio exterior en su conjunto e, incluso, que el comercio con Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. Como base de comparación, en los ocho primeros meses de 2025, los productos primarios representaron solo el 26 % de las exportaciones totales; las manufacturas de origen agropecuario, un 35 %; y las de origen industrial, un 26 %.

En los últimos años se firmaron numerosos acuerdos, entre ellos el Plan de Acción Estratégica de Cooperación en Agroindustria 2022-2027; acuerdos de cooperación en semilla, biotecnología, sanidad vegetal, en minería y geología y en educación, cultura y ciencia, que incluyen reconocimiento recíproco de estudios universitarios e intercambio de es-

tudiantes e investigadores. También hay cooperación en la lucha contra el crimen organizado. En octubre de 2024, se firmó un acuerdo para eliminar la doble imposición. Existen también acuerdos subnacionales con provincias o ciudades argentinas.

En importancia, destacan los siguientes acuerdos:

- El *swap* de divisas de 2009 entre el Banco Central Argentino y el Banco Popular de China, por 18.000 millones de dólares. En 2023 se negoció la activación (posibilidad de utilizar) de un tramo de 5000 millones. El acuerdo se renovó en 2024.
- El Acuerdo de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales, de 2012, por el que se instaló un observatorio chino del espacio lejano en Neuquén, el cual pueden usar científicos argentinos un 10 % del tiempo. Este emprendimiento generó críticas de Estados Unidos, que considera que China podría usarlo con fines militares.
- El Tratado de Asociación Estratégica Integral, de 2014. En ese contexto, en 2021, Argentina ingresó al Banco de Inversión en Infraestructura (AIIB) destinado a financiar inversiones de la Nueva Ruta de la Seda (BRI) y en 2022 se incorporó al grupo de la Nueva Ruta de la Seda.

En lo que va del siglo, empresas públicas y privadas chinas hicieron inversiones significativas en Argentina en sectores de infraestructura, petróleo, minería, energías renovables y actividades asociadas a la producción agraria y el transporte. Estas inversiones están relacionadas con las necesidades de abastecimiento de China y son mayormente financiadas por el inversor.

Iniciativas destacables son las represas Kirchner y Cepernic, en la provincia de Santa Cruz, iniciadas en 2015, suspendidas y reactivadas con un convenio firmado en julio de 2025; la compra de Nidera en 2014 y de Noble en 2017 por la empre-

sa estatal china COFCO. Ambas son importantes comercializadoras de granos.

También importantes son la renovación del ferrocarril Belgrano Cargas y la instalación del parque solar en Cauchari, en Jujuy, la planta de energía renovable más grande de América Latina. Actualmente, hay nuevos emprendimientos y proyectos chinos en hidrocarburos, litio, oro y en otros minerales.

El vínculo con China se profundizó a lo largo del siglo por razones económicas como el incremento del comercio y el ingreso de inversiones de ese país, pero también por la orientación política de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y de Alberto Fernández, que otorgaron a la vinculación con China un papel importante tanto por afinidades ideológicas como por contrapeso a la influencia de Estados Unidos.

Es de notar que, desde el inicio de las relaciones diplomáticas con la República Popular, en 1972, el Partido Justicialista y sus Gobiernos mantuvieron una relación muy cercana con los Gobiernos chinos y con el PCC.

El Gobierno de Javier Milei, iniciado en diciembre de 2023, modificó esa orientación con una alineación estratégica con Estados Unidos, pero trata de mantener activo el vínculo con China por la importancia de su mercado, por su capacidad inversora y por la necesidad de sostener el *swap* de monedas. Como reflejo de esa orientación pragmática (y de la necesidad de divisas del país), el Gobierno negoció la renovación del *swap* en junio de 2024.

Rodolfo Caffaro Kramer

A pesar de la relación creciente que la Argentina mantiene desde hace años con la ASEAN, la falta de información mutua sigue siendo una de las principales barreras arancelarias y comerciales. El desconocimiento recíproco entre ambas regiones dificulta que tanto el sector público como el privado

tomen decisiones estratégicas basadas en proyecciones certeras.

No obstante, la interacción empresarial ha comenzado a dinamizarse con la llegada de firmas de capitales asiáticos al mercado argentino. Un caso relevante es el de Viettel, una de las corporaciones de telecomunicaciones más importantes de Vietnam y de la región de la ASEAN, que inició operaciones en el país con la importación y distribución de cableado de fibra óptica, un insumo que no se fabrica localmente. Asimismo, la compañía malaya Aerodyne, líder global en tecnología de drones con presencia en 47 países, se adjudicó recientemente una licitación internacional en la ciudad de Pergamino para proveer servicios de monitoreo aplicados a la seguridad y a la agricultura de precisión.

Las proyecciones de organismos como la CEPAL y la ALADI coinciden en que Asia-Pacífico es la región con mayor proyección de crecimiento global. Para el año 2030, se estima que ese mercado concentrará el 66 % de la clase media mundial y generará prácticamente el 60 % del consumo global.

Ante este escenario, la seguridad alimentaria se ha consolidado como una política de Estado prioritaria para las naciones de la ASEAN. Esto posiciona al MERCOSUR en un rol estratégico indiscutible como proveedor de valor, una oportunidad regulatoria y comercial que el bloque regional debe capitalizar de manera urgente mediante una agenda de articulación público-privada de largo plazo.

El posicionamiento en la ASEAN requiere un trabajo de gestión institucional coordinado frente al sector público. Un antecedente de esta estrategia se dio en Uruguay durante la gestión del canciller Rodolfo Nin Novoa. Mientras la agenda oriental estaba volcada casi exclusivamente hacia China, la presentación de datos comerciales sobre la ASEAN motivó una misión oficial a Yakarta; tras evaluar el potencial de Indonesia, el Gobierno uruguayo resolvió la apertura de su Embajada en ese país.

Por su parte, Brasil ha mostrado una inserción mucho más temprana y activa en la ASEAN. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño cuenta con un área técnica dedicada de forma exclusiva a este bloque asiático. En sintonía con esta dinámica regional, se estableció una oficina de representación en São Paulo para potenciar los lazos comerciales desde el principal polo económico de la región.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre el MERCOSUR y Singapur constituye una plataforma fundamental de acceso y marca el camino para las negociaciones bilaterales que ya se iniciaron con Malasia, Vietnam e Indonesia.

Más allá de la baja de aranceles, la importancia de avanzar hacia convenios comerciales con las economías de la ASEAN radica en su impacto modernizador sobre la estructura del MERCOSUR. Estos acuerdos de nueva generación obligan a actualizar la normativa del bloque regional al incorporar disciplinas ausentes en los tratados originarios, tales como cláusulas de preservación del medioambiente, compromisos de facilitación del comercio y marcos regulatorios para la economía digital.

V. Relaciones de la Argentina con América Latina

Josefina Vecino Beauge

La agenda entre Argentina y América Latina está marcada por una combinación de desafíos internos que enfrenta obstáculos estructurales y políticos, oportunidades económicas y una creciente necesidad de posicionamiento estratégico frente a los poderes globales.

Dentro de los principales temas que conforman esa agenda, podemos mencionar:

- **Las relaciones bilaterales y las tensiones diplomáticas vigentes.** La falta de una retórica de unidad latinoamericana sigue siendo uno de los factores más determinantes a la hora de identificar la multicausalidad de la fragmentación regional y la falta de cohesión entre los países que debilita la capacidad de negociación conjunta.
- **La integración regional y la participación en foros internacionales.** Si bien ha habido numerosos intentos de integración, no ha habido una institución que logre centralizar las identidades nacionales y apostar a una agenda común en temas estratégicos como energía, clima y comercio. La necesidad de una institucionalidad que trascienda las ideologías de las gestiones de gobierno nacionales es quizás uno de los factores más relevantes de esa agenda.
- **El cambio climático y la transición energética.** La crisis ambiental representa una variable central en la política exterior de la región. Los fenómenos climatológicos extremos, acentuados por el cambio climático, están causando mayor volatilidad en los rendimientos de los *commodities*, lo que impacta en la oferta y los precios a nivel mundial. El cambio climático se posiciona en las agendas, reemplazando al terrorismo y la rivalidad geopolítica como principal fuente de inseguridad regional.

- **Recursos estratégicos.** América Latina tiene un rol central en la seguridad alimentaria a nivel mundial que hoy cada vez más es considerada una prioridad global y una cuestión de seguridad nacional. Sumado a ello, América Latina cuenta con altos porcentajes en reservas mundiales de litio, cobre, níquel y otros minerales claves. En este contexto, América Latina, considerando también que se trata de una región sin conflictos bélicos (o al menos no de la magnitud de los que amenazan al resto del mundo), cuenta con herramientas de poder para garantizar esa seguridad y estabilidad nacional en términos de recursos.
- **Comercio y acuerdos internacionales.** Diversificar mercados y reducir dependencias con los poderes centrales. El patrón de intercambio aún hoy sigue siendo a grandes rasgos materias primas por manufacturas lo que limita el valor agregado regional.

América Latina es un actor clave en el mercado de *commodities*, pero no actúa como bloque con capacidad de negociación efectiva. Es decir, la influencia en los precios y reglas del comercio global es marginal y, en la mayor parte de los casos, acompaña las pautas fijadas por los poderes centrales. Para comprender por qué, podemos identificar algunos aspectos centrales.

En primer lugar, los precios de las *commodities* en términos generales se fijan de forma externa y se fijan en mercados internacionales relevantes por sus volúmenes de transacción (Chicago, Londres, Shanghái).

En segundo lugar, la volatilidad y la vulnerabilidad con respecto a las fluctuaciones de los precios son una constante en el mercado de *commodities*. Y América Latina, al ser altamente dependiente de esos mercados, se ve fuertemente afectada por las fluctuaciones de los precios lo que repercute directamente en la balanza comercial y la estabilidad macroeconómica de los países.

En tercer lugar, el negocio de las *commodities* se volvió cada vez más un negocio financiero que da lugar a oportunidades especulativas en los mercados de granos, aceite, combustibles y ganados. Se crean cada vez más productos de inversión derivados de alimentos. En esta línea, es importante destacar una experiencia en la cumbre del G20 en el año 2023 donde Argentina propuso la creación de un mecanismo global de estabilización de precios de alimentos.

Con el objeto de mitigar estas fluctuaciones tan nocivas para nuestras economías, sería necesario contar con mecanismos de coordinación, un equivalente regional a la OPEP en lo que tiene que ver con la coordinación de producción y precios de *commodities* estratégicos.

Y finalmente, dos reflexiones: hay latente una necesidad estratégica en América Latina vinculada a “descomoditizar” las materias primas, a agregarles valor y volverlos bienes diferenciados por atributos valorados en los mercados internacionales.

Hay un agotamiento del modelo de desarrollo productivo que hoy tenemos en términos del sector agropecuario y hay una oportunidad en todo lo que tiene que ver con energía, minería y cambios tecnoproductivos globales. El economista Bisang identifica una gran oportunidad en términos del potencial que implica la ampliación conceptual de la agroindustria en “biomasa para distintos usos” (nuevos usos en alimentos, bioenergías y biomateriales, insertándose en las cadenas de valor de la bioeconomía global). Por lo que, si se logra coordinar una estrategia común de desarrollo, adoptar estándares ambientales comunes y coordinar políticas públicas, existe una posibilidad tangible de liderar una nueva narrativa global sobre la agricultura.

Miranda Bandoni

La Argentina continúa siendo altamente dependiente del sector agroexportador, lo que la mantiene vulnerable frente

a los *shocks* externos de precios y a los ciclos climáticos. Por esto, para lograr una apertura comercial sostenible, resulta indispensable ganar competitividad y diversificar la matriz productiva y exportadora.

En este marco, el país enfrenta una oportunidad para reinsertarse en los mercados globales. La restauración del orden macroeconómico y el posible retorno a los mercados financieros internacionales permitirían al sector privado planificar a largo plazo e impulsar las inversiones necesarias en sectores estratégicos como la energía y la minería, pilares para diversificar la producción. Estos sectores son estratégicos por contar con disponibilidad de recursos esenciales para la transición energética global, por lo que pueden marcar un salto cualitativo en el perfil exportador argentino.

El sector agroindustrial, por su parte, también dispone de márgenes de mejora. La inversión en capital y tecnología puede incrementar la productividad de la tierra y reafirmar la posición del país como actor relevante en el comercio internacional, recuperando parte del protagonismo que tuvo cuando se lo conocía como “el granero del mundo”.

La demanda alimentaria mundial podría aumentar entre 700 y 800 millones de consumidores hacia 2033, principalmente en Asia y África.

Este escenario representa una gran oportunidad, aunque Argentina deberá cerrar la brecha de productividad que la separa de Brasil, que logró superar al país pese a operar bajo condiciones similares, lo que evidencia fallas estructurales internas.

Finalmente, si bien las inversiones y el orden macroeconómico son condiciones indispensables para el desarrollo, no resultan suficientes por sí solas. Será necesario fortalecer la seguridad jurídica, flexibilizar el mercado laboral, promover el crédito a las pymes y establecer un régimen previsional sostenible, a fin de construir un entorno que favorezca la estabilidad y la competitividad a largo plazo.

La región atraviesa una etapa de desarticulación política e institucional, en la que no existe una agenda regional activa ni sostenida. El consenso a nivel bloque se ve obstaculizado por las diferencias ideológicas entre Gobiernos, que impiden definir prioridades comunes en materia económica, comercial y de integración estratégica. Es grave la ausencia de diálogo regional ante problemáticas críticas como la crisis en Venezuela, el narcotráfico o la seguridad, temas que históricamente requerían una respuesta coordinada.

En este contexto, el MERCOSUR enfrenta un estancamiento estructural. El bloque no logra avanzar en temas estratégicos ni alcanzar consensos básicos sobre su apertura comercial, lo que ha limitado su proyección internacional. El 83 % del comercio mundial se desarrolla bajo condiciones sin preferencias, mientras que el MERCOSUR mantiene acuerdos con países que representan apenas el 10 % del PBI mundial. Esta falta de dinamismo ha derivado en una pérdida de relevancia relativa frente a otros esquemas de integración, como la Alianza del Pacífico o los tratados bilaterales impulsados por economías asiáticas.

Resulta entonces imperativo repensar los objetivos y la estructura del bloque, orientándolo hacia una integración más pragmática y flexible. La consolidación del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea podría constituir un punto de inflexión, tanto por su valor económico como por el efecto político de reposicionar al bloque en el comercio global.

Asimismo, el nuevo escenario internacional, marcado por la transición energética, la digitalización y la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, exige que la región articule una estrategia común para defender sus intereses en materia de recursos estratégicos, como el litio, la energía o la agricultura sustentable. Una institucionalidad regional más estable y profesionalizada, que trascienda los cambios de Gobierno, sería clave para fortalecer la capacidad de negociación colectiva y proyectar una América Latina más integrada y competitiva en el orden global emergente.

Juan Maximiliano Moreno

América Latina carece de una agenda unificada de comercio internacional. Es un crisol profundamente heterogéneo donde coexisten grandes diferencias de criterios, incluso durante los períodos de mayor afinidad política regional. La Argentina ha experimentado ciclos de cercanía y alejamiento con países como Venezuela y Bolivia; sin embargo, nunca se consolidó una agenda agrícola común, ni siquiera en los escenarios de mayor convergencia ideológica.

Esta falta de visión estratégica plantea la necesidad de repensar el MERCOSUR, una discusión profunda que ha sido sistemáticamente postergada por las urgencias macroeconómicas, desde la devaluación de Brasil a fines de la década de 1990, el debate sobre si se debe reconstruir el bloque como un mercado común, una unión aduanera o una zona de libre comercio sigue abierto. Países como Brasil, Uruguay y Paraguay tienen claras sus metas a pesar de las tensiones internas; la Argentina, en cambio, carece de una postura definida. Como consecuencia, el comercio intrazona se encuentra estancado y los temas centrales del proceso de integración permanecen irresueltos desde hace veinticinco años. No se ha consolidado una política automotriz común, no se han integrado las aduanas, persisten las deficiencias en los controles fronterizos y sectores como el azucarero continúan excluidos de los acuerdos. Al eludir estas áreas sensibles, el bloque bloquea su propia evolución y dificulta una inserción eficiente en los mercados globales.

A nivel global, el 17 % del comercio mundial se realiza bajo condiciones preferenciales, mientras que el 83% restante se rige por la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF), donde los países compiten pagando los mismos aranceles o bajo cuotas específicas. En este escenario, el MERCOSUR muestra limitaciones estructurales: solo cuenta con acuerdos comerciales con países que representan el 10 % del producto bruto

interno (PBI) mundial, una debilidad crítica en sectores donde los márgenes de ganancia son reducidos.

Aunque el ideal sería enfocar las exportaciones en bienes de alto valor —como la carne de cuota Hilton, que alcanza valores elevados por tonelada—, la principal fuente de divisas de la Argentina proviene de *commodities* como la harina, el maíz, el aceite y el poroto de soja. El mercado de estos productos es de grandes volúmenes, pero con márgenes estrechos, donde una variación arancelaria de pocos puntos porcentuales determina la permanencia o exclusión de un competidor.

Históricamente, cuando el país enfrenta crisis de reservas, recurre al sector agroindustrial, el cual lidera la generación de divisas junto con la minería. Sin embargo, mientras el mundo apoya a su agricultura, la Argentina la grava. Según el indicador de Estimación del Apoyo al Productor (PSE) elaborado por la OCDE, existen solo tres países en el mundo con un índice de apoyo negativo, y la Argentina es uno de ellos. Bajo estas condiciones fiscales y regulatorias, constituye una excepción que el país logre mantenerse como el tercer exportador neto global de productos agrícolas.

Hace veinticinco años, los rendimientos promedio y la producción agrícola general de Brasil eran inferiores a los de la Argentina. Hoy, ese país nos ha superado y se ubica como el segundo exportador mundial de productos agrícolas, detrás de Estados Unidos y seguido por Australia y la Argentina. Este avance se dio bajo las mismas condiciones arancelarias y no arancelarias de acceso a los mercados internacionales; es decir, responde a un desarrollo competitivo interno que la Argentina no ha podido emular.

El escenario hacia la próxima década ofrece una oportunidad inédita. El crecimiento demográfico global incorporará cientos de millones de personas concentradas en economías en desarrollo de la India, Malasia, el norte de África y Medio Oriente. A diferencia de lo que ocurre en mercados maduros como Estados Unidos o Europa —donde un aumento del in-

greso no altera el consumo de alimentos—, en estas regiones en desarrollo el crecimiento económico se traduce de forma directa en una mayor demanda de proteínas. Ante un mundo en transición donde las instituciones de la posguerra están bajo revisión, la demanda de alimentos de las naciones emergentes que no cuentan con capacidad de autoabastecimiento sigue siendo una certeza estructural.

Existe una correlación histórica directa entre el desempeño del modelo agroindustrial y la estabilidad económica del país; las principales crisis macroeconómicas argentinas han coincidido con ciclos de sequías severas. La agroindustria es una actividad federal presente en las veintitrés provincias, articula más de treinta clústeres agroexportadores y representa un componente fundamental del PBI.

Más allá de su peso económico, el sector enfrenta el desafío global de responder a corrientes de opinión que buscan señalar a la agricultura como el principal factor de degradación ambiental. Si bien la actividad requiere mejoras continuas, no es el principal emisor de gases de efecto invernadero y es, por el contrario, el sector más vulnerable al cambio climático al tratarse de una producción a cielo abierto. No existe seguridad alimentaria global sin agricultura. Por lo tanto, el sector requiere construir una nueva narrativa que ponga en valor su aporte a la sostenibilidad y al abastecimiento global, revirtiendo las tendencias regulatorias internacionales que pretenden limitar la producción de alimentos.

El orden comercial internacional, cuyas reglas bilaterales fueron diseñadas originalmente por Estados Unidos y Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, atraviesa un cambio de paradigma. La adopción de políticas proteccionistas y la búsqueda de libertad de acción por parte de Washington frente a su déficit comercial con Pekín han debilitado la arquitectura multilateral de la OMC y la gobernanza de las Naciones Unidas. En lugar de dirimir los conflictos bajo el marco normativo internacional, las grandes potencias optan por soluciones transaccionales directas.

Este nuevo contexto, sumado a las tensiones de la guerra en Ucrania, ha llevado a que los países desarrollados y emergentes prioricen la seguridad y el autoabastecimiento alimentario, implementando programas de soberanía agrícola incluso en condiciones geográficas desfavorables. No obstante, China —con una población de 1400 millones de habitantes— carece de los recursos físicos para ser autosuficiente en soja y carnes, lo que la obliga a depender de un esquema concentrado de proveedores: Brasil, Estados Unidos y la Argentina.

El riesgo estratégico para la Argentina no radica en una contracción de la demanda de Pekín, sino en la agenda de negociación ofensiva que despliega Estados Unidos. Cuando Washington negocia acuerdos bilaterales con China, presiona para obtener ventajas de acceso para sus propios productos agrícolas. Ante un eventual entendimiento comercial entre Estados Unidos y China, el desvío de comercio representa una amenaza concreta que podría relegar a la Argentina a mercados secundarios. Si bien el mercado global tiende a equilibrarse —ya que los saldos que Estados Unidos redirija a China liberarán espacio en otros destinos—, el perjuicio para el país se medirá en términos de precios menos competitivos y condiciones de acceso más desfavorables.

Bruno Binetti

En la actualidad, la Argentina carece de una agenda estructurada hacia América Latina. Si bien abundan los temas potenciales de debate, no existe una visión estratégica sobre cómo enfocar los vínculos con la región. Esta parálisis no responde únicamente a decisiones del Gobierno nacional, sino a un contexto de fragmentación política regional sin precedentes recientes.

La mayoría de los países latinoamericanos enfrentan serios desafíos de gobernabilidad, estancamiento económico, polarización y tensión social. Este escenario fuerza a los Gobiernos a concentrar su capital político en la gestión interna.

Asimismo, las tensiones del sistema internacional obligan a las administraciones a priorizar el manejo de sus relaciones bilaterales con las grandes potencias —Estados Unidos y China— y, secundariamente, con la Unión Europea, relegando la construcción de consensos vecinales.

El particular alineamiento internacional del Gobierno argentino introduce condicionamientos adicionales. Las dos principales economías de la región, Brasil y México, están gobernadas por administraciones de signo político opuesto al de Buenos Aires, lo que limita los espacios de articulación. En el caso específico de Brasil, y a pesar de las disputas públicas entre los mandatarios, la relación institucional en sus aspectos esenciales se mantiene operativa, lo que constituye un dato positivo para la estabilidad bilateral.

El MERCOSUR continúa siendo el primer anillo de inserción para la Argentina. Más allá de las discrepancias ideológicas y de las tensiones discursivas, subsiste un consenso técnico dentro del bloque respecto a la conveniencia de ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sin embargo, la concreción de este tratado de libre comercio ya no depende de las dinámicas internas del MERCOSUR, sino de los debates y las resistencias proteccionistas dentro de la propia Unión Europea.

La falta de articulación regional se evidencia en la ausencia de canales formales ante crisis de alta sensibilidad. El escenario en Venezuela y la posibilidad de una intervención directa por parte de Estados Unidos no han generado un diálogo público entre las Cancillerías de la región para coordinar una respuesta frente a un evento que afectaría de forma directa la estabilidad del área.

Una parálisis similar se observa en las agendas de seguridad y lucha contra el narcotráfico, a pesar de la prioridad que Washington asigna a estos temas. Históricamente, América Latina contaba con foros institucionales y espacios de consulta ministerial que permitían el intercambio de información

y la discusión política entre presidentes. La ruptura de estos canales institucionales impide hoy la construcción de diagnósticos compartidos, incluso en áreas donde los intereses nacionales convergen.

La política exterior argentina muestra un giro condicionado por la necesidad de respaldo financiero internacional, reflejado en el alineamiento con las prioridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta estrategia desplaza los temas tradicionales de la diplomacia argentina hacia agendas extrarregionales, enfocadas en Medio Oriente y en la vinculación con partidos políticos afines en Europa Occidental.

Bajo estas condiciones, incluso una administración comprometida con el latinoamericanismo enfrentaría serias dificultades para materializar la integración. El desempeño de la gestión de Alberto Fernández demostró que un discurso de corte regionalista tampoco se traduce automáticamente en avances concretos si las condiciones estructurales son adversas. El principal obstáculo para una planificación diplomática de largo plazo sigue siendo la fragilidad económica de la Argentina. La estabilización macroeconómica interna constituye la prioridad ineludible; sin ella, el país carece del margen de maniobra necesario para proyectar una política exterior activa y sostenible en la región.

La integración comercial intrarrregional es una herramienta válida, pero enfrenta límites objetivos. La idea de que América Latina pueda actuar como un bloque comercial unificado choca con la falta de convergencia en las estructuras productivas: los países de la región suelen ser competidores directos en los mercados globales.

El objetivo de incorporar valor agregado a las exportaciones y modificar los términos de intercambio no se resolverá mediante la creación de un cartel de *commodities*, dado que las materias primas agropecuarias de la región son sustituibles por la oferta de otros mercados. El desafío de la indus-

trialización rural y de la diversificación exportadora sigue dependiendo del desarrollo competitivo interno y de las reformas estructurales de cada economía, más que de acuerdos políticos regionales de alcance limitado.

Tomás Múgica

Existe una fragmentación política a nivel regional. Hace algunos años Barletta y Trinkunas (2004) señalaban la existencia de un balance de identidades en América Latina, por oposición a un balance de poder: las políticas exteriores de los países cambian y los vínculos intrarregionales se transforman al compás de las modificaciones en las identidades políticas de los Gobiernos.

Por otro lado, está claro que la actual administración argentina tiene un marcado desinterés por la región. Hay algunos gestos que son bastante evidentes en este sentido. Basta comparar la cantidad de veces que Milei visitó Estados Unidos con las que visitó países de la región (12 visitas a Estados Unidos contra 8 visitas a países latinoamericanos, a octubre 2025). Resulta claro que el Gobierno privilegia el vínculo con Estados Unidos, y más ampliamente con el norte desarrollado, por encima de los vínculos con la región y con el sur global en su conjunto.

Sin embargo, la geografía sigue siendo un factor determinante en las relaciones internacionales, de manera que la vecindad hace de alguna manera inevitable que haya una vinculación con un nivel de densidad importante con los países de la región, a pesar de las diferencias ideológicas entre los Gobiernos. Puesto de otra manera, la vecindad genera una agenda que se impone a las diferencias políticas, “que cae por su propio peso”. Esto es bastante notorio en la relación entre Argentina y sus vecinos, especialmente los del Cono Sur. Hay entonces una agenda regional en la política exterior argentina, con foco principal en el Cono Sur.

En primer lugar, los países del Mercosur son los principales socios de Argentina en la búsqueda de acuerdos comerciales con actores extrarregionales. La negociación comercial internacional más importante en la que hoy participa Argentina, el posible acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, es una negociación que lleva en conjunto con otros actores regionales. En este caso, hubo un esfuerzo de coordinación que trascendió varias administraciones y que podría llegar a un final exitoso. La posibilidad de concretar el acuerdo hoy depende fundamentalmente de los europeos, pero claramente hubo un esfuerzo de parte de la región por coordinar posiciones y avanzar en el acuerdo. En el vínculo con Europa ya hubo un éxito menor, pero significativo: el acuerdo Mercosur-EFTA (European Free Trade Association), firmado en septiembre 2025.

En conclusión, a pesar de las divergencias ideológicas, hay avance en las negociaciones comerciales y existe alguna posibilidad de supervivencia para el Mercosur a partir de la revitalización de la agenda externa.

Segundo, otro tema que no aparece tanto en la conversación pública, pero que crece en importancia como parte del vínculo entre Argentina y la región, es la producción y exportación de recursos estratégicos para la transición energética global, fundamentalmente energía (gas natural) y minerales (cobre, litio).

El caso del gas natural, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, es notorio: el año pasado el mayor comprador de energía argentina fue Chile, con USD 2844 millones, con especial importancia del gas natural. A ello se suma la reversión del gasoducto norte, que permitió comenzar la exportación de gas a Brasil para proveer a la industria paulista. Estos son ejemplos de una agenda que subsiste a pesar de las diferencias políticas entre los países. En resumen, Vaca Muerta tiene potencial para cambiar la macroeconomía argentina y buena parte de ese cambio está atado a lo que podamos comerciar con nuestros vecinos. En cuanto al litio, existe una coopera-

ción incipiente entre Argentina y Chile en torno al aprovechamiento de este mineral. En 2023 se firmó un Memorándum de Entendimiento mediante el cual se creó el Grupo Binacional de Trabajo de Litio y Salares.

Más allá de los dos temas recién señalados, hay otras áreas en las cuales la coordinación, aunque es menor, existe. Un ejemplo es combate al crimen organizado, un área en la cual han surgido iniciativas regionales e interregionales en los últimos años, como la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una iniciativa del BID que intenta coordinar esfuerzos regionales para combatir el crimen organizado, mediante la cual se espera invertir USD 2500 millones en los próximos tres años en seguridad ciudadana. A nivel interregional, se destaca el PACCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), un proyecto de cooperación entre Europa y América Latina, financiado por la Unión Europea, para combatir el crimen organizado.

Finalmente mencionaría dos temas, en los cuales la agenda con el resto de la región es muy débil. Uno es la cuestión de la democracia a nivel regional. De parte del Gobierno argentino hay un discurso duro contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, dirigido fundamentalmente al público interno, pero no se ven esfuerzos sostenidos para coordinar una agenda con otros países de la región sobre este tema. Es un asunto en el cual Argentina debería tratar de tener una posición más estable y de coordinar esfuerzos con otros actores, en especial Brasil, un actor diplomático clave, en particular en el caso venezolano.

El otro es lo que podríamos llamar las respuestas regionales al proceso de transición hegemónica. Es decir, cómo se posicionan la Argentina y el resto de los países latinoamericanos frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China, y frente al impacto de la transición hegemónica sobre el esquema de gobernanza a nivel mundial.

Hay una discusión académica interesante sobre este tema, en la cual se debaten posturas como el no alineamiento activo (Fortín *et al.*, 2021). Pero a nivel de los Gobiernos no aparece una agenda muy clara sobre cómo posicionarse en los grandes temas de gobernanza a nivel mundial, como los acuerdos sobre cambio climático, la rediscusión de las reglas del comercio internacional y la reforma de los organismos internacionales, por mencionar algunos.

El actual Gobierno argentino ha optado por privilegiar el vínculo con Estados Unidos y no apela a mecanismos de concertación con otros países de la región para discutir este tipo de temas. La decisión (dejando de lado la invitación brasileña) de no ingresar al BRICS, un foro que tiene como una de sus prioridades el rediseño de las reglas de gobernanza a nivel global, es indicativa de la posición del Gobierno.

La capacidad de acción colectiva en América Latina es baja. Históricamente lo ha sido. Los períodos de fragmentación política regional profundizan esa tendencia. De todos modos, de acuerdo con lo que comentábamos anteriormente, persiste cierta capacidad de acción colectiva, que hay que potenciar.

Pablo Ava

A comienzos del siglo XXI, América Latina experimentó una ola política con marcados componentes de lo que Ernesto Laclau (2005) caracterizó como populismo. Este fenómeno, expresado en liderazgos fuertes como los de Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y José Mujica, imprimió una dinámica particular a la diplomacia regional. Este modelo buscó suplantarse el orden institucional surgido de la posguerra, estructurado tradicionalmente en torno a tres pilares: el político, representado por la Organización de los Estados Americanos (OEA); el financiero, articulado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el comercial, canalizado desde 1980 a través de la Asocia-

ción Latinoamericana de Integración (ALADI), orientada a la reducción arancelaria.

El intento de reemplazo de este esquema tradicional obedeció a la crisis global del multilateralismo —evidenciada en el estancamiento de las rondas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el desfinanciamiento de los organismos de cooperación— y al surgimiento de personalidades políticas que modificaron los canales diplomáticos. A diferencia del modelo de la OEA o la ONU, donde la representación recae de manera institucional en los Estados, los nuevos liderazgos priorizaron la diplomacia de cumbre directa entre jefes de Estado. Este vínculo personal derivó en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, posteriormente, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Estas estructuras surgieron como mecanismos de concertación político-ideológica frente a iniciativas impulsadas por Estados Unidos, tales como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) —frenada en la Cumbre de Mar del Plata de 2005— o la Alianza del Pacífico, que nucleaba a administraciones de corte más conservador.

Los esquemas basados en afinidades ideológicas de izquierda y liderazgos personalistas entraron en crisis en consonancia con el deterioro económico regional durante la segunda década del siglo. Se inició entonces un período de alternancia donde convivieron Gobiernos de centroderecha con populismos de centroizquierda. Figuras como Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri marcaron los primeros intentos de instalar una agenda económica y política de corte conservador, en sintonía con corrientes internacionales similares.

Esta tendencia se consolidó con los alineamientos promercado en la región. No obstante, las actuales conducciones de corte neoconservador no han logrado estructurar una agenda de integración regional alternativa. Por el contrario, las prioridades internacionales se han reconfigurado bajo esquemas tradicionales de centro-periferia, privilegiando el vínculo bi-

lateral directo con los Estados Unidos y la inserción en foros globales de matriz ideológica neoconservadora.

Al margen de las narrativas políticas de ambas olas ideológicas, los indicadores estructurales de integración económica muestran una marcada continuidad. El comercio intrarregional en América Latina se mantiene en niveles estructuralmente bajos: mientras que en la Unión Europea el comercio entre sus miembros ronda el 60 % y en Asia el 45 %, en el ámbito latinoamericano apenas alcanza el 14 %. Economías de gran escala como México y Brasil priorizan comercialmente a Estados Unidos y China por sobre sus socios vecinales. En el caso de Brasil, la Argentina ocupa el tercer lugar entre sus proveedores, mientras que, para el mercado argentino, Brasil fue desplazado recientemente por China como principal socio comercial, un movimiento acelerado por las transformaciones logísticas de la pospandemia.

En materia de inversión extranjera directa (IED), las estadísticas relativizan la percepción de una hegemonía absoluta de Pekín en la región. Según datos de la CEPAL, los flujos de inversión hacia América Latina y el Caribe mantienen a Estados Unidos como el principal origen de los capitales, seguido por la Unión Europea. Para la Argentina, el mapa de la IED se concentra de forma histórica en cinco actores principales: Estados Unidos, España, los Países Bajos, Brasil y el Reino Unido. Las tensiones arancelarias bilaterales —como las advertencias de Washington hacia el mercado brasileño— suelen responder a lógicas de sanción o posicionamiento político antes que a desequilibrios reales de las balanzas comerciales, que en el caso de la relación EE. UU.-Brasil es superavitaria para el país norteamericano.

El análisis del desempeño regional demuestra que la política exterior argentina carece de objetivos permanentes de largo plazo similares a los que caracterizan a la diplomacia de Itamaraty en Brasil. Las metas oscilan según el signo político de la administración de turno, aunque subsiste un sustrato de

intereses económicos que mantiene estables los vínculos de mercado con los Estados Unidos.

Por otra parte, los organismos históricos de integración atraviesan un proceso de parálisis operativa. Bloques como la ALADI y el MERCOSUR enfrentan serias dificultades para cumplir sus metas fundacionales. El estancamiento del MERCOSUR se evidencia en la inactividad de sus órganos de representación, como el Parlamento del MERCOSUR (Parlasur) en Montevideo, cuya falta de funcionamiento por restricciones presupuestarias y desfinanciamiento por parte de los Estados miembros refleja la ausencia de interés político real en sostener esquemas de gobernanza supranacional.

El bajo nivel de articulación económica regional plantea desafíos estratégicos de cara al escenario global. Aunque la presencia de China en materia de inversión directa no es dominante en términos agregados, Pekín disputa áreas críticas de infraestructura tecnológica, como el despliegue de las redes de telecomunicaciones 5G. Esta disputa introduce condicionalidades directas en las negociaciones de la Argentina con los Estados Unidos. El acceso a beneficios financieros e internacionales provistos por Washington aparece crecientemente asociado a compromisos específicos en materia de propiedad intelectual, patentes medicinales y la adopción exclusiva de estándares tecnológicos norteamericanos en detrimento de firmas asiáticas como Huawei.

Finalmente, la dinámica hemisférica muestra un cambio de comportamiento político en Washington. Tradicionalmente, las administraciones del Partido Demócrata manifestaban un mayor interés relativo por la agenda latinoamericana. En el escenario actual, los sectores vinculados al Partido Republicano —influenciados por el activismo de los *lobbies* conservadores hispanos— despliegan una atención sistemática hacia la región. Esta estrategia busca consolidar reformas desregulatorias y contener la proyección geopolítica de China en el continente, bajo la hipótesis de un riesgo de dependencia económica similar al verificado en los mercados africanos.

Conclusión

El escenario internacional contemporáneo está definido por el debilitamiento de la arquitectura multilateral nacida en la posguerra y por la parálisis de los esquemas tradicionales de gobernanza económica mundial. La pérdida de centralidad de instituciones clave como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) coincide con un repliegue de los mecanismos de financiamiento y supervisión de Bretton Woods. Este vacío ha sido ocupado por una reconfiguración de la política exterior de las grandes potencias bajo lógicas marcadamente transaccionales y bilaterales.

Por un lado, a través de la doctrina *Make America Great Again* (MAGA), Washington prioriza los intereses internos mercantiles, industriales y de seguridad nacional mediante el uso de aranceles punitivos, la presión sobre cadenas de suministros críticas y la desatención a los foros tradicionales como el G7 o el G20. El balance norteamericano se desplaza de manera pragmática entre el *hard power* —ejercido mediante despliegues de fuerza y disuasión selectivos— y el *soft power* (Nye, 1991), reconvertido en condicionamiento financiero y comercial directo. Por otro lado, China consolida una diplomacia de potencia de matriz económica y conectividad global a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, supliendo el repliegue occidental mediante el financiamiento soberano de infraestructuras críticas y el despliegue de una diplomacia tecnológica que busca la exclusividad en telecomunicaciones 5G, inteligencia artificial y comercio digital. Finalmente, Rusia utiliza la disuasión militar y el control de vectores energéticos para tensionar el Atlántico Norte y el este europeo, articulando alianzas de conveniencia comercial con potencias asiáticas frente a la presión de Occidente.

La administración de Javier Milei marca el inicio de una nueva etapa en la inserción internacional de la Argentina, caracterizada por una ruptura de los consensos diplomáticos

históricos de autonomía y un acoplamiento directo y explícito a la matriz ideológica y geopolítica de la administración norteamericana. Este alineamiento se traduce en el retiro o votación coordinada en foros multilaterales y en una concentración inédita de la actividad presidencial y diplomática hacia los Estados Unidos.

Esta vinculación preferencial asume un carácter marcadamente pragmático para el frente interno, enfocado en la búsqueda de una intervención directa de Washington que funcione como garantía colateral para estabilizar las urgencias financieras del programa macroeconómico. Esta asistencia ha tomado formas excepcionales en materia de arquitectura monetaria y de divisas a través de la intervención activa del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado de cambios local para contener el valor del dólar, sumado a la habilitación de una línea de crédito *swap* bilateral de 20.000 millones de dólares para proveer liquidez ante desequilibrios de la balanza de pagos. Asimismo, el avance en un acuerdo de preferencias arancelarias para sectores como la carne y el acero busca dinamizar las exportaciones locales y amortiguar los costos arancelarios globales, convirtiendo esta relación en el eje casi excluyente de la política exterior nacional.

La adopción de una vinculación privilegiada con Washington introduce una tensión estructural con la trayectoria histórica y comercial de la Argentina. Históricamente, el pragmatismo diplomático argentino le permitió diversificar riesgos y expandir mercados sin que los alineamientos políticos bloquearan las corrientes de intercambio con socios estratégicos. El diseño actual de inserción internacional, en cambio, genera un distanciamiento o parálisis en tres frentes obligatorios de la agenda exterior.

En primer lugar, se verifica un abandono progresivo de la coordinación política con Brasil y el Mercosur, priorizando el diferendo ideológico por sobre los encadenamientos productivos tradicionales del bloque de integración. En segundo lugar, la agenda con la Unión Europea permanece supeditada al

estancamiento del acuerdo MERCOSUR-UE; si bien se abren canales paralelos vinculados a la seguridad de suministros, la transición energética y proyectos de licuefacción de GNL vinculados a Vaca Muerta, su concreción requiere un marco de previsibilidad institucional que todavía está en negociación. En tercer lugar, las relaciones con China y los mercados emergentes ingresan en una fase de latencia, evidenciada en la suspensión de las obras de las represas patagónicas y en la compleja administración de la base de observación espacial en Neuquén, sobre la cual se superpone la creación de una base logística antártica conjunta con los Estados Unidos en Tierra del Fuego.

El balance de este trabajo demuestra que el escenario económico global sigue siendo potencialmente beneficioso para el perfil exportador argentino en materia de *commodities* alimentarias, minerales y energéticas. Sin embargo, la estrategia de atar la suerte macroeconómica a la asistencia discrecional de una administración extranjera plantea un horizonte de fragilidad estructural, dado que la ayuda financiera para subsanar el déficit de dólares no proviene del flujo genuino del comercio exterior, sino de una arquitectura precaria de deuda y asistencia cambiaria sujeta a la voluntad política de Washington.

A cambio de este sostén, la Argentina enfrenta crecientes condicionalidades en su toma de decisiones estratégicas de mediano y largo plazo. Estas contraprestaciones incluyen la presión directa para la exclusión de proveedores asiáticos en el despliegue de infraestructura crítica de telecomunicaciones, la exigencia de concesiones en materia de patentes medicinales y propiedad intelectual, y el riesgo de represalias comerciales por parte de socios de gran escala ante alineamientos automáticos de seguridad. Los próximos dos años constituirán el período de prueba para evaluar si este esquema transaccional de subordinación preferencial logra consolidar un modelo de estabilización económica sostenible o si exacerba la vulnerabilidad externa del país en un mundo crecientemente fragmentado.

Referencias

Barletta, M. y Trinkunas, H. (2004). Regime Type and Regional Security in Latin America: Towards a Balance of Identity Theory. En T. V. Paul, J. J. Wirtz y M. Fortmann (eds.), *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century* (pp. 334-356). Stanford University Press.

Fortin, C., Heine, J. y Ominami, C. (Eds.). (2021). *El no alineamiento activo y América Latina: Una doctrina para el nuevo siglo*. Editorial Catalonia.

Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Fondo de Cultura Económica.

Nye, J. S. (1991). *La naturaleza cambiante del poder norteamericano*. Grupo Editor Latinoamericano.

Secretaría de Finanzas. (2022). *Deuda de la Administración Central: IV Trimestre 2022*. Ministerio de Economía de la Nación Argentina. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacion_grafica_ivt22.pdf

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Waveland Press.

Los autores

Por orden alfabético.

Pablo Ava

Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Belgrano) y abogado (Universidad de Buenos Aires). Máster en Derecho y Economía (Universidad Torcuato Di Tella). Doctor en Filosofía (Universidad del Salvador). Becario de la Fundación Ortega y Gasset, y del Latin American Project Rice University y Baker Institute for Public Policy. Profesor en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires.

Miranda Bandoni

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y maestranda en Economía Aplicada en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente, se desempeña como economista en la Gerencia de Análisis Macroeconómico del Banco Central de la República Argentina. Es miembro del Grupo Joven del CARI y del Comité de Economía Internacional del CARI.

Silvana Lorena Barrios

Licenciada en Ciencia Política con Orientación en Relaciones Internacionales (UBA). Especialista en Estrategia y Política de Defensa, con énfasis en la Construcción Institucional de Seguridad y Defensa, y en Cooperación Conjunta e Interagencial (CHDS-Washington, DC). Diplomada en Inteligencia de Escenarios Internacionales (ENI). Doctoranda en Relaciones Internacionales (USAL). Es Cooordinadora del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI.

Bruno Binetti

Associate Fellow en el programa de Estados Unidos y las Américas de Chatham House en Londres. Se especializa en el papel de las economías emergentes en la gobernanza global, con especial foco en China, la diplomacia climática, la transición energética y la geopolítica de minerales críticos. Es doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics.

José Octavio Bordón

Presidente del CARI (2020-2023). Embajador de Argentina en Estados Unidos (2003-2008) y Chile (2016-2019). Fue gobernador de la provincia de Mendoza desde 1987 hasta 1991, además de diputado nacional (1983-87) y senador nacional (1992-96) por aquella provincia.

Rodolfo Caffaro Kramer

Graduado en Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA); maestría en Derecho Aeronáutico y Espacial en el INDAE (Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial); profesor adjunto de Derecho Aeronáutico y Satelital en la Universidad de Buenos Aires (UBA); posgrado en Arbitraje y Derecho Internacional en la Universidad de Köln, Alemania, bajo el patrocinio del Prof. Karl Heinz Böckstiegel. Presidente a nivel internacional de la Cámara de Comercio birregional MERCOSUR ASEAN (MACC). Lideró misiones comerciales durante los años 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025 a Singapur, Filipinas, Malasia, Vietnam, Indonesia, Myanmar y Camboya, como así también a Sao Paulo, Goias, Montevideo, Brasilia y Asunción.

Diego Cagliolo

Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (Universidad Católica Argentina). Analista internacional y consultor estratégico especializado en Asia y China, con amplia experiencia en asuntos públicos y gubernamentales en Argentina. Director de Proyección Estratégica al Asia en la Fundación Argentina Global, miembro del CARI e integrante de sus grupos de trabajo sobre China, India y BRICS+. Exsubsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Provincia de Buenos Aires.

Lucas Chiodi

Principal de Investigación en Quipu Advisors. Se desempeñó en la División de Comercio y Desarrollo de la OMC y en la Secretaría Académica del CARI. Es magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Europeo. Actualmente coordina el Grupo de Reflexión OCDE-CARI.

Patricio Dellagiovana

Especialista en Relaciones Internacionales y desarrollo agroalimentario. Es coordinador general del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina (UCA), coordinador del Comité de Asuntos Agrarios del CARI, delegado de la Sociedad Rural Argentina y miembro de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se desempeña como coordinador de Vinculación Internacional de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de la UCA y profesor titular de Elementos de Ciencia Política en UCEMA. Cuenta con un máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina por la Universidad de Bolonia y experiencia en políticas públicas, cooperación internacional y asuntos agroalimentarios. Ha trabajado en iniciativas vinculadas con seguridad alimentaria, producción agropecuaria, comercio internacional y desarrollo sostenible, incluida su experiencia como Visiting Assistant in Research y Affiliate Fellow en Yale University.

Susanne Käss

Licenciada en Estudios de Idiomas, Economía y Estudios de Espacios Culturales por la Universidad de Passau, trabaja para la Fundación Konrad Adenauer desde hace 15 años y dirige la oficina exterior en Argentina desde el 1 de agosto de 2022. Anteriormente, trabajó como representante adjunta en México y como representante en Bolivia, y directora del Programa Regional de Participación Indígena en América Latina. Se desempeñó como referente del Departamento de Asia en la casa matriz en Berlín. De enero de 2018 a abril de 2022, dirigió el Departamento de Recursos Humanos para el Personal en el Exterior de la Fundación Konrad Adenauer.

Elsa Llenderrozas

Politóloga por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Universidad de San Andrés, Argentina; y magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona, España. Profesora en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Universidad Nacional de La Plata y CEMA. Fue becaria René Hugo Thalmann de la UBA en el IBEI (Barcelona), participó del programa de especialistas de Fulbright en Bard College (New York) y fue Alumni del Center Hemispheric of Defense Studies (Washington DC).

Jorge E. Malena

Director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI y miembro del Grupo de Trabajo sobre China del Comité de Asuntos Asiáticos (CARI). Doctor y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina (UCA), magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres. Director de la Especialización en Estudios sobre China en la Era Global (UCA).

Juan Miguel Massot

Doctor en Ciencias Económicas (UBA). Estudios de Doctorado en Ciencia Política (USAL), Maestría en Economía Financiera (U. Londres), en Economía y en Políticas Públicas (Di Tella), en Economía (UB), estudios de Posgrado en Historia (UTDT) y contador público nacional (UNL). Fue vicerrector económico y director de Investigaciones Económicas (USAL). Profesor (UBA; UB; UNDEF, UA). Exasesor económico de la Delegación de la Comisión Europea en Argentina, funcionario argentino y consultor económico. Autor de libros y artículos científicos. Miembro consejero del CARI, de la World Economic Association y de la Asociación Argentina de Economía Política.

Juan Maximiliano Moreno

Director de la Fundación INAI (Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales). Anteriormente, trabajó durante más de 25 años en el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. Desde febrero de 2018, estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Mercados Agroindustriales Internacionales. Es abogado (Universidad de Buenos Aires), con mención en derecho económico de los negocios. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales (FLACSO) y un posgrado en Procesos de Integración Regional (Universidad Nacional de Tres de Febrero).

Tomás Múgica

Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario), máster en Estudios Internacionales (University of Denver, Estados Unidos) y máster en Política Comparada (London School of Economics and Political Science, Reino Unido), doctorando en Ciencias Políticas (Universidad Católica Argentina, UCA). Director del Centro de Estudios Internacionales de la UCA (CEI-UCA) y docente de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales (UCA).

Beatriz Nofal

Doctora (Ph.D.) en Desarrollo Económico por la Universidad de Johns Hopkins. Directora del Comité de Estados Unidos del CARI. Fue sherpa del G20 de Argentina (2016-17), presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (2006-10), diputada nacional (1999-2002) y subsecretaria de Industria y Comercio Exterior (1986-88), negociadora de los acuerdos de integración entre Argentina y Brasil, pilar del Mercosur. Socia de Eco-Axis, consultora en economía y negocios. Consultora del BID, del Banco Mundial y la CAF. Fue CEO de Arthur D Little Argentina y directora de KPMG. Fue profesora en MIT, Univ. Johns Hopkins, y Toronto; ITBA, Univ. Católica y de Bologna en Buenos Aires. Fue condecorada por Brasil (Orden del Río Branco), Chile (Orden de San Martín) y Francia (Legión de Honor). Autora de numerosas publicaciones.

Sabrina Olivera

Magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales. Especialista en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India. Abogada con orientación en Derecho Internacional Público. Becaria del Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme 2018. Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre India del CARI.

Nadia G. Radulovich

Doctora en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador-CONICET). Magíster en Estudios del Asia Pacífico (TKU). Licenciada en Estudios Orientales (Universidad del Salvador). Cooordinadora del Grupo de Trabajo del Sudeste Asiático e integrante del Grupo de Trabajo sobre China del CARI. Profesora universitaria e investigadora. Directora del Capítulo de Indonesia y el de Malasia en la Cámara del Asia.

Lía Rodríguez de la Vega

Subdirectora del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI y miembro de los Grupos de Trabajo sobre India y sobre Asia del Sur, del citado comité, y del Grupo BRICS+. Licenciada en Estudios Orientales y doctora en Relaciones Internacionales. Realizó estancias posdoctorales en Brasil (2009) e India (2016). Es también directora de la Licenciatura en Estudios Internacionales y la Diplomatura en Estudios de Asia (Universidad Nacional del Chaco Austral).

Julia Alicia Romero Moreno

Economista y máster en Planeación y Desarrollo. Docente universitaria; exconsejera económica y agregada comercial de la Embajada de Colombia en Argentina. Cooordinadora del Grupo de Trabajo sobre Japón del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI.

Clara Sánchez

Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO/San Andrés). Licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador. Especialista en Defensa Nacional (Escuela de Defensa Nacional). Becaria ITEC en el RIS (Research and Information System for Developing Countries) y en National Defense College (NDC) (Nueva Delhi). Coordinadora del Grupo de Trabajo de Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI y profesora del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires.

Cornelia Schmidt-Liermann

Directora del Comité de Asuntos Europeos del CARI. Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad Nacional. Directora Nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación. Abogada, ejerció como diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires (PRO) de 2011 a 2019 y presidió la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Investigadora de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Fue galardonada en 2020 con la Gran Cruz de Mérito de la República de Alemania.

Renato Carlos Sersale di Cerisano

Es diplomático de carrera (1979–2020 y convocado en 2024), especializado en gestión bilateral, multilateral y cooperación al desarrollo. A lo largo de su trayectoria, fue embajador ante el Reino Unido, Sudáfrica y nueve países de la SADC, además de funcionario internacional de la ONU y director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). Ha ocupado representaciones ante la FAO, el PMA y el FIDA, la Asamblea General de la ONU y Hong Kong. En la Cancillería argentina, se desempeñó en las áreas de temas económicos, derechos humanos, seguridad internacional y asuntos nucleares y espaciales. Licenciado en Economía con estudios de posgrado, fue distinguido con el Premio Konex en 2008 y actualmente es consejero consultivo del CARI.

Julio Sevares

Economista y doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Coodinador del Grupo de Trabajo sobre China del CARI. Miembro del Grupo de Trabajo sobre el Sudeste Asiático del CARI. Es también profesor de la Especialización en Estudios Chinos en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

Josefina Vecino Beauge

Economista (Universidad de Buenos Aires) y magíster en Economía y Política Internacional (UDESA). Cuenta con una especialización en Economía Ambiental (Vrije Universiteit, Países Bajos). Sus campos de trabajo son la comercialización de materias primas y certificaciones del comercio internacional. Actualmente, se desempeña como coordinadora general de VISEC, la Plataforma Nacional para Soja y Carne vacuna libre de deforestación, y es coordinadora del Comité de Economía Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Gabriela Yoshihara

Abogada (Universidad Católica Argentina) y máster de Estudios Japoneses de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), España. Posgrado en International Christian University ICU (Tokyo) y Universidad de Kobe (Kobe), Japón. Docente de la Cátedra JICA-UNLP (Japan International Cooperation Agency-Universidad Nacional de La Plata) y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Japón del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI.

Carolina Zaccato

Ph.D. en Relaciones Internacionales, con máximos honores, por la University of St Andrews (Reino Unido), MSc en Relaciones Internacionales, con distinción, por la London School of Economics and Political Science (LSE)

(Reino Unido), y licenciada en Relaciones Internacionales, *summa cum laude*, por la Universidad de San Andrés (UdeSA) (Argentina). Es profesora en la School of Politics, Economics, and Global Affairs (SPEGA) de la IE University (España), investigadora visitante en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de Madrid (España), investigadora asociada del St Leonards' College y del Centre for Global Law and Governance (CGLG) de la University of St Andrews (Reino Unido), y miembro del Comité de Estudios de Asuntos Latinoamericanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Por su destacada labor docente a nivel universitario, ha sido nombrada como *Fellow* de la Higher Education Academy (FHEA) del Reino Unido.



CARI /

 KONRAD
ADENAUER
STIFTUNG